

EL CONTENIDO ANTIMPERIALISTA, DEMOCRATICO  
Y REVOLUCIONARIO DE LA ESTRATEGIA  
ANTIFASCISTA DEL PARTIDO COMUNISTA DE  
CHILE. 1980 - 1987.-

OREL VICIANI.

DICIEMBRE DE 1988.-

EL CONTENIDO ANTIMPERIALISTA, DEMOCRATICO  
Y REVOLUCIONARIO DE LA ESTRATEGIA  
ANTIFASCISTA DEL PARTIDO COMUNISTA DE  
CHILE. 1980 - 1987.-

OREL VICIANI.

DICIEMBRE DE 1988.-

## INTRODUCCION

Chile es uno de los países latinoamericanos que con mayor singularidad ha vivido el largo período de crisis de dominación capitalista e imperialista en la región, puesta ya definitivamente en evidencia por el triunfo de la Revolución Cubana. Al fracaso del gobierno conservador de Jorge Alessandri -en el que directamente gobernaron los gerentes de las más grandes empresas capitalistas- le siguió la versión más sofisticada del reformismo burgués con el que entonces el capitalismo intentó una salida a su crisis: la llamada "revolución en libertad" del demócratacristiano Eduardo Frei. A ella le siguió un proceso revolucionario de verdad, en condiciones hasta entonces inéditas en la región. Este fué sangrientamente interrumpido por una dictadura fascista que ya se prolonga por quince años. Tomando todo el período en su conjunto -con su fase de ofensiva popular, de contraofensiva imperialista, y de nueva ofensiva popular-, podría decirse que Chile es el país latinoamericano que lo ha estado viviendo en sus formas más acabadas. Eso, desde ya, motiva el interés investigativo; sobretudo si ese interés centra su atención en el destino histórico de la crisis, sobre la base del estudio de los datos que ella misma nos entrega en el presente.

De esos datos, el más importante que nos dá el caso de Chile es la existencia de un poderoso movimiento popular, de considerable experiencia política y sentido de la organización, en cuyo seno la influencia del marxismo-leninismo, la gravita-

ción de una izquierda que ha gobernado ya dos veces y la presencia de un Partido Comunista cuyo arraigo en las masas lo ha transformado en factor de la historia política del país, constituyen realidades determinantes.

Es un axioma de la historia que los períodos de crisis ponen en evidencia todo aquello que en otro momento no fué enteramente advertido, y es por ello que ofrecen un material excepcional para la investigación. Es entonces cuando las verdaderas y más importantes tendencias marcan de un modo más nítido la perspectiva más racional. En todo caso, poseen también sus apariencias y el trabajo científico tiene que cumplir, de todos modos, su obligatorio itinerario de tomar el fenómeno concreto, ir a su esencia, para luego retornar a la superficie ahora ya con el fenómeno explicado.

Estas reflexiones preliminares y básicas han estado en el porqué de la escogencia de este tema y en la determinación del período en estudio. Este análisis responde a la necesidad de aportar, a través del caso chileno, algunas conclusiones sobre la perspectiva histórica de una región de la cual tantas veces se ha dicho que está preñada de revolución -Chile mismo lo estuvo y lo está-; pero cuyo parto consiste en romper las ataduras de la dependencia económica, política y militar respecto del imperialismo norteamericano. Esa dependencia se ha reforzado al mismo tiempo que ha entrado en una profunda crisis de la que el imperio ha intentado salir hasta con el recurso del fascismo y de la invasión militar directa. El problema es poder vislumbrar cual es la salida para los pueblos de la región. Una salida realista y definitiva, porque la ex-

perencia misma está demostrando que para aquellas naciones latinoamericanas que lograron poner fin a los regímenes dictatoriales conquistando gobiernos civiles de inspiración democrático-burguesa la amenaza no ha pasado.

La pronunciada internacionalización de los intereses políticos y estratégico-militares del imperialismo y la extendida transnacionalización de la economía capitalista hacen de la solución democrático-burguesa -y más aún cuando esta adquiere más bien los rasgos de una contemporánea versión demoliberal- una salida cada vez más precaria. Pero la revolución socialista no está a la vuelta de la esquina; por ello es que los partidos comunistas de la región comparten, en términos generales, la definición de una revolución democrática, popular, antioligárquica y antimperialista como aquella para la cual sí existen condiciones que la convierten en una posibilidad real y que sí tiene derecho a plantearse la perspectiva del socialismo.

Pero esa perspectiva general necesita transformarse en un proyecto concreto que, asumiendo enteramente el marco actual de la situación regional, sea capaz de imaginar una transición cuya viabilidad surge del realismo con que se recojan cada una de las especificidades de cada país: la historia de sus instituciones, las particularidades de su desarrollo económico, el momento exacto en el que él se encuentra y sus tendencias más probables, el movimiento de su estructura de clases y la conducta de éstas hacia el cambio social, el sistema de partidos políticos y su influencia sobre la sociedad, las tradiciones culturales de ésta, etc., con el objeto de trazarse

una vía concreta a través de la cual abrirle paso.

El proyecto de democracia avanzada elaborado por los comunistas y otras fuerzas de la izquierda chilena como plataforma programática de una salida revolucionaria a la crisis del fascismo responde, para el caso de Chile, a este tipo de esfuerzo. Su promoción tiene en cuenta, sin embargo, que el objetivo nacional básico y más prioritario es el desplazar a Pinochet del poder y poner término a su régimen. Por ello es que en el caso chileno se da una peculiar dialéctica entre la postulación del proyecto revolucionario y la necesidad de establecer acuerdos más amplios que pueden significar, en lo inmediato, la posibilidad de una salida más limitada. La estrategia elaborada por los comunistas y otras fuerzas de izquierda -desde los inicios del período de crisis del fascismo- para abrirle paso a la salida más avanzada que sea posible es la política de rebelión popular de masas; que contempla el desarrollo más amplio de la unidad y de la movilización combativa de éstas haciendo uso de las más diversas formas de lucha. Ella ha sido respaldada por el movimiento real de las masas, mostrando su eficacia a pesar de las vacilaciones y de la política excluyente hacia los comunistas practicada por los sectores opositores de centro-derecha.

En el presente estudio se analiza el punto de partida de la política antifascista de los comunistas chilenos -es decir, la caracterización del régimen dictatorial como un caso de fascismo dependiente- y su evolución estratégica y táctica. Como toda línea política, ésta ha tenido y tiene partidarios e impugnadores no sólo en el campo propiamente de la acción polí-

tica misma, sino también en el de la teoría e investigación científica.

Particular intensidad alcanzó, por ejemplo, la polémica -que se mantiene en la actualidad, aunque con acentuaciones distintas- acerca del carácter del régimen dictatorial. El referente histórico del fascismo europeo existente entre las dos guerras mundiales y la caracterización que sobre él hiciera, luego de todo un período de intensos debates, la Internacional Comunista en su VII Congreso, ha sido empleado por unos para afirmar el carácter fascista de la dictadura chilena y por otros para desmentirlo. Estos últimos han preferido hacer hincapié en los rasgos específicos de cada caso y no en su esencia de clase. La metodología empleada ha consistido, en términos generales, en construir una suerte de prototipo de dictadura fascista en base a las especificidades que presentaron los casos alemán e italiano y, al realizar el análisis comparado, concluir que la ausencia de esas especificidades eran dato suficiente como para desechar la definición de dictadura fascista respecto del caso chileno y, en consecuencia, sugerir otras. Es la tendencia que advertimos, por ejemplo, en los estudios realizados por Luis Maira; para quien resulta preferible la denominación de "Estado de Seguridad Nacional"/1/.

En general, los autores que han trabajado con restricciones de tipo histórico-formal y geográfico han deducido que la definición de fascista para un régimen como el de Pinochet ha estado destinada a traer consecuencias políticas negativas. Es el caso de Tomás Amadeo Vasconi que prefiere definirla simplemente como "Estado Militar"/2/; o el de Ruy Mauro Marini, para

quien lo característico de su concepto de "Estado de Contrainsurgencia" -respecto del cual acepta "similitudes formales con el Estado fascista, así como con otros tipos de Estado capitalista"- es una "peculiar esencia corporativa" entre "la burguesía monopolística y las fuerzas armadas"/3/.

Hay también otros casos que, a diferencia de los anteriores, tienen un nivel de simplificación que casi los pone al margen del ámbito científico. Tal cosa podría decirse de las aseveraciones que hace Fernando Mires en el sentido de que, supuestamente, para los comunistas el fascismo "sólo se explica a partir de la pura existencia del capital financiero", sin importarles "qué carácter tuviese una dictadura, qué origen, qué clases de apoyo, qué alianzas representara, qué relaciones políticas, qué ideología. Si se la quería calificar como fascista bastaría demostrar sus relaciones con el capital financiero /.../ Las grandes empresas internacionales -agrega más adelante como quien descubriera algo nuevo- no sienten predilección por los regímenes militares ni por las democracias populistas. Sienten sí predilección -insiste- por cualquier régimen que asegure una estabilidad política a largo plazo y que cree un clima favorable a las inversiones /.../ Tal estabilidad puede ofrecerla a veces, en mejores condiciones, un régimen de democracia representativa que una tiranía militar, o viceversa" /4/.

En cambio hay autores que, como Pío García, con justa razón advierten: "El carácter fascista de un régimen no puede a su vez desprenderse de la sola referencia a la forma de Estado a la que corresponde, disociada del desarrollo de la lucha de

clases que condiciona su modalidad de dominación"/5/.

Nuestro criterio ha sido el de asumir la tan usada -para bien o para mal- definición entregada por Dimitrov en su Informe al VII Congreso como lo que Lenin llamaría "una definición lo más breve posible" que comprende "Lo principal", para extraer de ella "además, otros rasgos muy esenciales de lo que hay que definir", teniendo siempre presente "lo convencional y relativo de todas las definiciones en general, que jamás pueden abarcar en todos sus aspectos las relaciones de un fenómeno en su desarrollo completo"/6/. Es lo que el propio Dimitrov sugiere en su Discurso de Conclusión al afirmar que: "Ninguna definición general del fascismo, por muy precisa que sea, nos exime de la necesidad de estudiar y tener en cuenta de un modo concreto las peculiaridades del desarrollo del fascismo y las diversas formas de la dictadura fascista en cada país, en cada etapa. Es necesario investigar, -nos dice- estudiar, hallar en cada país lo que haya de peculiar, de específicamente nacional en el fascismo y esforzarse por trazar, congruentemente con ello, los métodos y las formas más eficaces de lucha contra él"/7/.

Es lo que nos invita a hacer el chileno Osvaldo Fernández al defender el concepto de fascismo dependiente; cuya noción, en su opinión, "supone precisamente la relación fascismo-imperialismo. Por eso alude a esta nueva forma de manifestarse, un fascismo de periferia que corresponde también a nuevas formas de dominio imperialista. El concepto de fascismo dependiente -dice- implica mostrar el mecanismo interno del régimen chileno"/8/.

Nos hemos detenido en este punto de la polémica porque, como el mismo Fernández explica, "En la disputa sobre la ~~ta~~ interpretación del fascismo se juega, como en todo concepto político, una encarnizada lucha de tendencias. Lo que expresa en fin de cuentas la lucha de clases en su nivel teórico. Pero con el fascismo -advierde- esta disputa adquiere un carácter particularmente agudo porque allí está a la orden del día la pugna por la alternativa de poder"/9/. La experiencia chilena está demostrando ampliamente la validez de este aserto.

El plan de nuestro análisis consiste, en primer término, en estudiar la esencia de clase y los rasgos específicos del régimen dictatorial chileno, con el objeto de ubicar el sistema de contradicciones que se ha formado en la etapa actual por la que atraviesa el país y, ~~xxx~~ en base a este estudio, verificar de qué modo ello es asumido -tanto en lo nacional como en lo internacional, en lo particular como en lo general- por parte del PC. Este análisis lo hemos separado en sus aspectos socio-económicos, político-ideológicos e internacionales.

En segundo lugar, nos hemos propuesto analizar el desarrollo de la línea política del PC de Chile en sus aspectos estratégicos frente al proceso de institucionalización del fascismo. Para ello ha sido necesario estudiar los sucesivos cambios operados en la correlación de fuerzas y los que, como expresión de ello, se han operado en la evolución del régimen. Las generalizaciones estratégicas han sido extraídas de un análisis pormenorizado de la lucha de masas, y de él se sacan también las conclusiones sobre el problema de la pugna hegemónica que está planteada en el seno de la oposición chilena. Fi-

nalmente, de este estudio surge el concepto de ~~xxx~~ la vía por la cual se desarrolla el proceso revolucionario en Chile. La estructura de este sub-tema está hecha de acuerdo a una deducción de periodización que su estudio implica. El objeto de estudio es el período de crisis del régimen dictatorial; pero, para los efectos de fundamentarlo mejor, se ha hecho también un análisis de los antecedentes del período crítico. La investigación realizada sobre este último nos llevó a la conclusión de que debía estar diferenciado en dos fases fundamentales, según sea el desplazamiento de la iniciativa y el estado de maduración de la crisis política.

En tercer término, se ha hecho un estudio de la línea de acción táctica del Partido Comunista, en base a un análisis detallado de las experiencias arrojadas por la lucha concreta de las masas. Este estudio implica abordar la explicación de cómo y porqué la crisis económica se transforma en una crisis política del fascismo en el poder, de cómo ello se manifiesta, y establecer un análisis comparado del proyecto democrático de las fuerzas revolucionarias con el proyecto liberal de salida a la crisis.

El estudio de las relaciones entre las dos grandes crisis económica, vividas bajo el régimen dictatorial y su crisis política ha sido hecho en base a las tesis marxistas-leninistas sobre la dialéctica existente entre la superestructura y la base económica en toda formación económico-social. Entendiendo tanto el rol determinante en última instancia que juega la economía, como el hecho de que la política sea la expresión concentrada de ella; lo cual la dota de una autonomía relativa.

con lo que es su núcleo manual-industrial.

El proceso de desarrollo del concepto de rebelión popular de masas por parte del PC y el de su realización por las masas ha sido analizado a partir de las teorías marxistas-leninistas sobre la actividad de éstas como actividad transformadora, el rol del individuo en la historia, la teoría leninista sobre el partido revolucionario y sobre la revolución, así como las sintetizaciones sobre el rol y la independencia relativa de la conciencia social.

En la caracterización del proyecto reformista de salida a la crisis del fascismo se ha preferido la denominación de liberal al de democrático-burgués en base a las sistematizaciones que hace Lenin para diferenciar a toda democracia del liberalismo.

Para el estudio del fascismo se utilizaron los documentos de la Internacional Comunista y los trabajos de Dimitrov, Togliatti y Gramsci. Asimismo, las teorías leninistas sobre el Estado y el imperialismo. El concepto de capital financiero empleado es el utilizado por Lenin. En las consideraciones más específicas sobre el capital transnacional se han tenido en cuenta, obligatoriamente, los aportes hechos por muchos autores contemporáneos. Lo mismo ha ocurrido respecto al estudio del fascismo. En particular, para la comprensión del concepto de fascismo dependiente se han utilizado trabajos de autores comunistas actuales, así como también se ha hecho un empleo crítico de autores latinoamericanos contemporáneos que han participado en las elaboraciones de la teoría de la dependencia.

En cuanto al uso de documentos, han sido empleados los del XXVII Congreso, la XIX Conferencia y otros del PCUS. Así también muchas de las intervenciones de la reunión de partidos y movimientos realizada en Moscú con ocasión del 70 aniversario de la revolución de Octubre. También los de Fidel Castro y el PC de Cuba sobre el problema de la deuda externa y aquellos emanados de las tres reuniones de los partidos comunistas de América del Sur. Del Partido Comunista de Chile ha sido utilizada la totalidad de sus documentos oficiales emitidos con posterioridad al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

En conclusión, el estudio de la estrategia antifascista del Partido Comunista de Chile en el período señalado tiene como objetivo visualizar la viabilidad de una salida revolucionaria a la crisis del fascismo y sacar, sobre los datos de la etapa actual, algunas conclusiones para un futuro proceso de transición revolucionaria que haga irreversible el desarrollo consecuente de la democracia impidiendo, ~~xxx~~ para siempre, la reedición de ~~la~~ dictadura fascista.-

## Notas a la Introducción

- 1.- véase Luis Maira, "Notas para un estudio comparado entre el estado fascista clásico y el estado de seguridad nacional". En "El Control político en el Cono Sur", Ildis, Siglo XXI, varios autores, México, 1978.
- 2.- véase Tomás Amadeo Vasconi, "Los estados militares: función histórica y alternativa de recambio", ~~xxxx~~ revista "Ko'eyu Latinoamericano", Caracas, 1982, No 23.
- 3.- véase Ruy Mauro Marini, "La cuestión del Estado en las luchas de clases en América Latina", revista "Monthly Review", octubre 1980.
- 4.- Fernando Mires, "Para una crítica a la teoría del fascismo latinoamericano", ALAI, Montreal, 1980, No 9, p. 100.
- 5.- Pío García, "Notas sobre formas de Estado y regímenes militares en América Latina", ALAI, Montreal, 1980, No 44, p. 518.
- 6.- Lenin, "El imperialismo, fase superior del capitalismo", OCEE en doce tomos, Progreso, Moscú, t. V, p. 459.
- 7.- Dimitrov, Discurso de conclusión ante el VII Congreso de la Internacional Comunista, 13 de agosto de 1935. En "La unidad de la clase obrera", Sofía-Press, 1968, pp. 86-87.
- 8.- Osvaldo Fernández, "El discurso de la represión", revista "Araucaria" No 3, Madrid, pp. 11-33.

9.- ib.

Capítulo Primero: Esencia de clase y rasgos específicos del régimen dictatorial. Apreciación científica de la discusión en torno a su carácter.-

---

La estructuración y desarrollo de la estrategia antifascista del Partido Comunista de Chile parte de una definición sobre el carácter del régimen dictatorial, su esencia de clase y sus rasgos específicos. Es, en las condiciones concretas del Chile actual, una aplicación teórica y práctica de la metodología marxista-leninista según la cual todo el plan general de acción estratégica, y por tanto también la esencia de la línea táctica, se deducen de la caracterización del enemigo principal y de la contradicción principal cuya solución ha pasado al primer plano de la orden del día. Tal es la razón por la cual este estudio comienza con el análisis de este tema.

La necesidad política, teórica y práctica de este análisis radica, pues, en el hecho de que sólo partiendo de él podrá entenderse la racionalidad profunda de una línea de acción y de una propuesta programática que tanta gravitación ha tenido en los acontecimientos de Chile, sus posibilidades de diagnóstico correcto de la situación -tanto en el plano nacional, como regional e internacional-, sus capacidades de establecer las alianzas necesarias, su potencialidad subjetiva frente a los cambios de la correlación de fuerzas y su sentido tanto de la experiencia como de la perspectiva histórica.

La discusión sobre el carácter del régimen dictatorial chileno no ha girado, por cierto, en torno a preguntarse si

es o no una dictadura abiertamente terrorista y contrarrevolucionaria. El problema está en que, efectivamente, la historia de América Latina -en el siglo pasado y en éste- ha estado plagada de golpes de Estado y de dictaduras abiertamente terroristas y contrarrevolucionarias que nadie se atrevió a definir como fascistas. Por otra parte, está el hecho ya anotado de que las dictaduras fascistas europeas existentes entre las dos guerras mundiales presentaron rasgos específicos que en realidad establecen una distancia entre ellas y el régimen dictatorial chileno. La cuestión tampoco queda resuelta al constatar tan sólo de que se trata del dominio del capital financiero; por lo menos en la forma tan simple que Fernando Mires pretende imputar a los comunistas.

Lenin decía que: "Tanto el capitalismo como el imperialismo, tal como lo demuestran los hechos, se desarrollan bajo cualquier forma política, dominando a todas" /1/. Y a pesar de que al escribir estas palabras aún no existía el fascismo ni siquiera como movimiento político, hay que reconocer que la historia le ha seguido dando la razón a Lenin. Porque el capital financiero domina y se desarrolla hasta bajo regímenes que son o posan de reformistas. Y ya que Mires habla de "predilecciones", habrá que decir que el capital financiero no siente ninguna predilección por el fascismo, porque es la solución que le resulta más costosa. Por ello es que no recurre a su dictadura sino cuando le es imprescindible y a la vez posible; lo cual está determinado por una coyuntura histórica muy concreta caracterizada, de una parte, por la existencia de un movimiento revolucionario cuyo auge resulta indetenible por los medios coercitivos "normales" de toda dominación burguesa -por

lo menos en la previsión fundada de la oligarquía financiera-, y, al mismo tiempo, dicho movimiento no está en condiciones de detener la agresión fascista. Y porque le es la solución más costosa es que el capital financiero trata de crear las condiciones para superarla en cuanto la segura salvaguarda de sus intereses de desarrollo y de dominación se lo permiten.

Lo que los comunistas afirman es que cuando un régimen dictatorial abiertamente terrorista y contrarrevolucionario es el propio poder del capital financiero se está en presencia de una dictadura fascista. Y mientras exista esa premisa material fundamental -el capital financiero, la oligarquía financiera- el movimiento revolucionario de un país tendrá que contar con la posibilidad de que, en una coyuntura histórica cuyos rasgos principales acabamos de anotar, dicha dictadura pueda imponerse. En la actualidad tal posibilidad debe verse atendiendo al grado de desarrollo del capitalismo y del imperialismo contemporáneos, de la internacionalización de sus intereses políticos y estratégico-militares y de la transnacionalización de su economía. En América Latina ello dice relación en particular con el imperialismo norteamericano.

La dilucidación correcta y precisa de la esencia de clase de un régimen dictatorial como el chileno tiene suma importancia, entonces, no sólo para ubicar y definir la contradicción principal cuya solución ha pasado al primer plano de la orden del día, sino para comprender también cuál es el sentido histórico más profundo de esa solución, en qué condiciones puede ser una ~~única~~ solución realmente definitiva. Eso es lo determinante, lo fundamental; más no lo único. Porque esa contradicción

principal es el eje de todo un sistema de contradicciones de cuya solución depende, dialécticamente, la solución de la contradicción más importante. Es el conjunto de todo este sistema contradictorio el que determina los rasgos específicos con que se expresa concretamente la esencia de clase del régimen dictatorial. Estudiar estos rasgos es, entonces, demostrar lo particular y lo general de dicho sistema. Lo haremos analizando los aspectos socio-económicos, políticos e ideológicos con que se presenta la dictadura fascista en Chile, así como las condiciones internacionales de su surgimiento y evolución.

#### Aspectos socio-económicos del régimen dictatorial chileno.

El golpe militar fascista en Chile y la instalación de la larga dictadura que le ha sucedido, como toda contrarrevolución victoriosa de nuestra época, es una gran operación de salvataje del capitalismo. Pero, específicamente, la misión histórica que se asigna al fascismo llegado al poder en Chile es, en esencia, la reestructuración de la oligarquía financiera y la reimposición de su predominio tan seriamente desarticulado en los tres años de proceso revolucionario.

El cumplimiento de esta misión, para resultar exitoso a largo plazo, debía atender dos requerimientos básicos del desarrollo capitalista tanto en el plano nacional como internacional: a/ intentar la superación de la crisis estructural que viene afectando a la economía chilena, con particular agudeza, a partir del inicio de la década de los años 60 /intento que el gobierno demócratacristiano de Eduardo Frei trató de

realizar a través del reformismo burgués y que el gobierno de Allende se lo trazó en una perspectiva revolucionaria); b) adecuar toda la economía nacional a lo que, particularmente a partir de mediados de la misma década de los años 60, viene siendo el rasgo principal del desarrollo capitalista a nivel mundial; esto es, la transnacionalización de todo el sistema como modo de darle una salida funcional a la agudización de sus contradicciones internas en el marco del Capitalismo Monopolista de Estado

Se trataba, entonces, de fijarse una nueva estrategia de desarrollo económico capitalista que superara el agotamiento en el que habían entrado los patrones tradicionales de acumulación y que practicara los ajustes correspondientes para una nueva reinserción de la economía chilena en la actual División Internacional Capitalista del Trabajo. Para ello, y luego de un período de no pocas pugnas entre los distintos sectores empresariales -y sus respectivas concepciones- que habían participado de un modo u otro en la factura del golpe militar, la dictadura termina adoptando un modelo económico inspirado en las teorías monetaristas del neoliberalismo de la llamada "Escuela de Chicago". La "economía social de mercado" se estrena entre los años 1974 y 1975 con un conjunto de medidas recesivas que conformaron lo que los mismos "Chicago boys" llamaron "tratamiento de shock", aplicado con singular dogmatismo y haciendo uso a sangre y fuego de la omnipotencia del poder de que disponían, tras el objetivo expreso de producir todas las desarticulaciones que la economía nacional requería con el fin de hacerla funcional a los requerimientos antes

enunciados.

La apertura de la economía nacional a la más completa penetración del capital transnacional y la aplicación de enormes tasas de sobre-explotación de los trabajadores aparecen como los pilares fundamentales de este modelo que muchos autores coinciden en calificar de concentrador y excluyente.

Respecto de lo primero, debe tenerse en cuenta que lo más característico de dicha penetración no se da a nivel de la inversión directa sino del capital-dinero, en forma de capital de préstamo, que, además de haber sido la fuente generadora del insoluble problema de la deuda externa, ha pasado a ser la forma principal de articulación del capital financiero local con la banca transnacional.

En efecto, el nivel de inversiones extranjeras directas, y pese a las increíbles facilidades que otorga la nueva ley fascista del inversionista extranjero, se han mantenido siempre bajas; lo que, en general, puede deberse a dos razones principales: a) la inestabilidad política y económica del régimen; b) el hecho de que las tasas de interés <sup>suelen</sup> escapen a las tendencias decrecientes de las tasas de ganancia; es preferible prestar y que sean otros los que corran con los riesgos que significa en Chile invertir. Las únicas corporaciones transnacionales que pueden quedar exceptuadas de esta tendencia son las que operaban en el país desde antes del golpe y que no alcanzaron a ser afectadas por el proceso revolucionario, las que aprovechan las franquicias tributarias, financieras y salaria-

les de que gozan para realizar sus operaciones. Sin embargo, como lo veremos en el tercer capítulo, la correlación entre el capital financiero local y el transnacional tiende a cambiar luego de la crisis recesiva de 1981-1983; pero ello, en todo caso, no representa inversiones nuevas, ya que se trata justamente del aprovechamiento de la crisis en términos de adquirir empresas que pertenecían a los grupos locales afectados por la crisis y que ha generado lo que hoy se conoce con el nombre de área "rara" de la economía, la adquisición de pagarés de capitalización de la deuda externa -cotizados por debajo de su valor real- que significan una gigantesca operación expropiatoria de patrimonios nacionales como parte de lo que se conoce como "segunda etapa de la privatización de activos y empresas del Estado", y la compra de paquetes mayoritarios de acciones de empresas privadas cuyos grupos locales de control han sido desplazados de su propiedad.

La otra modalidad de penetración del capital transnacional se dá a nivel de la saturación del mercado interno vía importación de sus mercancías. A pesar de la contracción de este mercado, dada la depresión de la demanda interna ocasionada principalmente por la abrupta pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población, los exportadores transnacionales se orientan a él, saturándolo preferentemente con medios de consumo habitual, para aprovechar la baja de las barreras arancelarias y la sub-valoración del dólar que imperó durante algunos años como resultado de la fijación de la paridad cambiaria decretada en 1979.

La actividad productiva nacional se vé constreñida a tener que orientarse principalmente al estrecho campo de las exportaciones no-tradicionales según el principio de las llamadas "ventajas comparativas". Ello produce, por un lado, el desarrollo de algunos sectores y, por otro, procesos de desindustrialización, viéndose gravemente afectado el empleo y exacerbando los procesos de concentración y centralización del capital y la producción.

En cuanto a la sobre-explotación de los trabajadores, este cuadro aportado por especialistas del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, en el que la tasa de explotación está calculada a través del cociente valor agregado menos remuneraciones sobre las remuneraciones, puede darnos una aproximación de lo ocurrido:

ESTIMACION DE LA TASA DE PLUSVALIA  
(por tamaño de empresa, No de obreros)

	1967	1979	1982
de 50 a 99	5,43	8,06	7,51
de 100 a 199	5,13	9,46	8,73
de 200 a 499	7,53	9,90	8,37
de 500 a 999	8,51	16,46	10,72
de 1.000 y más	2,61	12,10	8,33
Promedio	5,63	11,06	10,10

Fuente: calculado a partir del IV y V Censos de Manufacturas y Anuario INE, 1982.(2)

De este cuadro, los especialistas del ICAL deducen que, en términos de tiempo socialmente necesario, la última cifra significan que bastan los primeros 45 minutos de actividad laboral para que un obrero en Chile reponga el valor de su fuerza de trabajo.

En cuanto al nivel de los salarios reales, los mismos especialistas entregan el siguiente cuadro:

SALARIOS REALES

( Índice base 1972 = 100)

1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
78,9	90,9	100	...	50,6	40,9	31,6	25,0
1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	
59,3	64,2	69,9	76,1	75,9	67,7	65,0	

Fuente: CIEPLAN (3).

Pero hay otros aspectos que sumados a éstos, demuestran el empeoramiento no sólo relativo sino también absoluto de la situación de la clase obrera. Tal puede considerarse la drástica disminución del gasto público; ya que éste se obtiene principalmente por la eliminación o privatización de una gran cantidad de servicios sociales que antes estaban medianamente garantizados para importantes sectores de bajos ingresos, principalmente los trabajadores. El siguiente cuadro, aportado por Gustavo Marín y Patricio Eozas, ilustra esta situación:

CHILE: EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO, 1974-1981

(millones de pesos de 1977)

Año	Gasto Público (monto)	Gasto Público (índice 100/1974)	Gasto Público (evolución anual)	Gasto Público (como % PGB)
1974	189.233,00	100,00	-----	65,1
1975	144.084,00	76,14	-23,86	56,9
1976	138.601,00	73,24	-3,81	52,9
1977	150.112,00	79,33	8,31	52,3
1978	163.354,00	86,32	8,82	52,6
1979	176.002,00	93,01	7,74	52,3
1980	182.840,00	96,62	3,89	50,3
1981	184.872,00	97,70	1,11	48,2

Fuente: Programa de Economía del Trabajo (PET): "Indicadores Económicos y Sociales, 1960-1984 y siguientes". Santiago, 1986.(4).

Aspectos políticos e ideológicos del régimen dictatorial chileno.

3. Es justamente en el ámbito de este tipo de aspectos o rasgos específicos en donde se han producido la mayor zona de discrepancias entre quienes han intentado definir el carácter de la dictadura chilena. De ahí la obligatoriedad de abordar este punto con cierto detenimiento.

En particular, ha sido la constatación acerca de la carencia de una real y sostenida base de sustentación de masas -es-

pecialmente de aquellas que puedan provenir de los sectores medios- lo que ha llevado a algunos autores a negarle su carácter fascista al régimen dictatorial chileno. Es evidente que de esta carencia se deducen también otras, como la falta de una completa red de organizaciones sociales masivas expresamente adictas y funcionales al régimen y, muy en particular, la inexistencia de un gran partido político fascista. En cambio, a falta de éste -v, podríamos afirmar, en lugar de éste- aparecen las Fuerzas Armadas del Estado en su conjunto, propiamente como instituciones y no como fracciones desprendidas de ellas, jugando el rol del elemento técnico principal sobre el cual se reperta la administración del poder dictatorial. Finalmente, hay autores para los cuales la férrea adhesión de las Fuerzas Armadas chilenas a la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que efectivamente ha funcionado como eje articulador de todo el discurso ideológico de la dictadura, y la supuesta ausencia en él de concepciones corporativas, chevínistas y racistas, por lo menos en el grado de sistematización con que existieron en el llamado fascismo "clásico", hacen que tampoco en este plano pueda definirse al régimen chileno como fascista.

Desde nuestro punto de vista, se hace necesario, en primer lugar, advertir que las carencias anotadas son efectivas en términos relativos; pero no absolutos. Es efectivo, por ejemplo, que el régimen chileno ha carecido de una base social de sustentación de masas constante, articulada orgánicamente a él por alguna adhesión programática profunda y permanente y que, en torno a sus presupuestos ideológicos, haya mantenido

un mínimo grado de cohesión, fuerza orgánica y movilización social como para que pueda haber sido considerada como una fuente generadora de fuerza y poder. En cambio, el apoyo social que el régimen pueda haber tenido en uno u otro momento ha sido, siempre, claramente minoritario. Las mayorías en Chile han sido siempre opositoras.

Sin embargo, ~~como ya ha quedado dicho~~, no puede perderse de vista el hecho de que en la coyuntura histórica <sup>con</sup> la que el fascismo accede al poder sí logra crearse una base de masas que hace girar la correlación de fuerzas a su favor y que le permite dar exitosamente el golpe militar. No se trata de un gran y multitudinario movimiento articulado en torno a un programa o proyecto político fascista. Muy por el contrario, fueron masas en las que un discurso anticomunista, vago y de extraordinario primitivismo, conjugado con supuestas defensas a la democracia y la libertad, logró penetrar gracias a un desconocimiento absoluto acerca de lo que es el fascismo y de los planes dictatoriales a largo plazo que éste posteriormente desarrollaría. Incluso, como se sabe, algunos sectores derechistas de fuerzas políticas de verdadero arraigo de masas -como los que en ese momento conformaban <sup>la mayoría de</sup> la directiva oficial de la democracia cristiana- apoyaron abiertamente el golpe de Estado en la creencia de que las Fuerzas Armadas, una vez realizado por ellas el "trabajo sucio" de aniquilar el proceso revolucionario, los convocarían para entregarles el poder. La alianza de fuerzas políticas y sociales que promovió la base de masas con que contó la contrarrevolución en el momento del asalto al poder fué de corta duración. Justamente, la forma extraordina-

riamente exacerbada en que en Chile se mostró que la dictadura fascista es el poder terrorista "del propio capital financiero" la dió por superada. Los mandos fascistas de las Fuerzas Armadas se habían tomado el poder para el estricto cumplimiento de la misión histórica que los elementos más reaccionarios e imperialistas del capital financiero -local, pero sobretudo transnacional- les habían asignado. En una economía dependiente y subdesarrollada como la chilena no hubo, ni podía haber, espacio ni recursos suficientes como para financiar extensos programas de demagogia social hacia las capas medias. El modelo económico concentrador y excluyente, estrenado en 1975 con un conjunto de medidas recesivas, aplicó su "tratamiento de shock" no sólo a los trabajadores, sino a sectores de la burguesía pequeña y mediana, incluso grande, desencadenando un verdadero vendaval de quiebras de empresas. Todo ésto, sumado a la repulsa nacional provocada por el terror sistemático, hacía imposible un respaldo de masas verdaderamente consistente.

Tales son las tendencias centrales; pero hay que tener en cuenta otras situaciones. Hay aspectos del modelo económico que de algún modo, aunque sea superfluo, han reportado cierto beneficio para algunos sectores de ingresos altos que en modo alguno podrían ser incluidos dentro de la categoría de oligarquía financiera. Concretamente, la orientación de las importaciones de mercancías transnacionales hacia el mercado interno satisface demandas específicas de estos sectores de altos ingresos, e incluso también de sectores de ingresos medios, que en su conjunto podrían quedar incluidos dentro del 20% de la población que más se ha beneficiado con la redistribución re-

gresiva del ingreso. No es una masa del todo despreciable, sobretodo si consideramos que sus nuevas pautas de consumo producen en una parte importante del resto de la población lo que los economistas suelen llamar "efecto de demostración".

En aquellos sectores que de un modo estricto podríamos englobar en el concepto de capas medias, la situación tampoco es del todo unívoca. Hé aquí un interesante comentario hecho por los economistas del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, en la misma obra que ya hemos citado, y que nos sugiere la necesidad de hacer ciertas reflexiones:

"El proceso creciente de monopolización de la economía, -afirman- el avance de las relaciones capitalistas en el campo, la apertura externa de la economía, la diferenciación de los servicios públicos, son todos factores que han incidido fuertemente en la composición y estructura de las capas medias. Por una parte, importantes sectores de las mismas han sufrido un proceso de pauperización que las ha llevado a incorporarse a las filas del proletariado, o se encuentran en vías de sufrir esta transformación. Por otra, la reducción de las funciones del aparato público ha provocado el traslado al sector privado de un gran número de profesionales y trabajadores burocráticos, los que se han incorporado a un conjunto de actividades en el comercio, las finanzas, las llamadas "ocupaciones independientes", etc. Parte fundamental de estos grupos han sufrido un proceso de pauperización, pero otra parte ha logrado transformarse en pequeños y medianos empresarios y acceder a determinados niveles de consumo que acentúan sus posiciones históricamente vacilantes" (5).

Debe considerarse también la posibilidad de que la aplicación del llamado "capitalismo popular", puesto en práctica ~~hacia el fin del período que estamos examinando~~ como parte de lo que se conoce como "segunda etapa de privatización de activos y empresas del Estado", y que no ha consistido sino en la operación de poner bajo la tutela y aprovechamiento por parte de los tenedores de grandes paquetes accionarios de control el dinero de aquellos trabajadores que han adquirido una que otra acción de la empresa en que son explotados, haya surtido cierto efecto de identificación hacia el modelo económico.

Del conjunto de las condicionantes descritas puede surgir, ~~debido~~ no de un modo muy sistemático sino más bien coyuntural, cierta base de apoyo que en algún sentido se ha expresado circunstancialmente en favor del régimen. Tal podría ser una de las explicaciones del 43% obtenido por la opción SI en el plebiscito del 5 de octubre de 1988. Es evidente que en dicho porcentaje hay una parte muy importante que le pertenece al fraude electoral indudablemente perpetrado, otra parte hay que anotarla a la demagogia de la campaña oficialista previa y también al clima de amedrentamiento al que fué sometida toda la población por parte del régimen; pero, en cualquier caso, refleja también cierta base de apoyo neto que, siendo minoritario, no podríamos cometer el error de conceptuarlo como enteramente despreciable.

Precisamente por su carácter coyuntural, esta minoritaria base de sustentación social no se ha expresado como un tejido orgánico estable y funcional al régimen, sino muy excepcional-

mente a través de instancias como la organización femenina conocida como Voluntariado Nacional que se dedica a la práctica demagógica de la caridad pública. Hay otras organizaciones, las que tuvieron su origen y verdadera raigambre popular en los gobiernos de Frei y Allende, que el régimen ha intervenido autoritariamente sin disolverlas. Tal es el caso de los Centros de Madres y las Juntas de Vecinos. Pero su actual situación no podría ser catalogada en ningún caso como de adhesión al régimen, sino más bien como la de organizaciones cautivas. Otros intentos, como el de la Secretaría Nacional de la Juventud, la designación autoritaria de una "federación" estudiantil (que fué conocida como FEDECH), la fugaz existencia de la UNTRACH (Unión Nacional de Trabajadores de Chile) que representó un esfuerzo también vano, esta vez en el plano sindical, y hasta la presidencia honoraria de Pinochet en el club deportivo más popular del país, no son otra cosa que testimonios del clásico comportamiento fascista para apropiarse de todo el tejido organizacional de intermediación social. Si en Chile tales esfuerzos terminaron en fracaso, ello es un mérito de la profunda y tradicional conciencia democrática de su pueblo, pero en caso alguno obedece a que el régimen haya sustentado una concepción distinta a la de todo fascismo corriente.

Circunstancias similares le han impedido al Régimen dictatorial chileno la materialización de su concepción corporativa, que sí la ha poseído, que obedece esencialmente a la idea de corporativismo propia de todo régimen fascista, y que se encuentra expresada desde la llamada "Declaración de Principios del Gobierno de Chile", de marzo de 1974, hasta la Constitu-

ción de 1980.

En lo que respecta al asunto del partido político fascista, lo que sí es efectivo es la carencia de una grande y única organización que, como en el caso de los fascismos alemán e italiano, haya sido una suerte de partido-milicia al entero servicio del Estado. Como en los casos anteriores, la imposibilidad de constituirlo no ha estado en una falta de concepción en tal sentido por parte del régimen, sino en las condiciones históricas que le han impedido contar con una fuerte y constante base de sustentación social de masas y en la agudeza con que se han expresado las contradicciones internas entre las entidades políticas civiles que lo han apoyado. Los esfuerzos no han estado ausentes. La primera vez que se intentó fundar un llamado Movimiento Cívico Nacional que diera consistencia orgánica a todos los sectores civiles de apoyo, fué con ocasión de la así llamada "consulta popular" que se improvisara en 72 horas para dar respuesta a la condena de la Asamblea General de la ONU por la violación sistemática de los derechos humanos. La segunda ocasión fué en el marco del "plebiscito" organizado para imponerle al país la Constitución Política de 1960. En esta oportunidad, el planteamiento fué constituir un gran Movimiento Cívico-Militar. El proceso alcanzó a ser iniciado instalando secretarías de reclutamiento de militantes en intendencias, gobernaciones y municipalidades. La iniciativa quedó trunca, paradójicamente, porque la propia dictadura tomó la iniciativa de ilegalizar el "movimiento" cuya fundación ella misma había ideado y promovido. Hubo también un tercer intento. Esta vez se trató de constituir, en base a los pequeños partidos políticos adictos al régimen que

se habían formado ante la evidencia de que el centro de gravedad de la actividad ~~de la actividad~~ dictatorial se ~~había~~ desplazaba hacia el campo de la política, un llamado Movimiento Pinochetista. Las rencillas entre los mencionados grupos, particularmente los enfrentamientos entre "gremialistas" y "nacionalistas", lo impidieron. Finalmente todos cedieron ante la evidencia de que lo mejor era tratar de coexistir como entidades partidarias separadas. Ello, en todo caso, no les ha impedido practicar instancias de concertación política cuando las circunstancias así lo han exigido. Tal es el caso de la concertación en favor de la opción SI con que mancomunadamente actuaron para el plebiscito del 5 de octubre de 1988. Estas han sido las formas concretas en que en el caso de Chile se ha dado la existencia del apoyo político partidario al régimen dictatorial.

Las mismas circunstancias arriba descritas son las que han determinado el rol y el lugar de las Fuerzas Armadas del Estado como soporte técnico en la administración del poder dictatorial. Este no es, como parecen creerlo algunos autores, un hecho completamente nuevo. Ya Dimitrov, en el citado Discurso de Conclusión ante el VII Congreso de la Komintern, lo anotaba como característico de los casos de Bulgaria, Yugoslavia y Finlandia, relacionándolo precisamente con la carencia de una amplia base de masas por parte del fascismo en esos países y en ese momento<sup>(6)</sup>. Para casos más recientes, incluido el de Chile, esto sigue teniendo vigencia, tanto más cuanto se trata de casos de fascismo en las específicas y actuales condiciones de la dependencia respecto del imperialismo.

El investigador chileno Alvaro Briones hace algunas reflexiones muy interesantes acerca del porqué, a falta de un gran y único partido fascista, de todas las instituciones nacionales, son las Fuerzas Armadas la única que cumple con el conjunto de requisitos que las condiciones específicas del fascismo dependiente le exigen al instrumento técnico que debe hacerse cargo de sustentar las funciones de gobierno. Tal como los describe Briones, tales requisitos podríamos resumirlos así:

a) organización nacional integradora, capaz de conservar rígidamente el sentimiento de pertenencia en cada uno de sus miembros y su respeto a una estructura jerarquizada y centralizada (espíritu de cuerpo).

b) una vida social introvertida respecto de la sociedad civil que refuerza lo anterior.

c) mentalidad y principios normativos de disciplina y lealtad, que fluyen de lo arriba anotado y que garantizan la subordinación y solidaridad absoluta a los superiores (obediencia y verticalidad del mando), lo que hace que, institucionalmente puedan ejercer actividades represivas que pudieran repugnar a algunos de sus miembros considerados individualmente.

d) monopolio legal de la violencia.

e) experiencias de intervención política que las ha llevado a cumplir funciones administrativas de gobierno a través de una

integración institucional.

f) marco ideológico específico para su propia intervención como apéndice político del nuevo bloque dominante en las funciones de gobierno: la doctrina de la seguridad nacional. (7).

Esta última reflexión de Briones es muy importante como punto de partida para examinar la cuestión del discurso ideológico de un régimen dictatorial como el chileno. Efectivamente, las Fuerzas Armadas aparecen aportando, institucionalmente, su propio marco ideológico justificatorio de su intervención política en las funciones gubernamentales de un nuevo bloque de poder. Esta novedad es la que influye también a ciertos autores para preferir otras caracterizaciones del régimen, distintas a la de dictadura fascista, tales como "Estado de Seguridad Nacional" aportada por Luis Maira.

Será necesario decir, en primer término, que tal como lo demuestra la experiencia histórica, no ha existido ni existe, desde la aparición del fascismo como movimiento político hasta hoy, propiamente hablando, "una" ideología fascista. Por el contrario, ha sido un marcado eclecticismo lo que siempre lo ha caracterizado en ese terreno. Ello sin perjuicio de reconocer la reiteración de un determinado número de unidades conceptuales tales como, en primer término, su ascendido anticomunismo, la idea de la organización corporativa del Estado, el chauvinismo más estrecho, el rascismo y otras. Pero éstas, además de no haber conformado nunca propiamente un sistema, se han adecuado en sus formulaciones concretas a la específica coyuntura histó-

rica que han debido enfrentar y, en cada una de estas coyunturas, además, han ido sumando todos aquellos elementos de otras vertientes ideológicas regresivas que hayan resultado funcionales al ejercicio de la dictadura en un momento determinado. De ahí la utilidad de tener presente la ya citada advertencia de Dimitrov en cuanto a la necesidad de estudiar y tener en cuenta de un modo concreto las peculiaridades del desarrollo del fascismo "en cada país, en cada etapa". Togliatti iba incluso más allá al advertir que "En diferentes épocas, en un mismo país, el fascismo asume aspectos diferentes" (18). (8).

Aunque no la compartamos enteramente, no deja de proporcionarnos un importante punto de reflexión respecto de las peculiaridades del discurso ideológico del régimen dictatorial chileno, la siguiente proposición de Osvaldo Fernández: "...más que "ideología de la junta", -dice- proponemos hablar de "intervención ideológica". Es la forma de esta intervención -afirma- lo específicamente fascista; la violencia con que irrumpe. No los elementos/<sup>o</sup> contenidos manejados por el discurso de la junta. Se puede decir aquí, que los elementos propios del fascismo tradicional se hacen presentes, porque la forma de la intervención ya lo es y no porque sean ellos los que aportan la prueba del carácter fascista de ese manejo ideológico. El cual, por otra parte, maneja otros elementos pertenecientes a la ideología tradicional dominante" (19). (9).

Esta última idea ha sido ya expuesta por Fernández en un pasaje anterior del mismo ensayo. Insistiendo sobre la factura del discurso fascista del régimen chileno, dice: "Este discurs-

so organiza y dispone una serie de elementos ideológicos ya existentes. Por lo general, -agrega- la única originalidad del discurso consiste en la ordenación nueva que da a los distintos elementos. Su eficacia reside en reproducir elementos anclados de antemano en la conciencia de un cierto sector o clase, haciéndoles recobrar su antigua fuerza"(10).

En cualquier caso, lo que nos importa destacar es la ineficacia que reviste el esfuerzo por rastrear en el discurso ideológico de la dictadura chilena "una" ideología clásicamente fascista, cuyo modelo vendría dado por las experiencias alemana e italiana, como presupuesto obligatorio para reconocerle su verdadero carácter.

El corporativismo, como ya lo hemos anotado, está efectivamente presente en el planteamiento del régimen chileno; pero lo está en las formas concretas como se encuentra incluido en la "Declaración de Principios" y en la Constitución del 1980. El nacionalismo está expresado según los preceptos de la "doctrina de seguridad nacional"; es decir, como apelación negativa respecto del "enemigo externo": la "amenaza soviética", y del "enemigo interno": la "subversión marxista", supuestamente llevada adelante por "agentes infiltrados" de aquel poderoso enemigo externo. Es, para un caso de fascismo dependiente como el chileno, de preferencia, una cobertura anticomunista. El racismo, difícilmente puede expresarse como la superioridad de alguna supuesta "raza" o "sangre" chilena; pero adquiere connotaciones colonialistas cuando Pinochet ubica los orígenes del Ejército de Chile, no en el de los patriotas independentistas fun-

dado por Bernardo O'Higgins, sino en las tropas realistas del conquistador Pedro de Valdivia; lo cual, de paso, evidencia las influencias del "hispanismo" en la conformación ideológica del fascismo chileno. Una versión racista aún más grotesca es la que subyace en el anticomunismo del almirante Merino que ha clasificado a los habitantes del país entre humanos y humanoides, encerrando en esta última categoría a los comunistas, a toda la izquierda, y en general, a todo el movimiento popular chileno.

Pero, además, se integran a la conformación ideológica del fascismo chileno las ya citadas influencias del "hispanismo"; las que, por lo demás, son de vieja data, remontándose a las influencias que la dictadura militar fascistoide de Carlos Ibañez del Campo, instaurada en abril de 1927, recibió del régimen dictatorial que por esa misma época reinaba en España al mando de Primo de Rivera. El integrismo católico ha sido vehiculizado principalmente por el Opus Dei, el que, además de tener el "mérito" de haber sido la primera organización que trajo al fascismo criollo el impulso modernizante de concepciones tecnocráticas, reforzó la ya anotada influencia hispánica al promover, en los inicios de los años 60, la fundación de las agrupaciones fascistas Fiducia y Sociedad Chilena para la Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad (TFP); por otra parte, y particularmente esta última, estrechamente emparentadas con sus homólogas brasileñas y con el fascismo salazarista. El Opus Dei logró influenciar e incorporar a su férrea disciplina secreta a un número no despreciable de los tecnócratas, empresarios y hasta jefes

de las Fuerzas Armadas que han jugado y juegan un rol preponderante en la conducción del régimen dictatorial chileno durante ya quince años. Por su parte Fiducia y TFP han aportado con "ideólogos" de la gravitación de un Jaime Guzmán, uno de los principales redactores de la "Declaración de Principios" de marzo de 1974 y de la Constitución de 1980.

Un lugar muy destacado en la incorporación del actual discurso fascista en Chile de lo que Osvaldo Fernández llama "otros tantos elementos pertenecientes a la ideología tradicional dominante", "anclados de antemano en la conciencia de un cierto sector o clase", le corresponde a lo que hasta la fecha del golpe militar fuera el Partido Nacional, constituido en la segunda mitad de los 60 por la fusión del antiguo Partido Conservador -histórico proveedor de activistas y grupos fascistas durante varias décadas en la política nacional-, el Partido Liberal y el partido Acción Nacional, pequeña agrupación formada por los elementos netamente fascistas del ex-Partido Agrario Laborista que fué el principal sostén político de la segunda presidencia del general Carlos Ibañez del Campo. El Partido Nacional, cuyo último presidente fuera el ex-ministro del interior de Pinochet, Sergio Onofre Jarpa, representó justamente la rearticulación de viejas tradiciones nacionalistas cuyas raíces más lejanas podrían encontrarse en lo que fueron las llamadas Ligas Patrióticas de principio de siglo. Aportó, además, con la actual versión -tergiversada en muchos aspectos- que de la figura y obra de Diego Portales hace ostentación Pinochet y su régimen. Su discurso anti-ideologías podría considerarse

precursor de la pretendida aversión que muestra Pinochet en contra de los dirigentes y partidos políticos en general. Su apelación a "las fuerzas vivas de la Nación" estuvo siempre unida a una concepción autoritaria y corporativa del ejercicio del poder del Estado. El Partido Nacional fué el que representó más genuinamente el proceso de fascistización de la derecha chilena con antelación al golpe militar, a cuya ejecución aportó abiertamente, y constituyó -con su 20% electoral ya en 1969- el mayor grado de masificación que las posiciones fascistas pudieron haber logrado antes de su asalto al poder.

De esta manera. la doctrina de seguridad nacional no es el único alimento ideológico de un discurso dictatorial que, como podemos concluir, es de factura mucho más compleja. Lo que sí parece evidente es que, desde nuestro punto de vista, dicho "marco ideológico específico" que aparecen aportando las Fuerzas Armadas es el eje articulador, el que organiza, dispone y ordena de manera nueva todos los demás componentes; creemos que es, además, el que les otorga su mayor potencial de violencia, el que refuerza, en las condiciones del fascismo dependiente, la forma más específicamente fascista de lo que Osvaldo Fernández llama intervención ideológica de la dictadura. Tal creemos nosotros que es el rol y el lugar que ocupa la "doctrina" en un planteo ideológico dictatorial en el que, si investigáramos más a fondo, podríamos advertir influencias de casi todas las vertientes fascistas que han existido y existen hasta ahora, incluidas aquellas llamadas marginales.

Lo que determina este rol y este lugar es, justamente, a

nuestro modo de ver, el carácter dependiente de la dictadura fascista chilena, y, específicamente, su dependencia del imperialismo norteamericano. Cuando Alvaro Briones dice que la doctrina de seguridad nacional es el "marco ideológico específico" para la intervención política y gubernamental de las Fuerzas Armadas en el nuevo bloque dominante, creemos que no se está refiriendo a una cierta propiedad ideológica que en tal sentido podrían tener las Fuerzas Armadas chilenas o, en un ámbito más amplio, las distintas Fuerzas Armadas Latinoamericanas (y es por ello que hemos dicho que "aparecen" aportando dicho marco ideológico); ya que, como se sabe, se trata de una doctrina político-militar cuya marca registrada le pertenece al Pentágono y que fué concebida -en las actuales condiciones de crisis de los mecanismos de dependencia y dominación- para la defensa y salvaguarda de los intereses económicos, políticos y estratégico-militares del imperio. Es por ello que el mismo Briones, al hablar de las Fuerzas Armadas locales, las ubica -para estos casos de dictadura- como "apéndice político" de un nuevo bloque dominante. La composición de este nuevo bloque de poder, por lo menos así queda claro para el caso chileno, está integrada por el capital financiero imperialista transnacional, el capital financiero local asociado a aquél y una casta tecnocrático-militar fascista. El rol determinante le corresponde al primero de los nombrados.

Aspectos internacionales en el surgimiento y evolución del régimen dictatorial chileno.

Aspectos internacionales en el surgimiento y evolución del régimen dictatorial chileno.

La consumación del golpe de Estado y posterior instauración de la dictadura fascista en Chile ha sido un capítulo del vasto proceso de reflujo popular y ofensiva de la reacción y el imperialismo acontecido en América Latina, con particular fuerza y extensión durante la década de los 70; pero cuyos inicios muchos concuerdan en ubicar en relación con el golpe de Estado que en 1964 derribó el gobierno progresista brasileño de Joao Goulart. En torno a esta consideración hay una amplia coincidencia tanto por parte de quienes interpretan el carácter de las dictaduras surgidas como fascistas, como por parte de los que ponen en discusión dicha caracterización sugiriendo otras. También aparece como más o menos coincidente el criterio de ubicar, en términos generales, el fin de dicho período y consecuente iniciación de una multifacética contra-ofensiva popular en la disyuntiva de los años 70 y 80. Son acuerdos importantes, por cuanto ayudan a ubicar cada suceso nacional en sus relaciones -por cierto, complejas y de ningún modo unívocas- con un gran proceso histórico de alcances continentales cuyos rasgos integradores, a su vez, lo relacionan con todo el universo de la situación internacional.

En lo que hasta ahora no se advierte la misma coincidencia, por lo menos no con la misma fuerza, es en cuanto a la evaluación del peso específico que cada factor aporta en la definición del nuevo período iniciado. Ello, a nuestro juicio, impide ver a cabalidad el conjunto de relaciones que existe entre unos y o-

tros hechos y, sobretodo, nubla la comprensión acerca del carácter mucho más multifacético y diverso que, entre otras tantas originalidades, tiene este nuevo período de ofensiva popular respecto del que se desplegó con posterioridad al triunfo de la revolución cubana.

Se acostumbra, por ejemplo, y con entera razón, subrayar la importancia que han tenido en la definición del nuevo período el término de las dictaduras en Argentina, Brasil, y Uruguay y la subsiguiente instauración en esos países de gobiernos civiles de inspiración democrático-burguesa; situaciones que, en todo caso, muestran una diversidad que tampoco es tomada debidamente en cuenta. Eso en los marcos nacionales. En el plano directamente continental se destaca esa arrolladora reacción de identidad latinoamericanista que desató la agresión británica a las islas Malvinas y la colusión que con ella mostró la administración norteamericana. También se hace presente la reacción similar que han provocado y provocan los intentos norteamericanos de intervención militar directa en Centroamérica y, más recientemente, el abierto injerencismo político de los EEUU en Panamá. El movimiento continental en favor de una solución justa al problema de la deuda externa -que, aunque muy variado en sus propuestas concretas, es más o menos coincidente en cuanto a que la deuda es impagable y que amerita una solución política- es otro suceso que por su evidente gravitación histórica aparece siempre subrayado en el análisis de la situación latinoamericana actual.

Sin embargo, al propio acontecimiento histórico que ha sig-

nificado y significa, para todo el continente, el triunfo y actual resistencia de la revolución popular sandinista en Nicaragua, así como a la gesta -inédita hasta ahora en la historia de América Latina- que protagonizan los patriotas salvadoreños no se les dá, a nuestro juicio, en la mayoría de los análisis, la específica gravitación que tienen en el inicio y sostenimiento del actual período de ofensiva popular. También ocurre lo mismo con la correcta valoración que debiera haber respecto de las proyecciones que, para toda la región, tiene el hecho de que un movimiento continental, tan amplio desde el punto de vista de clase, como el de la deuda externa haya surgido y sea consecuente y flexiblemente sostenido por iniciativa del campo revolucionario. Es evidente que en estos descontrapesos inciden intereses de clases; pero también ello es resultado, a nuestro modo de ver, de los retrasos que tanto a nivel de la elaboración teórica como de la política muestra en la actual coyuntura continental el conjunto del movimiento comunista latinoamericano.

Desde nuestro punto de vista, es justamente el triunfo de la Revolución popular sandinista en Nicaragua el acontecimiento histórico que inaugura la nueva etapa de contra-ofensiva popular que hoy se advierte en toda la región. Y, relacionando este hecho con la situación chilena, no nos cabe duda que no es casual que el período de crisis del régimen dictatorial se inicie, como con más detalle lo abordaremos <sup>en el capítulo</sup> ~~en el tercer capítulo~~, entre los años 1980-1981.

Creemos que el sistema de relaciones entre el surgimiento y evolución del régimen dictatorial chileno y la situación re-

gional e internacional debe ser abordado tanto en el plano económico, político e ideológico, como estratégico-militar. Tal metodología nos puede ayudar a ir acercando las necesarias conclusiones que deben ser extraídas para ubicar su sistema de contradicciones y establecer consecuentemente, los elementos estratégicos y tácticos para operar sobre él.

La revolución cubana puso en evidencia la crisis que sobrevinía en todo el sistema de dominación capitalista e imperialista, y en todos los mecanismos tradicionales de dependencia económica, política, cultural y militar mantenidos por el imperialismo norteamericano en el subcontinente. Ya a mediados de los años 60 resulta evidente el estado de agotamiento en que han entrado los viejos patrones de acumulación capitalista, basados preferentemente en modalidades extensivas de explotación. La revolución científico técnica comienza a ponerse a la orden del día -además, por la competencia que ofrece el sistema socialista- y, en lo que al mundo capitalista respecta, las cuantiosas inversiones nuevas que ella implica en el aumento de la composición orgánica del capital impulsan el vertiginoso proceso de transnacionalización que se transforma en el factor determinante del cambio, a escala de todo el sistema, de las modalidades en la reproducción ampliada. Comienza a surgir rápidamente la necesidad histórica de adecuar todo el funcionamiento del capitalismo mundial a las nuevas modalidades de transnacionalización.

La potencialidad desestabilizadora que encierran todos estos cambios exacerba la competencia y rivalidad inter-imperialista; lo que más tarde, redundará en cambios de la correlación

de fuerzas entre los grandes centros del imperialismo mundial iniciándose la puesta en discusión del liderazgo norteamericano atenuado, además, por los gravísimos problemas que vá mostrando la economía interna de los EEUU presionada, de modo decisivo, por los gigantescos gastos militares.

EEUU necesitaba frenar la ofensiva popular que en una de sus más tradicionales esferas de influencia, América Latina y el Caribe, ha desencadenado el ejemplo de la revolución cubana. De una parte, hace uso hasta de la invasión mercenaria para ahogar a ésta en su desarrollo y, de otra, levanta el proyecto continental de "ayuda" y "reformismo" que se conoció como Alianza para el Progreso. Ambos intentos fracasan. Mientras tanto, en otros lugares del mundo, bajo la influencia del socialismo, la revolución de liberación nacional y social sigue su curso. El imperialismo norteamericano, a cuyas palancas más decisivas de poder político han ido accediendo directamente los representantes más agresivos del complejo militar-industrial, bosqueja una estrategia que exagera los extremos más peligrosos de su política: la amenaza de guerra mundial termonuclear y la fascistización de los regímenes políticos de las áreas que influye.

Pero, como de lo que se trata no es sólo de frenar el proceso revolucionario mundial en marcha sino de intentar revertirlo, esta estrategia debe ser esbozada a largo plazo planteándose objetivos múltiples de gran profundidad: intentar el cerco prolongado y si es posible la disolución interna del sistema socialista, recuperar el liderazgo capitalista mundial puesto en discusión, someter -hasta con los recursos extremos de la gue-

rra y el fascismo- al movimiento de liberación nacional y so-  
 cial y proceder -bajo la "garantía" del empleo de estos recur-  
 sos- a readecuar a fondo los patrones de acumulación capitalis-  
 ta y las inserciones en el mercado capitalista mundial y en la  
 división internacional capitalista del trabajo de las economías  
 dependientes, de acuerdo a las necesidades de transnacionaliza-  
 ción de todo el funcionamiento mundial del sistema. Para el  
 cumplimiento de estos objetivos, y en <sup>condiciones</sup> ~~consideración~~ de que en  
 zonas como América Latina y el Caribe ya <sup>la era</sup> ~~no es~~ realista plan-  
 tearse la conquista de la conciencia de los pueblos sino su so-  
 metimiento por la violencia material, cuestión para la cual  
 llegó el momento de hacer uso desplegado y sistemático del lar-  
 go trabajo que se ha venido haciendo con las Fuerzas Armadas  
 nativas, Washington se plantea la puesta en práctica -a escala  
 continental- de un cuerpo doctrinario que ha venido siendo ela-  
 borado por el Pentágono, prácticamente, desde la misma post-gue-  
 rra: la "doctrina de seguridad nacional". A través de ella cam-  
 bia las distintas hipótesis de guerra y doctrinas militares de  
 las Fuerzas Armadas latinoamericanas -distintas, pero todas orien-  
 tadas principalmente a la guerra exterior- y las uniforma en  
 una sola: la hipótesis de la "guerra interna". El cambio no re-  
 quiere grandes esfuerzos logísticos por cuanto desde hace ya un  
 tiempo el Pentágono ha venido uniformando, tras esa hipótesis,  
 el entrenamiento, los tipos de armamento, vestuario y equipo,  
 y hasta las dislocaciones de las unidades y guarniciones de las  
 Fuerzas Armadas latinoamericanas en el territorio nacional de  
 sus respectivos países. Pero, como hemos dicho, la doctrina de  
 seguridad nacional no es sólo una doctrina militar, sino políti-

co-militar; es decir, que habilita a las Fuerzas Armadas no sólo para ser el escudo protector de un régimen político dictatorial sino también para asumir ellas mismas, y de un modo institucional, muchas de las tareas gubernamentales del nuevo bloque de poder y hasta para intervenir en la concepción y materialización de las nuevas estrategias de desarrollo bajo la inspiración de una fórmula acuñada ya por Robert McNamara: "seguridad es desarrollo, y no hay desarrollo sin seguridad". Naturalmente se trata del desarrollo del capitalismo y del imperialismo según los nuevos requerimientos ya anotados.

La implementación de esta estrategia produce, en una primera etapa, una grave profundización del reflujo popular; pero, pese a todo, no logra cambiar sustancialmente el cuadro ni mucho menos hacerlo irreversiblemente negativo. La política norteamericana tiene que enfrentarse a la lucha de clases real tanto en el plano nacional, como regional e internacional en la que participan actores diversos dentro de una situación cuyas tendencias positivas más generales no logran ser revertidas. En el fragor de la contienda, irremediablemente, dicha política vá mostrando todo su sistema de contradicciones también en una interrelación internacional, regional y nacional. Debe ir sufriendo readecuaciones, siempre dentro de una concepción que relaciona la reacción política más extrema con una idea muy peculiar acerca de una tercera guerra mundial cuyo inicio, supuestamente, ya está teniendo lugar en forma de una primera fase de "refriegas" locales. Así se pretende darle connotaciones de confrontación bélica a lo que es la propagación terrorista del exterminio físico del "enemigo interno" con su secuela de asesinatos, desa-

pariciones, práctica sistemática de la tortura y la masificación del exilio político. Nace el concepto imperialista de la relatividad de los derechos humanos. Un verdadero compendio de estas orientaciones fué descubierto al conocerse públicamente el informe secreto preparado para el todavía candidato presidencial Ronald Reagan, que se conoció como "Documento de Santa Fé", y que constituyó su "nueva estrategia interamericana para los años 80". En su texto, que versa principalmente sobre la "expansión del poder global de los EEUU", se advierten ya los reajustes que se van operando sobre la doctrina de seguridad nacional para hacerla derivar más tarde en la doctrina neoglobalista de los llamados "conflictos de baja intensidad"; versión en la cual existe hoy.

La dictadura chilena es creatura de esta política y expresión de los rasgos específicos con que la situación internacional del imperialismo norteamericano se refleja en la región. No es un caso de fascismo "exportado", por cuanto el desarrollo del capitalismo en Chile -pese a su grado medio- llevó a la creación de un capital financiero y de una oligarquía financiera "propios", hoy en un alto grado de fusión transnacional con el capital imperialista NO SOLO DE BASE NORTEAMERICANA. Es sí, y por todo lo dicho, un caso de fascismo dependiente. De ese carácter derivan sus principales rasgos específicos y, teniendo siempre en cuenta los embates que el régimen ha recibido por parte de la lucha antifascista del pueblo determinando importantes cambios en su evolución, su historia de ascenso y crisis guarda estrecha relación con la situación general del imperialismo y del capitalismo a nivel internacional y regional.

### Conclusiones.

Por su esencia de clase, por su carácter terrorista y por el lugar y rol que ocupa en el dispositivo global del imperialismo norteamericano -tanto del punto de vista de los intereses económicos como políticos y estratégico-militares de éste- el régimen dictatorial chileno es un caso de fascismo dependiente. La misión histórica que se ha asignado es la de detener el proceso revolucionario en Chile y reimponer en nuevas condiciones, el dominio del capital financiero. El bloque de poder que lo sustenta está integrado por el capital financiero imperialista transnacional, el capital financiero "local" asociado a éste y una casta tecnocrático-militar fascista. En dicho bloque de poder es el capital transnacional el factor decisivo. La carencia de una amplia base social de masas -determinada por la dependencia respecto del imperialismo y por las tradiciones democráticas del pueblo chileno- le han privado de la posibilidad de contar con el respaldo de un gran partido fascista único, de una red de organizaciones sociales adictas y de la materialización de sus concepciones corporativas. Por esas mismas razones, han debido de ser las Fuerzas Armadas del Estado las que asuman, institucionalmente, el rol de soporte técnico en la administración gubernamental. El eje de justificación ideológica para el cumplimiento de dicho rol ha estado dado por la doctrina político-militar norteamericana así llamada "de la seguridad nacional", en torno a la cual se ha articulado un discurso ideológico que integra diversas nociones de muy distintas corrientes fascistas además de otros elementos tradicionalistas empleados desde antes por las clases dominantes. El conjunto de estos fac-

tores dota al régimen dictatorial chileno de rasgos específicos que en ningún caso desmienten su carácter fascista.

Resultan, en lo fundamental, coincidentes con esta definición de la esencia de clase, carácter y rasgos específicos del régimen dictatorial chileno los planteamientos contenidos en documentos oficiales del Partido Comunista de Chile. En efecto, en el Informe al Pleno del CC del PCCH realizado en agosto de 1977 se afirma que "este régimen no es simplemente otra forma de la dictadura de la burguesía, sino la dictadura terrorista del grupo más reaccionario del capital financiero. Y esto es fascismo. De aquí fluye -se agrega- que la contradicción principal en las condiciones de la dictadura fascista se da entre la mayoría del pueblo, incluidas las capas medias y sectores de la burguesía, y los monopolios imperialistas y nativos más reaccionarios. Fija entonces con claridad el enemigo principal y la dirección del golpe principal, así como la base objetiva del frente antifascista"(11). En otro pasaje del mismo Informe se agrega que "En las condiciones de Chile juegan un rol especial los militares como factor activo de poder, distinto del que tuvieron en otros regímenes fascistas, pero de ninguna manera único, ni en la historia ni en el presente. Por eso no se puede deducir de tal hecho que es simplemente un régimen militar reaccionario de tipo "gorila". Eso equivaldría -se concluye- a quedarse en las exterioridades y no penetrar en la esencia del fenómeno"(12). Incluso, analizando la carencia de una amplia base social de masas por parte del régimen, el citado Informe atribuye este hecho a la ~~existencia~~ <sup>conciencia</sup> democrática del pueblo conclu-

yendo que "Su fuerza principal arranca, entonces, del imperia-  
lismo; lo que determina su carácter dependiente", y, luego de  
exponer una serie de hechos, reitera que "Tomando en cuenta ta-  
les factores es que surge la definición de fascismo dependien-  
te para el caso de Chile y otros semejantes"(13).

Acerca de los procesos de verdadera fusión en los que han  
entrado el capital transnacional y el capital financiero local  
dentro del bloque de poder ya descrito, el documento comunista  
adelanta también un criterio, expresando que "En los últimos  
años tiene lugar en América Latina un proceso de cambios cua-  
litativos en las formas de la dependencia respecto del imperia-  
lismo. Sin perjuicio de las contradicciones que hay entre ellos,  
-afirma- se ha establecido un maridaje entre la alta burguesía  
de nuestros países y el capital imperialista, de modo tal que  
una parte de los capitalistas criollos, principalmente de tipo  
financiero, pasaron a formar parte del sistema mismo de explo-  
tación imperialista y el imperialismo a constituir un factor  
crecientemente "interno" en no pocas naciones del continente.  
Surgió así -concluye- una nueva base de clases para el fascis-  
mo en América Latina..."(14).

Como planteo general, es evidentemente correcta la conclu-  
sión que el Informe del Pleno comunista <sup>SACA</sup> sobre la definición de  
la contradicción principal. Pero esta contradicción existe, des-  
de luego, dentro de un sistema de contradicciones que la influ-  
yen y complican en su desarrollo y posibilidades de solución.  
El mismo documento citado habla de la coexistencia que se veri-  
fica entre los procesos de virtual fusión del capital transna-

cional y el capital financiero local con las contradicciones que, al mismo tiempo, se dan entre ellos. Algunas de estas contradicciones se han hecho evidentes en el curso del funcionamiento concreto del modelo económico; cuyo objetivo central ha sido, como lo hemos afirmado, producir todas las readecuaciones -y desarticulaciones- de la economía nacional para hacerla funcional a las necesidades del capital transnacional. En ese curso, producto de las modalidades preferentemente financieras de injerencia del capital imperialista, se llegó a producir hasta la quiebra del sistema bancario chileno y el derrumbe de los conglomerados locales que se habían formado al amparo del régimen antes de la crisis recesiva de 1981-1983. La reestructuración posterior del capital financiero local debió llevarse a cabo sobre la base de otros centros de poder. Pero, de otro lado, está también el hecho de que un modelo tan altamente concentrador y excluyente del funcionamiento del capitalismo como el que ha estado impulsando el régimen, al obedecer a tendencias objetivas del sistema en su etapa actual, condiciona cualquier proyecto alternativo que se mantenga dentro de los marcos del sistema al simple perfeccionamiento de las estructuras monopolistas transnacionalizadas que se han estado desarrollando bajo el fascismo. Esto ha influido en sectores reformistas de la oposición para plantearse como alternativa de la dictadura fascista; pero no de la recomposición profunda y transnacional del actual desarrollo capitalista en Chile, trazándose más bien la perspectiva de ser los reemplazantes de aquella para convertirse, unos en los grandes partidos gobernantes, y otros en una oposición integrada a un socio-económico sistema que, sensibilizado en sus aspectos más salvajes, siga manteniendo en esencia las mismas pautas de de-

sarrollo. Ello, objetiva y subjetivamente, ha dificultado y hasta hoy dificulta la solución de la contradicción principal en términos de la constitución de un frente antifascista. Este es uno de los grandes problemas que ofrece la dialéctica de los proyectos alternativos presentados y su posibilidad de fusión, en esta hora, en un proyecto democrático único.-

Notas al Primer Capítulo.

- 1.- Lenin, "Balance de una discusión sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación", OCCC, t. XXIII, Cartago, Buenos Aires, julio 1916.
- 2.- "La transnacionalización del capitalismo chileno y los cambios en la estructura de clases". Intervenciones de la delegación del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz en el seminario realizado en Montevideo, Uruguay, el 21, 22 y 23 de noviembre de 1986, organizado por el Grupo de Estudios Sociales Uruguayos.
- 3.- ib.
- 4.- Gustavo Marín, Patricio Rozas, "Los grupos Transnacionales y la crisis. El caso chileno". Ed. Nueva América, Argentina, 1988, p. 36.
- 5.- "La transnacionalización del capitalismo chileno y los cambios en la estructura de clases", ed. cit.
- 6.- véase Dimitrov, op. y ed. cit., p. 88.
- 7.- véase Alvaro Eriones, "Economía y política del fascismo dependiente", Siglo XXI, México, 1978, pp. 291-294.
- 8.- Togliatti, "Lecciones sobre el fascismo", Ediciones de cultura popular, México, p. 26.

5A-

9.- Osvaldo Fernández, Op. y ed. cit., p. 18.

10.- ib., p. 17.

11.- El Pleno de agosto de 1977 del Comité Central del Partido Comunista de Chile. Ediciones Colo-Colo, 1978, p. 43.

12.- ib., p. 44.

13.- ib., pp. 44-45.

14.- ib., p. 44.

Capítulo Segundo: Cambios en la estrategia del Partido Comunista en su lucha contra la institucionalización del fascismo.

---

El 11 de septiembre de 1980 la dictadura chilena logra imponer la realización del plebiscito con el que hizo aprobar un texto constitucional que, en un proceso plagado de dificultades y tensas pugnas internas, venía siendo elaborado desde hacía tres años. Una semana antes de este hecho, en un discurso pronunciado el 3 de septiembre con ocasión del décimo aniversario del triunfo de la Unidad Popular, Luis Corvalán daba a conocer públicamente una decisión de su partido destinada a tener grandes proyecciones: la reivindicación del derecho a la rebelión popular contra el fascismo, promoviendo el empleo de las más diversas formas de lucha en un proceso que desarrollara la confrontación a mayores niveles de unidad antidictatorial y de movilización combativa de las masas. La antagónica confluencia en el tiempo de estos dos acontecimientos de carácter estratégico, así como el desarrollo posterior que tuvieron, se explican por los cambios cualitativos operados en la correlación de fuerzas.

Pudiera parecer paradójico afirmar que el mismo año en que el fascismo logra su institucionalización es el que marca el inicio de su crisis. No lo es si es que nos atenemos a las profundidades y no a las apariencias del fenómeno. Hay que anotar, en primer término, que dicha institucionalización no es, en Chile, la culminación de un proceso de verdadera legitimización social; de conquista, por parte del régimen, de una posición efectivamente hegemónica sobre la sociedad civil. Es, ante todo, el resulta-

do de una larga y brutal operación coercitiva, y además semi-secreta, en la que el empleo antipopular de la fuerza armada opera como escudo protector de las pugnas internas en el seno del régimen -las que, por cierto, quedan reflejadas en el texto constitucional- para imponer un plebiscito llevado a efecto sin las más mínimas condiciones de legitimidad: ausencia de registros y leyes electorales, imperio de los estados de excepción, violación de todos los derechos humanos, <sup>Quelca de libertades</sup> ~~libertades~~ públicas y garantías individuales, ilegalización de todos los partidos políticos, aplicación masiva y sistemática del terrorismo de Estado. El plebiscito es un fraude no sólo por la manipulación de sus resultados -los que, pese a todo, no pueden sino reconocerle un alto porcentaje a la votación opositora-; sino porque las condiciones en que se realiza ya lo son. Es también, por cierto, una demostración de fuerza suficiente como para imponerle una operación de ese tipo a la sociedad entera. Fuerza que en esos momentos no tuvo la oposición como para evitarlo. Pero se trata de una fuerza no legitimizada socialmente ni antes, ni durante, ni después del plebiscito, y por tanto, insuficiente como para producir la fase de consolidación del régimen dictatorial que la institucionalización podía y debía presuponer; fase que en propiedad, desde nuestro punto de vista, no llegó a existir nunca si es que por ello entendemos el ejercicio de un poder estatal que, sustentado por una base social de masas suficiente, logra imponer de un modo sólido su propio proyecto histórico de sociedad. La correlación de fuerzas jamás se lo permitió, aún en los momentos en que la mayoría opositora no estuvo en condiciones de expresarse con el grado de organización, unidad y movilización combativa con que lo hizo después. La prolongación de las insu-

ficiencias en el campo opositor sí implicaban el riesgo de una cierta consolidación del régimen dictatorial. La percepción de tal peligro, así como la de la existencia de posibilidades suficientes como para conjurarlo -como lo veremos después- está en la base de la adopción por parte del Partido Comunista de su política de rebelión popular de masas. Y es por eso que tal decisión es tomada justamente en el momento en que se hizo.

Las luchas de masas que vinieron después transformaron realmente el plebiscito del 11 de septiembre de 1960 en lo que potencialmente ya era: la proclamación por parte del propio régimen, su propia confesión, de que el período de su crisis estaba siendo inaugurado.

#### Antecedentes del período de crisis del régimen dictatorial.

El profundo reflujo popular que produjo el golpe fascista se prolongó hasta la primera mitad de 1977. En marzo de 1974, aún bajo el imperio combinado del llamado "Estado de Guerra Interna" y del Estado de Sitio, el régimen dá a conocer su "Declaración de Principios" y el "Mensaje de la Junta sobre la labor del Gobierno", ~~en~~ documentos en los que vienen condensadas ciertas orientaciones generales que conforman una suerte de "primera acta de intenciones". En ellos se establece que redactarán un nuevo Estatuto Social de la Empresa y del Inversionista Privado Nacional, cuerpos "jurídicos" que ampararon una primera reestructuración de la oligarquía financiera; prometen la dictación del Estatuto del Inversionista Extranjero y la "normalización" de

las empresas extranjeras expropiadas por el gobierno de Salvador Allende, con lo que se reinició la intromisión del capital imperialista transnacional en la economía del país; hablan de "regularizar" la propiedad de la tierra, es decir, iniciar el proceso de contra-reforma agraria; anuncian la primera devaluación de la moneda nacional, la entrega de la construcción de viviendas a los grandes grupos privados del sector y la rebaja general de los salarios, política que se ha mantenido inalterable durante los quince años de dictadura.

La alianza contrarrevolucionaria que posibilitó el éxito del golpe de Estado ha quedado virtualmente rota ya a mediados de 1974. Los esfuerzos de la parte más conciliadora del centro político para que les sea entregado el poder a corto plazo -o, a lo menos, se les permita un espacio de incorporación a él- fracasan definitivamente. Es interesante destacar la coincidencia que se advierte entre la rotura de la alianza contrarrevolucionaria, incluido el fracaso de la tentativa negociadora de una parte del centro político que ella implicaba, y los primeros delineamientos más coherentes de las intenciones de la dictadura incluidos en su "Declaración de Principios" y "Mensaje de la Junta sobre la labor del Gobierno". No es una coincidencia casual; pero tampoco determinada por alguna oposición que los sectores freístas expresaran respecto de dichos lineamientos, sino por el expreso rechazo de quienes habían asaltado el poder a compartir éste con sector alguno que pudiera interferir en el cumplimiento sin contrapeso de su "misión histórica". Hacemos esta precisión por la innegable importancia que tiene para los efectos de poder entender más adelante el porqué de las dificult-

tades en las alianzas de una oposición cuyos orígenes comenzaban a gestarse en las condiciones que estamos anotando.

Mientras tal cosa sucedía con los sectores reformistas más conciliadores, la derecha no-fascista podía mantenerse aún bajo la cobertura del régimen dictatorial -aunque en ningún caso ostentar verdaderas posiciones de poder que jamás le fueron otorgadas- por la razón de que los lineamientos iniciales de marzo de 1974 no sólo no le afectaban en sus intereses, sino que todavía podían favorecerla en términos generales.

La Unidad Popular ha sido orgánicamente dispersada, cada uno de sus partidos componentes centra sus capacidades en la adopción de medidas ~~de~~ internas que garanticen su propio funcionamiento en las nuevas condiciones. La magnitud de los golpes recibidos impide a la coalición salir ante el pueblo con una sola voz. El Partido Comunista, por su parte, vá entregando su opinión a través de una serie de pronunciamientos que, hasta fines de 1974, totalizan lo. En ellos podemos advertir los siguientes lineamientos:

- desarrollo de la definición sobre el carácter fascista de la dictadura.
- denuncia de los crímenes que están siendo cometidos.
- propuestas para la defensa de los intereses que están siendo arrasados; no sólo de la clase obrera, sino los de los intelectuales, las universidades, los sectores medios, los de la Iglesia y los de la Nación como tal.
- definiciones sobre la nueva situación que enfrentan las Fuerzas Armadas.

- denuncia y proyecciones sobre los efectos que para el país acarreará el modelo económico que comienza a bosquejarse.
- propuestas iniciales para un régimen democrático futuro.
- propuestas de alianzas que se sintetizan en la iniciativa de conformar un Frente Antifascista,

En su primer mensaje "Al pueblo Chileno", fechado en Santiago el 11 de octubre de 1973, el Partido Comunista entrega la siguiente definición sobre el carácter de la dictadura y sus ligazones con el imperialismo norteamericano: "Se ha instalado en el país -afirma- una dictadura fascista con la secuela de crímenes y abusos que caracteriza a estos regímenes. El plan del golpe, -continúa diciendo- su línea de ejecución y sus métodos bestiales son de origen extranjero. Nació en las oficinas de la Agencia Central de Inteligencia, en directa conexión con la International Telegraph and Telephone y la Kennecott. Para llevar a cabo este plan se constituyó un grupo especial en el Pentágono y la Casa Blanca"(1).

Como un primer esbozo de la alternativa que el PC irá proponiendo a ~~xx~~ este régimen que define como fascista podemos citar, del mismo documento, el siguiente pasaje: "Pero el pueblo volverá a ser Gobierno y no estará obligado, por cierto, a restablecer la situación institucional que había hasta ayer. Dictará democráticamente una nueva constitución, nuevos códigos, nuevas leyes, creará nuevas instituciones de poder, un estado de derecho superior al que echó a pique el golpe militar. Bajo tal estado de derecho se respetarán todas las creencias religiosas, existirá el pluralismo ideológico, el humanismo, pero no habrá amparo

legal para el fascismo, el delito económico y las actividades sediciosas"(2).

En ese primer documento, el Partido Comunista se asume como representante de los intereses de la clase obrera, pero también de los de todo el pueblo y de la patria como tal, reitera que el eje de su accionar seguirá basándose en la organización, la unidad y la lucha de las masas, en el desarrollo de la conciencia política del pueblo y, en cuanto a su política de alianzas, se pronuncia por forjar una unidad en la que "tienen un lugar cada hombre, mujer o joven de nuestro pueblo, no importa si ayer estuvo en la oposición confundido por la propaganda de los reaccionarios. Millones han visto el fascismo cara a cara -concluye- y están dispuestos a luchar contra él"(3).

Tales serán, en general, las "piedras angulares" que la propuesta comunista irá desarrollando, precisando y practicándole los ajustes que, desde su óptica, vayan siendo requeridos por los cambios de la situación.

Puede surgir de inmediato la pregunta de si la propuesta de construir, en reemplazo de la dictadura, un nuevo Estado de Derecho -superior al pre-existente-, lo que en realidad es el germen de lo que después se conoció como proyecto de "democracia avanzada", se compadecía con la situación que había que enfrentar en ese momento, con el estado por el que atravesaba la izquierda, incluido el propio PC, y, en definitiva, con la idea que este mismo tenía acerca de la necesidad de forjar la más amplia alianza para superar el período dictatorial que recién se iniciaba y

cuya prolongación en el tiempo nadie estaba, a ciencia cierta, en condiciones de prever. ¿No se habría visto facilitado, en cambio, la constitución del Frente Antifascista que los comunistas propugnaban -y que, como se sabe, nunca fructificó como instancia orgánica- si es que ellos mismos hubieran limitado su propuesta al simple retorno de la institucionalidad pre-existente?

La respuesta a esta interrogante no puede darse sino en base a ciertas consideraciones históricas de carácter estratégico dado que, justamente, ese es el alcance del planteamiento, independientemente de las condiciones adversas que existían en el momento en que fuera hecho. Porque, en el caso de Chile, había que partir -más allá de la derrota- de la existencia de un sujeto revolucionario muy vasto e históricamente enclavado en la sociedad civil, materializado en una izquierda que había sido capaz ya en dos oportunidades de acceder al gobierno de la Nación con proyectos propios y cuya influencia, como ha quedado demostrado, ni el fascismo ha logrado aventar. ¿Podía, aún en la adversidad de la situación reinante en lo inmediato, olvidarse un dato estratégico de esa magnitud? Creemos que no. A menos que se olvidara todo el desarrollo histórico alcanzado hasta entonces por la sociedad chilena y que indicaba, entre otras cosas, que ella estuvo madura para la revolución porque ni los proyectos de derecha ni los del reformismo burgués resolvieron su crisis de estructura. El fascismo se veía en la obligación de intentar resolverla; pero históricamente estaba condenado a agravarla por cuanto su "misión" era reimponer, en condiciones aún más drásticas, el predominio del capital financiero, y ante todo, del transnacional. Arriar tan caras banderas estratégicas le habría

sinificado a la izquierda chilena no facilitar el triunfo de la democracia sobre el fascismo, sino dejarle el campo libre a una hegemonía burguesa que, en las condiciones de Chile, es a fin de cuentas la hegemonía de lo más agresivo del capital financiero tanto local como transnacional. Así, la izquierda, en el caso de Chile, tenía no sólo el derecho sino el deber de levantar, en el plano estratégico, un proyecto histórico propio.

Ahora bien, otra cosa es el dominio cabal, en cada fase concreta de la contienda, de la dialéctica existente entre la promoción de un proyecto estratégico propio y la necesidad de llegar a acuerdos más limitados con el objeto de abrirle paso al objetivo prioritario de terminar lo antes posible con la dictadura fascista. Al análisis de esa dialéctica nos abocaremos posteriormente; incluido el porqué no fructifica el Frente Antifascista tal como lo concebía el Partido Comunista en un comienzo y, en función de ello, cuando y en que condiciones el PC vá flexibilizando su visión acerca de la unidad opositora.

En los años 1975 y 1976 una profunda crisis recesiva se precipita sobre la economía nacional. En parte ella se produce como consecuencia de la crisis que afecta en esos años a todo el sistema capitalista; pero sus efectos son agravados, primero, porque ya la dependencia que se establece respecto del capital imperialista ha dejado a la economía chilena en un grado de mucha sensibilidad e indefensión respecto del exterior y, luego, porque las medidas que se adoptan para encararla, en realidad, están orientadas a producir todas las desarticulaciones necesarias para modificar los antiguos patrones de acumulación y lograr una

reinserción del país en el mercado capitalista mundial y en la división internacional capitalista del trabajo acordes con los requerimientos del capital transnacional. Tal es el sentido último del famoso "tratamiento de shock" que aplican los ya vencedores "Chicago boys". El empeoramiento absoluto de la situación de los trabajadores se agrava mucho más; pero también se desencadena la quiebra masiva de pequeños y medianos empresarios y comerciantes, incluso de sectores de la propia burguesía grande, que pasan a ser expropiados por los nuevos centros de poder en torno a los cuales se ha venido reestructurando el capital financiero. Se vá consolidando así la ruptura de la alianza contrarrevolucionaria que le había dado sustentación al golpe de Estado. Pero el centro político continúa inmobilizado.

Se han iniciado ya las manifestaciones de denuncia de los familiares de los detenidos-desaparecidos. A comienzos del año 1975 se han producido también muchas reuniones sindicales a raíz de las reformas regresivas que el régimen pretende imponer al Código del Trabajo. Pero no hay fuerzas suficientes como para transformar la crisis económica en crisis política.

Pinochet, que ya se ha adueñado personalmente del poder dejando atrás la repartición de funciones acordada ~~por~~ inicialmente por la Junta Militar, hace una de sus primeras reuniones con toda la oficialidad del Ejército en la sede de la Escuela Militar con el objeto de asegurar su capacidad de mando sobre la institución cuyo mayoritario poder de fuego y dislocamiento nacional y terrestre le ha servido de base para imponer su primacía sobre los jefes de las demás ramas de las Fuerzas Armadas.

Este último hecho, el de la fuerte personalización del poder por parte de Pinochet, debe ser considerado con toda la importancia que tiene ya que es fuente de algunas "fuerzas" y flaquezas del régimen. Es manifestación de cierto tipo de contradicciones específicas que presenta el caso chileno y establece una de las tantas diferencias que tiene respecto de las pasadas dictaduras "hermanas" que existieron en Brasil, Argentina y Uruguay. Determina también no pocas de las orientaciones de la lucha contra el régimen. Desde el punto de vista operativo-militar, el mando único e individual ofrece ciertas garantías que casi todos los tratadistas sobre el tema concuerdan en reconocer. Pero, justamente, una de las más ~~perxix~~ persistentes críticas que sus partidarios civiles le han hecho a la capacidad gubernamental del dictador es la de no poder ver la situación del país sino como campo de batalla; por lo menos, hasta mediados del año 1966. Esta tendencia no ha sido ajena al notorio fracaso que se ha advertido en la gestión propiamente gubernamental por parte de los oficiales generales y superiores que han asumido tareas estatales. Los ministros militares, los generales y almirantes que llegaron a ser rectores-delegados de las universidades, los coronel-alcaldes y, en fin, los jefes castrenses de muchas direcciones generales del aparato burocrático del Estado, debieron ir cediendo paulatinamente el paso a viejos pero expertos políticos de la ultraderecha o a esta nueva casta de tecnócratas fascistas que tanto predominio e influencia llegó a tener en las orientaciones del gobierno. Los esfuerzos por crear un centro propio de poder intelectual que habilitara a los militares para la apertura en ellos de un criterio verdaderamente gubernamental -representados primero por la fugaz existencia de la Academia

Superior de Seguridad Nacional (ASUSENA) y posteriormente por el llamado Centro de Estudios Públicos- fracasaron como tantos otros intentos militares de incursionar verdaderamente en la sociedad civil. Todo ésto, por cierto, ha redundado en un fuerte sentimiento de frustración corporativa, el que se ha sumado a la frustración que en las demás ramas de la Defensa Nacional provocó el verdadero avasallamiento que contra sus mandos ha significado el escalamiento personal del jefe del Ejército y que, como se sabe, llegó a traducirse en intervenciones directas en los Altos Mandos de la Fuerza Aérea y de Carabineros cuando ocurrieron los episodios de las destituciones de sus respectivos jefes institucionales, los generales Gustavo Leigh y César Mendoza, quiénes, además, dejaron de ser miembros de la Junta Militar que comandó el golpe de Estado . Y en el propio ejército, para concentrar el poder en sus manos Pinochet debió deshacerse lo más rápidamente que pudo de la totalidad del Cuerpo de Generales que lo acompañó durante el golpe militar. Manipulando personalmente la Junta Calificadora que cada año llama a retiro a una cantidad estable de oficiales, o sacándolos del país por la vía de nombrarlos embajadores, pero también llegando hasta el asesinato como en el caso del general de aires populistas Oscar Bonilla, Augusto Pinochet se fué haciendo de un nuevo generalato que, a diferencia del anterior, traía el síndrome de la subordinación a un individuo que ya era Comandante en Jefe de la institución cuando los nuevos generales todavía eran algunos de los tantos coroneles. ¿Podrían haber sido en Chile las cosas de otro modo? La casualidad histórica siempre hará posible la ocurrencia de hechos que escapan a la rigurosidad de la lógica; pero, en tal caso, para un país con un largo predominio de instituciones re-

publicanas (de las que, no obstante, la ilustrada y hábil burguesía chilena ha hecho uso extremadamente coercitivo y en demasiadas ocasiones sangriento), con un movimiento popular y revolucionario que desde el punto de vista estratégico no ha cesado de plantearse como alternativa histórica de poder, el grado de vulnerabilidad dictatorial podría haber sido otro y más inmediato. Al mismo tiempo, la extrema concentración de poder en la persona de Pinochet ha dotado al régimen de una aguda rigidez y estrechamiento de sus posibilidades de recambio; lo que, como se sabe, no ha dejado de producirle fuertes dolores de cabeza a los estrategas de Washington. El atentado contra la vida del dictador del 7 de septiembre de 1986, fallido y todo, dejó a las claras este tipo de vulnerabilidad que ofrece el caso dictatorial chileno. Podrán sacarse más conclusiones sobre este rasgo específico de la dictadura fascista en Chile; pero, lo que más interesa dejar consignado, es que la culminación del proceso de personalización del poder por parte de Pinochet no es un detalle, sino, por todo lo dicho, un cambio cualitativo en la evolución del régimen.

Desde 1977 a 1979 se extiende un período cuyas características más sobresalientes pueden resumirse así: a) término del reflujo popular e inicio gradual de la contraofensiva de las masas; b) desarrollo sistemático de los esfuerzos institucionalizadores por parte del régimen que mantiene la iniciativa en sus manos y aprovecha la fase de reanimación en la que ha entrado la economía del país luego de la crisis; c) elaboración de claras propuestas de gobierno y régimen político y económico alternativos por parte de algunas fuerzas opositoras, y particularmente por parte

del Partido Comunista.

La huelga de hambre que durante diez días mantuvieron cerca de treinta familiares de detenidos-desaparecidos en la sede de la CEPAL en Santiago durante la primera mitad del año 1977, y que logró producir por primera vez una verdadera conmoción política en el país que tuvo ~~serias~~ serias repercusiones en el exterior, y la huelga que el 2 de noviembre de ese mismo año realizaron los trabajadores de la mina de cobre "El Teniente", la primera de una cadena de movimientos huelguísticos que en la gran minería se desataría al año siguiente, señalan el paso del movimiento antidictatorial a otra calidad. Este salto cualitativo madura y se desarrolla con fuerza particularmente durante todo el año 1978. La celebración del 8 de marzo con la primera concentración pública de masas que se haya realizado desde el golpe de Estado, el primer Primero de Mayo efectuado en las calles pese a la prohibición de la dictadura, la tercera ~~gran~~ gran huelga de hambre de los familiares de detenidos-desaparecidos ahora con la participación masiva de miles de personas tanto dentro como fuera del país, y las grandes luchas de los trabajadores de las minas de cobre de Chuquicamata y El Salvador, de los mineros del carbón y de los obreros de la siderúrgica de Huachipato, son los jalones más importantes de la generalización de acciones antidictatoriales y movimientos huelguísticos que se observa durante ese año.

En la ruptura de la situación de reflujo le corresponde la iniciativa a un poderoso movimiento femenino que se vá gestando

y que jugará posteriormente un rol de enorme significación. Parte de este movimiento vá dando origen también a una serie de organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos que se transformarán en un problema insoluble para la dictadura. La clase obrera, cuya irrupción es el principal factor de consistencia de la contraofensiva popular, se apoya en los frutos de su propia lucha para ir resolviendo su dispersión orgánica. El conjunto de las federaciones obreras que ha logrado reiniciar su funcionamiento y en las que se expresan las posiciones más consecuentemente clasistas y combativas dá origen a la Coordinadora Nacional Sindical. Esta, en alianza con otro conglomerado sindical que se ha rearticulado en torno a influencias ideológicas de origen social-cristiano, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), entrega a todo el país una primera plataforma general de exigencias y reivindicaciones: el "Pliego de Chile".

En octubre de este mismo año, ante el avance del proletariado, la dictadura organiza un plan de maniobras, intrigas y provocaciones destinadas a intentar un nuevo descabezamiento del movimiento sindical; pero éste ha adquirido ya la fuerza suficiente como para hacerlo g fracasar. Ni las elecciones sindicales fraudulentas que el régimen organiza para el 31 de octubre logran alcanzar esos propósitos dissociadores. La dictadura replica entonces imponiendo definitivamente un cuerpo de nuevas disposiciones legales que se conocieron como el "Plan Laboral", el que Pinochet incorporó posteriormente dentro de un programa de "modernizaciones". Este Plan Laboral, que sólo logró ser roto por la larga huelga de los obreros que construían la represa hidroeléctrica de Colbún-Machicura en 1982, intentaba crear la imagen,

sobretudo para el exterior, de que en Chile se había entrado en una fase de restablecimiento de los derechos sindicales -principalmente los de negociación colectiva, de asociación, de reunión, de petición, e incluso de huelga-; pero en realidad se trataba de la institucionalización del paralelismo sindical -al decretar la voluntariedad de la cotización, la "libertad" de afiliación y desafiliación sindical y el derecho a formar más de un sindicato por empresa- y, en cuanto al derecho de huelga, lo hacía efectivo tan sólo por un espacio máximo de 60 días al fin de los cuales la parte patronal quedaba legalmente facultada para declarar el "lock-out" y proceder a la total reconstrucción de nuevo personal. Con tasas de desempleo muy por encima de la máxima histórica se puede comprender lo que esta disposición significaba para los trabajadores que habían logrado mantener su empleo. El derecho de reunión también quedaba formal y engañosamente restablecido, sólo que la nueva ley lo restringía al tratamiento de materias estrictamente sindicales; calificación que quedaba al total arbitrio de los agentes policiales que ejercían una estrecha vigilancia de todas las asambleas sindicales.

En el despliegue antidictatorial de 1978 entrará en escena también otro factor: la incorporación a la oposición activa de importantes sectores de las capas medias y de la pequeña burguesía. Muchos colegios profesionales y agrupaciones gremiales de pequeños y medianos empresarios y comerciantes, que cierta notable participación tuvieron en la conformación de la base de sustentación social del golpe de Estado de 1973, rompen el estado de neutralidad que había sucedido a dicho apoyo y, uno tras otro, comienzan a pasarse a la oposición franca y abierta.

Por otra parte, la acción conjunta de las asociaciones de familiares de víctimas de la represión y la Iglesia Católica, a cuya influencia no es ajena la filtración de información que comienza a darse por parte de los agentes secretos del régimen, logra las primeras develaciones sobre los alcances de los crímenes perpetrados. En los hornos abandonados de una mina de cal en la localidad rural de Lonquén, así como en otros sitios, se descubren fosas clandestinas en las que han sido amontonados decenas de cadáveres de presos políticos desaparecidos. Ello, provoca la conmoción de una población que debe empezar a enfrentarse cara a cara con los horrores de una realidad cuyos alcances verdaderos desconocía. Las periódicas peregrinaciones hacia dichos lugares también alcanzan dimensiones de masas. La dictadura dinamita los hornos de Lonquén creyendo cerrar así el capítulo. En estas circunstancias nace la Comisión Chilena de Derechos Humanos integrada por personalidades que representan casi todo el arco opositor que se ha venido desplegando. Desde entonces, casi cada paso que dé la dictadura estará seguido de alguna iniciativa alternativa por parte de la oposición. La apertura de las investigaciones de los asesinatos del ex-comandante en Jefe del Ejército general Carlos Prats y del ex-canciller Orlando Letelier, realizados en Buenos Aires y Washington respectivamente por orden expresa de Pinochet, aumenta el sentimiento nacional e internacional de repulsa hacia el régimen.

En julio de 1977 Pinochet ha dado inicios al plan de institucionalización del régimen que tan reiteradamente le han venido reclamando sus partidarios y colaboradores civiles. Por primera vez ofrece iniciar los estudios para la redacción de una nueva

constitución política. Promete, además, que en 1980 designará una cámara legislativa y que en 1991 habrá elecciones presidenciales. Todo ello enmarcado en el concepto de "democracia protegida" que también dá a conocer por primera vez. La administración norteamericana se apresura a aplaudir dichos anuncios interpretándolos como una disposición verdadera de avanzar hacia la democracia. En el transcurso de 1970 Pinochet le encarga a una comisión designada personalmente por él, y que encabeza el jurista ultraderechista Enrique Ortúzar, que redacte un proyecto constitucional. Dicho proyecto, que contenía ya las bases de la constitución fascista finalmente impuesta en 1980 -pero que, entre otras tantas diferencias con ésta negaba el derecho a sufragio a los miembros de las Fuerzas Armadas-, es trasladado para un segundo estudio al llamado Consejo de Estado, organismo de carácter consultivo también designado ~~personalmente~~ personalmente por Pinochet y que vá muriendo de "muerte natural" por las sucesivas renunciias a él por parte de sus miembros más prominentes. Finalmente, y como se sabe, Augusto Pinochet desecha abruptamente ambos textos y, en el fraude plebiscitario de septiembre de 1980, impone una redacción que le ha estado preparando en secreto su asesor fascista "hispanico", ya nombrado en el primer capítulo, Jaime Guzmán.

En el trasfondo de estos afanes constitucionalistas, a principios de 1970, y dada la situación que tanto nacional como internacionalmente le ha creado la develación de algunos de sus crímenes más horribles, Pinochet decide iniciar algunos cambios cosméticos. Cambia el Estado de Sitio -que hasta ese momento ha imperado ininterrumpidamente pero que más tarde restablece des-

bordado por el auge de la movilización de masas- por el llamado Estado de Emergencia que, a fin de cuentas, posee casi las mismas atribuciones del anterior. Disuelve su policía secreta, la DINA, pero la reemplaza por la Central Nacional de Informaciones, CNI, que es exactamente lo mismo. También cierra los campos de concentración de conocimiento público -aunque durante las ofensivas populares de los años 80 reabre muchos puntos de confinamiento reiniciando la práctica de las relegaciones a lugares apartados del territorio nacional-; pero, al mismo tiempo, mantiene las cámaras secretas de tortura de su recientemente creada CNI.

En la ejecución de tales operaciones cosmetológicas se advierte el impacto que le ha causado el fracaso de la "consulta popular" que, organizada con 72 horas de antelación, realizara el 4 de enero de 1978 para responder a la condena que por quinta vez ha aprobado la Asamblea General de la ONU ante la violación sistemática de los derechos humanos en Chile. A raíz de este fracaso, y por el agravamiento de la situación respecto de la develación de los crímenes ya anotados, se agudizan las contradicciones en el seno de la Junta Militar creándose una situación crítica respecto del jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh, quien entrega su criterio contrario a la personalización del poder por parte de Pinochet y plantea que las Fuerzas Armadas debieran apresurar su vuelta a los cuarteles dejándole el gobierno a los civiles. Pinochet dá un golpe de mano. Arresta por algunas horas a Leigh en la propia sede del ministerio de defensa, lo destituye, rodea con sus hombres del ejército las principales bases aéreas, interviene personalmente el Alto Mando aeronáutico

y designa, pasando por encima de toda la escala de antigüedades, al general Fernando Matthei como nuevo jefe de esa rama de las Fuerzas Armadas y, en esa calidad, nuevo miembro de la Junta Militar. Gustavo Leigh, quien la misma noche del 11 de septiembre de 1973 amenazara al país con "extirpar el cáncer marxista", pasa a retiro sin que ninguno de sus compañeros de armas haya disparado un solo tiro en su defensa ni en defensa del cargo que ostentaba. Sólo mucho después, en el marco de las grandes jornadas nacionales de protesta de los años 80 y en la campaña plebiscitaria de 1988, el general retirado Gustavo Leigh aparecerá haciendo causa común con la oposición. Pinochet había sorteado el episodio sin que un hecho tan grave llegara a producir una verdadera crisis política en las alturas del régimen. Una vez más quedaba demostrada la debilidad relativa que, pese a todo su auge, mostraba aún el movimiento opositor de masas.

El agravamiento de los conflictos limítrofes con Argentina, que tuvo alcances de verdadera amenaza de guerra por la fiebre chovinista de los fascistas que a ambos lados de la cordillera se encontraban en el poder, constituyó otro asomo de crisis que, sin embargo, fué también conjurado más tarde al llegar al acuerdo -en verdad, discutido por la marina de guerra chilena- de reafirmar las propuestas de paz hechas por el arbitraje del Vaticano. Así, en medio de un panorama en el que ya se advierte el período de crisis que advendrá sobre el régimen, este se esfuerza por mantener su poder de iniciativa extendiendo aún más la represión, que ya alcanza de plano a demócratacristianos y otros representantes del centro político, y planteando por boca de su principal exponente la idea de que con 1979 termina un supuesto

período de "reconstrucción nacional" iniciándose una nueva etapa así llamada de "modernización". Muchos partidarios e incluso personeros de la dictadura, y hasta ciertos representantes opositores, comienzan a hablar de la inminente apertura de un inexistente "período de transición". Todo ello sobre la base de los ajetreos constitucionalistas iniciados por el oficialismo. El más eminente vocero de la prensa pro-dictatorial, el diario "El Mercurio", manejándose siempre en su lenguaje de aparente objetividad, pone sobre el tapete la discusión de si los comunistas quedarán fuera o dentro de la proyectada futura institucionalidad fascista.

El mismo año 1978, en medio de los estudios constitucionales de la comisión Ortúzar, 24 juristas opositores deciden constituir el Grupo de Estudios Constitucionales y llegan a redactar varios textos de crítica al proyecto Ortúzar y otros que representan las bases de una propuesta constitucional democrática alternativa. El Partido Comunista, en una declaración pública de octubre de ese año, expresa su opinión al respecto diciendo que: "Un punto importante de convergencia surge en torno a la reforma constitucional y al debate planteado acerca de la nueva institucionalidad. El proyecto de Constitución de Pinochet -agrega- pretende consolidar un modelo autocrático y fascista que, junto con dar amplias garantías a los monopolistas de la gran burguesía, excluyera y caracterizara como ciudadanos de segunda o tercera categoría a todos los que profesan ideas de izquierda, proscribiendo absolutamente a los partidos Marxistas (...) desde ya planteamos -dice en otro pasaje- que toda Constitución pinochetista será ilegítima (...) El funcionamiento de la Comisión de los 24,

-agrega después- donde participan destacadas personalidades y juristas democráticos, su extensión y su voluntad manifiesta de recibir colaboraciones y aportes de todos los sectores, la transforman en un valioso canal de expresión y muestra que es posible llegar a elaborar un proyecto de nueva institucionalidad que refleje un consenso verdaderamente mayoritario. Reiteramos que estamos por una modificación profunda del ordenamiento constitucional vigente al 11 de septiembre de 1973 (...). La nueva Constitución -afirma- debe ~~se~~ brotar de la voluntad del pueblo libremente expresada a través de elecciones y mediante el trabajo de una Asamblea Constituyente (...). Se impone la urgente necesidad de dar una ~~xxx~~ respuesta al intento de la tiranía presentando sin tardanza una alternativa institucional, democrática, suficientemente amplia y clara, que responda a los verdaderos intereses del país y a la voluntad de los chilenos. Se trata de concordar esfuerzos para desarrollar una situación en que el pueblo pueda decidir sobre el futuro (...). Tiene que plantearse ante los trabajadores, -insiste- en cada sindicato, en las poblaciones, en la ciudad y el campo, en escuelas y universidades. Ha de llevarse a la calle, combativamente, y transformarse en materia de movilización pública unitaria. Se trata de abrir a través de la ~~x~~ proposición de una Constitución democrática, una nueva frente de lucha contra el fascismo. Hay que desenmascarar, marcar a fuego el proyecto Pinochet-Ortúzar, hacerlo naufragar, aunando a todos los opositores sin exclusión. Proponemos -continúa- que la nueva Constitución esté basada en la rica experiencia y en las conquistas democráticas logradas por nuestro pueblo y se inspire en la Declaración de los Derechos Humanos y Sociales de las Naciones Unidas, tomando en su redacción todo aquello que sea válido de

la Constitución del 25 y adoptando los avances consagrados en las más recientes constituciones progresistas. Grandes posibilidades de acción conjunta, -concluye- de movilización de las masas y de acuerdos políticos surgen en torno a la reforma constitucional y al debate planteado acerca de la nueva institucionalidad"(4)

La actividad de las fuerzas opositoras en torno a la cuestión institucional no logró alcanzar, lamentablemente, los niveles propugnados por los comunistas en esta y en otras declaraciones y documentos. El grado de convergencia llegó a ser, efectivamente, muy alto. Estimulado, además, por un mejoramiento general del clima de concertación en el campo opositor que, ya a estas alturas, está conformado claramente por las fuerzas de izquierda y las del centro político. La derecha no-fascista, si bien ha sido ya casi totalmente desalojada de las esferas del régimen, se encuentra inmovilizada, aún no integrada orgánicamente y sin proyecto alternativo propio; lo que la mantiene en un transitorio estado de neutralización política. En cambio, la aparición del documento demócratacristiano "Una patria para todos", a comienzos de 1978, representa ya una propuesta alternativa propia con alcances de plataforma programática contentiva de muchos puntos que los comunistas valoran positivamente. Los textos elaborados por "los 24" -a cuyo grupo se han integrado personalidades representativas de todos los sectores opositores, incluso del Partido Comunista- logran una gran difusión y alcanzan a ser discutidos en variados círculos; pero no llegan a traducirse en un completo texto constitucional alternativo al de Ortúzar. Ello se explica por el propio proceso de acuerdos y desacuerdos opositores transcurridos durante este período, no

sólo respecto de la futura institucionalidad democrática sino ~~x~~ también de los pasos concretos a dar para abrirle paso.

Ya en el Manifiesto de mayo de 1977 dado a la publicidad por el Partido Comunista podía leerse lo siguiente: "Los comunistas luchamos por el derrocamiento de la tiranía y su reemplazo por un gobierno de todas las fuerzas democráticas, que erradique totalmente el fascismo y dé paso a un nuevo régimen democrático y al reinicio de los cambios sociales. El Partido Demócratacristiano propicia otra solución, la del paso gradual a un régimen de democracia burguesa. Consideramos de suma importancia el dilema de fascismo o democracia; pero, además, estamos convencidos de que ~~Chile~~ Chile necesita ir más allá. Es preciso un nuevo régimen democrático fundamentalmente al servicio de los trabajadores de la ciudad y del campo y de las capas medias. Esto no es un planteamiento sectario ni estrecho. No es una utopía. Tras el quiebre de la vieja institucionalidad debe surgir una institucionalidad democrática nueva, más libre, más avanzada y de mayor contenido social"(5).

En el Informe al Pleno del CC del PCCH, realizado en agosto de ese mismo año, en cambio, se dice que: "Entre los antifascistas existen diferencias y no es nuestro interés ocultarlas. Pero ellas no impiden la coincidencia de todos en la necesidad de crear en Chile una nueva democracia y ~~en~~ en dar curso a los cambios maduros en la sociedad chilena que apunten a eliminar la base social del fascismo, es decir, la oligarquía interna y el predominio imperialista, asuntos en relación con los cuales se han expresado desde hace tiempo coincidencias importantes entre

las fuerzas que se oponen a la tiranía"(6).

Pudiera parecer un contrasentido. Según el Partido Comunista las diferencias con la Democracia Cristiana, que hasta mayo propiciaba el "paso gradual a un régimen de democracia burguesa", ya en agosto "no impiden la coincidencia de todos en la necesidad de crear en Chile una nueva democracia y en dar curso a los cambios maduros en la sociedad chilena que apunten a eliminar la base social del fascismo, es decir, la oligarquía interna y el predominio imperialista". La respuesta la dá el propio Informe que, más adelante, plantea las cosas en los siguientes términos: "Estamos intimamente convencidos -dice- que Chile necesita el socialismo. Ayer, y con mayor razón hoy, había condiciones objetivas para marchar en esa dirección. En cambio, -asegura- el proyecto demócratacristiano -si bien contiene importantes propósitos democráticos y progresistas- es fundamentalmente, hasta hoy, un proyecto de conservación del capitalismo, sin perjuicio de considerar indispensable modificaciones de carácter reformista del sistema. Tal diferencia, -agrega- que no es precisamente secundaria, no es ni puede ser, sin embargo, un obstáculo insuperable para echar abajo a Pinochet. En Europa, durante la ocupación fascista, ~~xxx~~ se unieron contra Hitler y sus lacayos y lugartenientes tanto partidarios del capitalismo como del socialismo. En Chile debe ocurrir igual y dejar luego al pueblo que decida democráticamente qué sistema prefiere (...) La unidad que proponemos -concluye- es para echar abajo a la tiranía y, en seguida, para crear en conjunto un sistema democrático, antifascista, que es la garantía común para todos a quienes convocamos al reencuentro de los chilenos; sólo en tales condiciones podrá el pueblo

resolver libremente sobre su porvenir"(7).

Tal es la dialéctica con la que los comunistas van promoviendo su propio proyecto democrático y, al mismo tiempo, propiciando la unidad en un proyecto común con quienes, como los demócratacristianos, levantan una alternativa históricamente distinta. La vida ha demostrado y sigue demostrando las enormes complejidades y dificultades de ese camino; pero, al mismo tiempo, se ha encargado de demostrar también que para un caso como el chileno -en que frente al fascismo se plantean, en términos objetivos, dos proyectos con posibilidades de realización, con potencialidades hegemónicas- no existía ni existe ninguna otra manera de encarar la lucha antidictatorial. Hay, efectivamente, una experiencia histórica -como aquella a la que apelan los comunistas chilenos en su Informe al Pleno-; pero, por cierto, su invocación tiene sólo la validez de todo punto general de referencia. Entre la ocupación fascista en Europa hace ya algunas décadas y la dominación del fascismo dependiente en el Chile de los años 70 y 80 hay distancias que son determinantes, entre otras cosas, para ver de qué modo concreto se puede ir planteando la cuestión del frente antifascista. La expresión de tales distancias ha sido, justamente, lo que ha llevado al PCCH -a partir del propio Pleno de agosto de 1977- a una creciente flexibilización de su planteamiento inicial sobre tal cuestión.

Y, pese a todos los esfuerzos por parte de los comunistas, por parte también de otros partidos políticos y de organizaciones y movimientos sociales, pese a todo el clamor unitario que ha surgido y sigue surgiendo desde la base del pueblo, el asunto

de la unidad opositora es, hasta ahora, un problema no resuelto. La principal responsabilidad histórica de ello la tiene, sin lugar a dudas, el sector más derechista de la democracia cristiana que ha estado imponiendo en ese partido una conducta antiunitaria, en particular, respecto de los comunistas. Este es un dato objetivo del problema. La explicación, en todo caso, no puede ni debe buscarse en el terreno de la ética; sino en el de los intereses políticos de clase. Ese sector quiere terminar con la dictadura porque es partidario de la democracia; pero de la democracia burguesa, de aquella que -más allá de los elementos progresistas y reformistas que puede contener- se plantea en el marco de la conservación del capitalismo. El Partido Comunista y otros sectores de la izquierda no se plantean, en lo inmediato, una democracia socialista; pero sí avanzada, superior a la que existió hasta antes del golpe fascista. Y esta diferencia de proyecto histórico está íntimamente relacionada con la forma a través de la cual se pase de la dictadura a la democracia. La verdad es que la democracia cristiana no se ha mostrado nunca ciertamente partidaria de la idea del derrocamiento de la dictadura y, en cambio, ha invertido grandes esfuerzos buscando, vanamente, su cambio gradual. Tampoco ha participado de la propuesta hecha por los comunistas de proscribir el fascismo en el futuro régimen democrático. En cuanto al planteamiento de evitar el vacío político estableciendo un Gobierno Provisional también lo ha rechazado, por lo menos en la forma en que hasta ese instante ha sido formulado por los comunistas; es decir, como un gobierno de coalición en el cual participen todas las fuerzas que hayan actuado en la lucha antidictatorial, tanto civiles como militares. Por ello es que también este ~~xxxx~~ punto fué poste-

riormente flexibilizado por el PC. ¿Se trata, entonces, de un problema sin solución, totalmente inviable? No, la solución está precisamente, además de la justeza y el realismo con que se planteen las formulaciones políticas de la izquierda, en la fuerza con que se exprese el movimiento antidictatorial de las masas; toda vez que, como ha quedado expresado en los documentos comunistas, no existen tan sólo diferencias sino también importantes concordancias, las que, por lo demás, en distintas fases del movimiento, se han fortalecido o debilitado según haya sido, justamente, la fuerza y envergadura de la acción de las masas. Tal ha ocurrido, por ejemplo, con la propuesta de que una Asamblea Constituyente -o Parlamento con poderes Constituyentes- redacte una nueva Carta Fundamental que sea aprobada por el pueblo en un referendun. En el caso de la discusión constitucional de este período la acción de las masas no alcanzó el grado que le permitiera imponer un acuerdo sobre una propuesta alternativa completa; lo que fué un factor de importancia para no haber enfrentado el "plebiscito" de 1980 en mejores condiciones.

En 1979 Luis Corvalán dá a la publicidad "Nuestro Proyecto Democrático", importante trabajo de elaboración de la propuesta comunista que representa una nueva fase de desarrollo respecto de los planteamientos que sobre el régimen futuro hiciera el Pleno de 1977 y que gravitará en la nueva etapa de la primera mitad de los años 80. También en 1979 se realiza un nuevo Pleno del CC del PCCH. Sus conclusiones más importantes están condensadas en el Manifiesto de Mayo de ese año. De su texto extraemos una de estas conclusiones: "Puede decirse -se afirma- que nos encontramos en el período de deslinde entre la prolongada etapa en

que el pueblo ha mantenido esforzadamente la defensa de sus derechos frente a la ofensiva terrorista de la tiranía y una nueva ~~nueva~~ fase en que asume la iniciativa. Hay todavía no pocas dificultades que vencer. Subsiste cierta dispersión de fuerzas, incluso algún temor. Pero todo esto va superándose y es superable"(8).

Pasaremos a examinar los cambios cualitativos que experimenta la correlación de fuerzas en esta nueva fase, la de la crisis del régimen dictatorial, en la que las masas efectivamente terminan arrebatándole la iniciativa y provocándole con ello, una crisis política "en las alturas".

#### Primera fase del período de crisis del régimen dictatorial.

En 1960 el movimiento sindical reafirma su proceso de rearticulación orgánica al llevar a efecto en su base una serie de importantes elecciones democráticas para la formación de sus organismos directivos. De hecho, una gran cantidad de sindicatos han reconquistado los derechos de reunión y asociación y consolidan su funcionamiento ganando para ello, de facto, importantes "espacios de libertad". El paralelismo sindical promovido por el régimen no ha prosperado a nivel de los sindicatos de base; pero aún persiste el separatismo ideológico a nivel de las federaciones, confederaciones y centrales nacionales.

El movimiento estudiantil, que en los años sucesivos jugará un rol de primera línea, entra en un proceso de irreversible

ebullición protagonizando grandes combates contra la intervención militar y policial de las universidades, pronunciándose en contra de la política de "autofinanciamiento" de éstas propugnada por el régimen, resistiendo el cierre de escuelas y carreras dedicadas a las ~~xi~~ ciencias sociales y revelándose ante los primeros intentos dictatoriales -que alcanzarán enorme magnitud hacia 1967- de privatizar una serie de facultades para entregarlas en calidad de empresas al dominio de los grandes grupos económicos. La dictadura responde con la expulsión de las aulas de estudiantes y académicos, lo que recrudece la lucha de los universitarios.

El funcionamiento "pre-crítico" del esquema económico afecta ya claramente los intereses de vastos sectores de agricultores, de los transportistas y de la gran mayoría de los comerciantes. Estos sectores, que tan significativa participación tuvieron en el proceso de desestabilización del gobierno de Salvador Allende, pasan de sus declaraciones críticas a la oposición activa y, con ello, pasan también a engrosar el campo de víctimas físicas de la represión fascista.

El régimen resuelve pasar a niveles superiores de represión masiva. Comienzan los grandes operativos bélicos de cerco y ataque a las barriadas populares, hacen su aparición ~~xx~~ los comandos terroristas secretos -prácticas que luego se harán sistemáticas- y menudean los asesinatos y secuestros de opositores. A través de un nuevo decreto la policía secreta -CNI- queda facultada para mantener a los presos hasta 20 días en sus cámaras de tortura sin dar cuenta de dichas detenciones a los ~~tribunales~~ tribu-

nales competentes. La Iglesia Católica levanta su voz de protesta ante estos atropellos; pero la dictadura responde con la detención de obispos y vicarios, el asalto del arzobispado en horas de toque de queda y la invasión de actos litúrgicos y colocación de artefactos explosivos en los templos por parte de sus secretos "escuadrones de la muerte". Esta oleada represiva, que es el marco en el cual se desenvuelve la campaña plebiscitaria para imponer la institucionalización del fascismo, deja en claro que la dictadura se orienta a cerrar definitivamente todo camino de expresión pública a los opositores.

Con todo, la campaña plebiscitaria del régimen inevitablemente pone sobre el tapete, por primera vez de un modo tan directo, la cuestión del poder político. Las fuerzas opositoras, que hasta ahora se habían venido movilizándose sectorialmente, convergen -también por primera vez- en un objetivo político general perfectamente delineado para todos: impedir la insititucionalización del poder dictatorial fascista. No lo logran; pero ha sido la propia dictadura quien ha puesto ante los ojos y la conciencia de todos la cuestión de dónde radica el problema principal. No es por casualidad que desde entonces todas las propuestas políticas opositoras contengan, además de alternativas de régimen futuro, consideraciones acerca de las estructuras gubernamentales y estatales provisionales, de transición o de emergencia precisas a través de las cuales dichos proyectos pueden abrirse paso; requisito que hasta este instante sólo cumplían, de modo sistemático, las propuestas comunistas. Este es también un cambio cualitativo de la situación.

Ligado con lo anterior hace su entrada a la escena otro nuevo factor: la derecha no-fascista, ahora ya integrada orgánicamente aunque aún con un proyecto propio muy en ciernes, se incorpora definitivamente al arco opositor. Las colisiones económicas y "extraeconómicas" con el régimen por parte de sectores sociales que ella tradicionalmente representó, le han creado un espacio político propio y la han dotado de su propia base de sustentación social como para jugar su rol desde la oposición. Esto, como se comprenderá, amplía y a la vez complica la correlación de fuerzas para el campo antidictatorial.

Queda así conformada, en términos generales, la totalidad de representaciones políticas de la oposición que actuará a futuro. Sucederán todavía una serie de realineamientos, algunos muy importantes, pero desde este instante habrá que constatar que existe una oposición de izquierda, otra de centro y una de derecha. De esta novedad cualitativa tendrán que hacerse cargo, por cierto, los comunistas y la izquierda en la sucesiva elaboración de su alternativa. Vendrán también coaliciones distintas a la única hasta ahora existente -la de la Unidad Popular-; pero ese ya será un segundo gran momento en la conformación político-partidaria de la oposición chilena.

Los mayores problemas en este plano se le producen, en todo caso, a los organizadores del "plebiscito" constitucional. Como anotábamos en el primer capítulo, el régimen ha fracasado por segunda vez en sus intentos de crear su representación político-partidaria -civil o cívico-militar- propia. Este hecho, desde luego, jugó su rol en el apoyo civil prácticamente insignifican-

te que mostró el régimen en favor de su alternativa plebiscitaria. Esto reforzó la imagen de aislamiento que tanto nacional como internacionalmente proyectaba en esos momentos. Cabe recordar que son los mismos instantes en que se produce el grotesco episodio de Filipinas y las Islas Fidji en que Pinochet debe retornar a Chile, estando en pleno vuelo hacia esos países, porque su visita oficial a ellos ha sido abruptamente suspendida por los anfitriones -uno de los cuales era ni más ni menos que Ferdinando Marcos- en vista de la repulsa popular que en esos países ha levantado el sólo anuncio de la llegada del dictador chileno. En el seno del régimen las pugnas entre "duros" y "aperturistas" generan tensiones muy violentas. Pablo Rodríguez Grez, ex-jefe del movimiento fascista "Patria y Libertad", consciente de la crisis que más allá de ciertas apariencias se viene encima, llega a confesar públicamente a través de la propia prensa oficialista que: "la estructura política del gobierno militar permanece cristalizada con peligrosísimos vacíos (...) vivimos, en consecuencia, el trance más difícil del gobierno militar" (9). "El Mercurio", por su parte, tocando una campanada de alerta sobre otro síntoma de la crisis a la que está entrando el régimen y que ha hecho su irrupción pública por esos ~~días~~ mismos días -la corrupción-, expresa: "La experiencia histórica repetida una y mil veces enseña que la debilidad de los regímenes fuertes anida en la corrupción. El abuso del poder con fines personales grandes o pequeños, el tráfico de influencias, la obtención de privilegios en beneficio del grupo gobernante, son males que hay que vigilar sin desmayos. En este punto -concluye- reside la flaqueza de lo que pudo parecer tan vigoroso y bien armado"(10). Como puede apreciarse, entre algunos fascistas más experimenta-

dos hay plena conciencia de lo que, más allá del "plebiscito", se está gestando a pasos agigantados.

Es en este cuadro que el PC plantea su política de rebelión popular de masas. Luis Corvalán, hablando ante una asamblea de militantes del PCC en Berlín el 31 de enero de 1981, explica las variables que se tuvieron en cuenta para la adopción de estas decisiones de la siguiente manera: "En los últimos planteamientos del Partido -dice- tuvieron su incidencia los acontecimientos de los primeros meses de 1980, la forma brutal con que la dictadura reprimió las manifestaciones populares del 6 de marzo y el Primero de Mayo. Entonces quedó en evidencia -explica- que la tiranía había decidido cerrar toda posibilidad de desarrollo y expresión pública del movimiento de masas. Aquel discurso del día 3 de septiembre, en vísperas del X aniversario del triunfo de Salvador Allende, no estuvo, pues, determinado, como algunos han creído, sólo por el llamado a plebiscito que hizo Pinochet para imponer la constitución fascista y autoproclamarse Presidente de la República. Es después que se produce un cambio en la situación, -continúa- después que el fascismo termina por imponer su modelo económico, lleva adelante la generalidad de sus planes, acentúa a la vez el control sobre todos los medios de publicidad y arrecian las medidas represivas, después que el movimiento popular obtiene importantes avances -pero no suficientes- y se establece, como quien dice, una situación de techo, es después de todo eso que empieza a madurar en la conciencia de las masas la necesidad de meterle más leña. Es entonces cuando nuestro Partido plantea recurrir a las más diversas formas de combate"(11).

En el mismo discurso del 3 de septiembre se dice, además, otra cosa. Corvalán afirma que "Se hacen humo las ilusiones respecto de una presunta liberalización del régimen. Se cierran los caminos para la evolución gradual con que algunos han soñado (...). Todos los opositores -dice más adelante- están en contra del fraude plebiscitario. El abanico de la resistencia es muy amplio. Representa a la abrumadora mayoría del país. La decisión y firmeza con que se enfrenta estos días a la tiranía tendrá una marcada incidencia en la moral de combate y la fuerza con que el pueblo saldrá de esta prueba"(12).

Hay todavía algo más que fué abordado el 3 de septiembre en sus términos más positivos, visto como una necesidad; pero dejando entrever, al mismo tiempo, los riesgos que ya implicaba la forma concreta que estaba tomando el giro de los acontecimientos. Se dice que la Unidad Popular "respondiendo a una necesidad se ha abocado al análisis de sí misma. Colectiva y separadamente, sus ~~partidos~~ partidos han considerado, sobre todo en los últimos tiempos, las causas de la derrota de 1973, los cambios que el régimen fascista ha introducido en la economía y en la sociedad y los objetivos futuros del movimiento popular"(13). Se enumera más adelante una cantidad de coincidencias fundamentales, tales como la de fortalecer la UP, hacer que ésta presente ante el país su propio proyecto histórico renovado que contenga las nuevas tareas que han sido puestas a la orden del día y que al mismo tiempo siga mostrando una perspectiva de avance democrático hacia el socialismo, que promueva el acuerdo con todas las fuerzas opositoras para terminar con el fascismo y que, para fortalecer este acuerdo, y para fortalecer la propia Unidad Popular, que-

pan entre sus propios partidos nuevas concordancias y entendimientos. La enumeración termina, sin embargo, con una exhortación a "apretar más nuestras filas". Hay que hacer notar que en los mismos instantes en que se pronunciaban estas palabras comenzaba a brotar en algunos sectores opositores, incluso de la UP, un cierto sentimiento de desánimo, de desaliento por el aparente éxito del modelo económico de la dictadura, porque ésta efectivamente ~~aparecía~~ aparecía llevando adelante "la generalidad de sus planes", porque la fuerza de la represión hacía insuficiente los importantes avances del movimiento popular como para detenerla; porque los menos veían la crisis que se incubaba, en fin, porque todo ello había establecido verdaderamente una "situación de techo". Luego de la imposición del fraude plebiscitario constitucional estos sentimientos se acentuaron.

¿Correspondían los nuevos planteamientos del PC a la situación realmente existente? ¿Ayudaban ellos a su mejor desarrollo ulterior? La crisis en todos los planos a la que entró el fascismo en el poder, reconocida nítidamente de esa manera por absolutamente todos los sectores opositores -incluso por instituciones nacionales como la Iglesia Católica- a partir de 1983, dá una respuesta positiva a dichas interrogantes. Porque la elocuencia propia de los hechos dice, con irrefutable claridad por lo menos entre los años 1983-1986, que la expresión fundamental que llegó a adquirir esa crisis fué la de una vehemente rebelión popular de las masas. Pero, ¿y por qué tan sólo a partir de 1983? ¿Ayudaron los acontecimientos de los años 1981 y 1982 al desarrollo tan generalizado y arrasador que posteriormente adquirió la

la rebeldía de las masas; o los planteamientos del PC, resultando ser justos en definitiva, fueron hechos de un modo prematuro? Y, lo que es más complejo aún preguntarse, ¿termina la rebelión popular en el paro nacional del 2 y 3 de julio de 1986 sin haberse dado el "paso decisivo", la sublevación nacional o levantamiento democrático de las masas, con ~~que~~ el que se preveía poner fin a la dictadura?

Habrá que analizar primero los acontecimientos de 1981-1982.

En esos años la forma principal que adquiere el accionar opositor frente a la crisis económica ya desatada es la actividad huelguística de la clase obrera y demás acciones de los trabajadores. 1980 había terminado con una huelga que durante dos meses habían mantenido los obreros de una industria textil. La importancia de esta acción había radicado, más que en el número de obreros en huelga, en las formas combativas con que había sido llevada adelante orientadas a intentar romper el Plan Laboral del régimen, y además, en las impresionantes muestras de solidaridad que había concitado no sólo por parte de otros sindicatos obreros; sino también de parte de otros sectores sociales, principalmente artistas, estudiantes y, una vez más, el movimiento femenino. Estas nuevas características llegarán a constituir el marco obligado de todas las futuras acciones de la clase obrera; lo que permitirá a los trabajadores convertirse, hacia 1983, en el sector social con mayor poder de convocatoria nacional.

En tales condiciones, el movimiento huelguístico de 1981

adquiere dimensiones mayores por cuanto se expresa en movimientos de larga duración y, los más importantes de ellos, en centros de gran concentración proletaria. Se suceden, una tras otra, las grandes huelgas de los trabajadores de la mina de cobre de El Teniente, durante dos meses, la huelga de los mineros del carbón inmediatamente después del 11 de marzo de ese año -fecha en la que Pinochet había iniciado el "período presidencial" dictado por su nueva constitución- y que tuvo como característica importante el hecho de que estos mineros discutieran y aprobaran en una de sus asambleas sindicales la tesis de la rebelión popular de masas; finalmente, la huelga de los trabajadores portuarios constituyó un gran acontecimiento nacional al paralizar todos los puertos de Chile en contra de los planes de la dictadura de privatizarlos.

Con toda la fuerza de esta potente ofensiva de los trabajadores la Coordinadora Nacional Sindical presenta ante el país un Pliego Nacional de Peticiones, verdadera plataforma programática que condensa las posiciones del movimiento sindical ante la crisis económica que ya se ha desencadenado y que, como ha sido y continúa siendo característico del movimiento obrero chileno, no sólo plantea las reivindicaciones más específicas del proletariado, sino también la de todos los sectores afectados por la política dictatorial -incluidos sectores empresariales-, además de las reivindicaciones políticas generales, antifascistas, de todo el pueblo de Chile.

En 1982 adquiere un mayor desarrollo la movilización de otro sector importante de la clase obrera, cada vez más numeroso por

por obra de la política económica del régimen: los centenares de miles de desocupados, el enorme ejército industrial de reserva creado por la dictadura. De la primera forma de organización, las llamadas "bolsas de cesantes", se ha pasado a una forma de acción que concita la movilización solidaria de mucha gente: las "ollas comunes" de cesantes, gigantescas cocinas del pueblo en las que, además de dar alimentación mínima a los desocupados con lo que ellos mismos y la gente han recolectado, se discuten y aprueban nuevas formas de lucha,

1962 finaliza con la gran huelga de los miles de obreros que construyen la represa hidroeléctrica de Colbún-Machicura; histórica por ser la primera que logra romper el Plan Laboral de la dictadura.

También en este año se despliegan otras formas de lucha que involucran en la movilización de masas a otros sectores. El Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda han promovido, como forma de acción vecinal, el no pago de las deudas; método que rápidamente se extiende dado el empeoramiento absoluto de la situación económica del pueblo. Grandes masas de la población dejan de pagar alquileres, las cuentas del agua, la luz y el gas. Es también un método que pronto es adoptado por sectores de la pequeña y mediana burguesía. Empresarios y comerciantes cesan de pagar sus deudas a los bancos, justamente en los momentos en que muchos de éstos quebraban por un proceso general de cesación de pagos de parte de las empresas que habían recibido créditos y que también caían abatidas por los efectos de la crisis.

Esta oleada de quiebras produce especiales estragos en el agro. La apertura de la economía nacional hacia el exterior promovida por el régimen, y una de cuyas bases era un supuesto dinamismo que adquirirían las llamadas exportaciones no-tradicionales según el principio de las "ventajas comparativas", ha significado una verdadera catástrofe para los propietarios agrícolas dedicados a los cultivos tradicionales, especialmente trigueros. Sus predios comienzan a ser rematados. Esto produce una verdadera rebelión de dueños de fundo; los que también comienzan a ser fuertemente reprimidos. Se genera una situación inédita: en muchos casos patronos y campesinos se movilizan juntos para impedir los remates. Si la situación de muchos propietarios agrícolas se ha tornado desastrosa, caben imaginar los límites a los que ha llegado la situación del campesinado. Este, que en el transcurso de 1962 ha entregado también un aporte importante al proceso de unidad sindical uniendo la totalidad de las organizaciones campesinas existentes en una sola Comisión Nacional Campesina, con una plataforma reivindicativa común, entiende que si bien es cierto su antagonismo de clase respecto de los dueños de fundo persiste plenamente vigente, los intereses de la lucha antidictatorial que se extiende por todo el país hacen permisible esta suerte de acción común. La represión dictatorial también alcanza características inéditas: con un mismo decreto son expulsados del país el presidente de la Coordinadora Nacional Sindical, obrero demócratacristiano, el presidente de la Federación de la Construcción, obrero comunista, y el presidente de la Asociación de Productores de Trigo, dueño de grandes extensiones agrícolas.

En el segundo semestre de 1982, principalmente por iniciativa del Partido Comunista, se pone en práctica una primera modalidad sistemática de movilización callejera de masas: las "marchas del hambre". Estas presentan la nueva particularidad de ir acompañadas por distintas medidas operativas de autodefensa popular que permitan su realización a pesar de los ataques represivos que han alcanzado niveles de verdaderos operativos bélicos. Son estas manifestaciones las que demuestran, luego de la cerrazón represiva de 1980, que es posible reabrir los canales de expresión pública en las calles dejando el camino expedito para lo que constituiría, a partir de 1983 y en un nivel verdaderamente nacional y generalizado, la segunda modalidad sistemática de movilización pública de masas: las "jornadas nacionales de protesta".

Con este trasfondo de crecientes luchas sociales se van poniendo en práctica durante los años 1981 y 1982, de modo gradual, diversos métodos y formas nuevas de lucha que significan el empleo de una mayor dosis de fuerza material por parte de los sectores opositores más combativos. Se trata de ciertas acciones de sabotaje, e incluso de comandos, destinadas a darle un mayor impulso a la primera fase del proceso de rebelión popular, que el Partido Comunista ha denominado de "desestabilización de la dictadura".

Mientras tanto, la desatada crisis económica vá repercutiendo cada vez más políticamente a nivel de la cúpula del régimen. La segunda fiebre privatizadora que ha desencadenado vá siendo matizada con sucesivas y cada vez más frecuentes crisis ministe-

riales. En 1982 los "duros" parecen ganar definitivamente la pelea copando las principales posiciones gubernamentales y desplazando de ellas a los llamados "blandos" o "aperturistas". Internacionalmente continúa agudizándose el aislamiento del régimen. El declino al que han entrado, también a partir del inicio de los años 80, las dictaduras del Cono Sur se vé reforzado en mayo de 1982 a raíz de la guerra de las Malvinas. Pinochet aparece cada vez más tan sólo en la poco envidiable compañía de Alfredo Stroessner. "El Mercurio", nuevamente, dá sus campanadas de alarma: "El selecto y reducido equipo de gobierno -dice en su edición del 28 de marzo de 1982- se está viendo aislado. El aislamiento del equipo de Gobierno no sólo se dá en relación a los opositores. Lo que es más grave aún es escuchar que el sigilo y la renuencia a las explicaciones no derivan de un mero dogmatismo despreciativo sino de una posible falta de capacidad política. A juicio de muchos, las cosas se están haciendo mal, se están manejando con rudeza de inexpertos, lo que provoca desánimo en los partidarios del Gobierno y ponen ~~en peligro~~ a éste en peligro de quedar sin más defensores que sus aguerridos soldados"(18). Dos días después insiste: "Las circunstancias exigen abrir los ojos frente a lo que ocurre e imaginar las medidas que hagan pasar este año sin un costo político excesivo"(19).

Todo lo descrito indica que era necesario y posible caminar más o menos rápidamente hacia el despliegue generalizado de la rebelión popular de masas. Los nuevos planteamientos del Partido Comunista habían sido no sólo justos en definitiva, sino que también hechos en un momento esencialmente oportuno. Porque en la explicación que Corvalán dá a los militantes de su partido el 31

de enero en Berlín se deja entrever el temor fundado de que, por falta de unidad y de decisión combativa, se produzca -con posterioridad al plebiscito- una "cierta" consolidación de la dictadura, o por lo menos un desaprovechamiento político inconcebible de la crisis que se le venía encima. ¿Qué factores incidieron para que no hubiera un aprovechamiento político suficiente de la crisis económica en el transcurso de sus dos primeros años?

En primer lugar, el que no a todos se le habían "hecho humo" las ilusiones sobre una supuesta liberalización gradual del régimen. Ya en marzo de 1981 podía observarse un recrudecimiento de ese sueño por parte del centro político. Y a pesar de que Pinochet se ha encargado personal y reiteradamente de demostrar -hasta con posterioridad al plebiscito del 5 de octubre de 1988- que se trata de algo vano, dicho sueño reaparece recurrentemente por parte de lo que después se denominó la centro-derecha.

El otro factor está en la izquierda, o más precisamente, en algunos sectores que durante el gobierno de Salvador Allende formaron parte de la Unidad Popular. El "análisis de sí misma" que se planteó en el seno de la coalición, y que tal como se dice en el discurso del 3 de septiembre de 1980 respondía a una necesidad, así como el afán de que ésta renovara su proyecto histórico, lo cual también respondía a una necesidad imperiosa, fueron procesos que algunos sectores de la alianza hicieron derivar hacia la dispersión ideológica y política que se tradujo en un rechazo al marxismo-leninismo -no así a las otras corrientes de pensamiento que conformaban, en su conjunto, el acervo ideoló-

gico de la UP- en una renuncia a la revolución, en la suposición de que la clase obrera había entrado en un proceso de desvirtuamiento de sus capacidades dirigentes y, por parte de determinados dirigentes e investigadores sociales, en un anticomunismo que llegó a tener visos de pronunciado primitivismo ideológico. Desde el punto de vista orgánico dicho proceso culminó en 1981 con la división del Partido Socialista y en 1982 con el cese del funcionamiento de la Unidad Popular como coalición real. En la base de estos procesos estuvo un realineamiento político y de clase de acuerdo a la nueva situación existente.

Justamente a inicios del año que inaugura el paso ya definitivo de la iniciativa a manos del movimiento opositor de masas, el Partido Comunista considera oportuno dirigirse a los militantes y dirigentes de todos los partidos de izquierda con el objeto de instarlos a superar las dificultades que entran su capacidad de conducción e impulso sobre dicho movimiento. En una carta pública fechada en febrero de 1983, y suscrita por Luis Corvalán, se dice que "En los momentos en que la dictadura atraviesa por serias dificultades como consecuencia de la profunda crisis a que ha llevado al país y de la actividad y el crecimiento de las fuerzas de oposición, los sectores políticos que pertenecen a la izquierda chilena no se hallan hoy suficientemente cohesionados ni a la altura de las circunstancias. Fueron los primeros en combatir la tiranía fascista y, no obstante, en este momento no aparecen cumpliendo a plenitud con sus deberes"(14). Más adelante en la carta se deja constancia de los sectores de la izquierda que sí se han pronunciado claramente en favor de la acción común de toda la oposición; pero se insiste en que "No en

todas las directivas políticas de izquierda prima la comprensión debida acerca de la necesidad del viraje urgente que se requiere hacia la acción y la unidad contra el fascismo"(15).

### Segunda fase de la crisis. Crisis "en las alturas" del régimen.

El año 1983, que es el que inicia una segunda fase del período de crisis del régimen dictatorial, señala el punto más neto de encuentro entre la crisis económica -que en el segundo semestre de ese año está pasando de su fase recesiva a la depresiva- y el traspaso definitivo de la iniciativa política a manos del movimiento opositor de masas. El proceso de pérdida de la iniciativa política por parte de la dictadura deviene ya entonces en una franca crisis "en sus alturas". La forma principal que ha adquirido el despliegue ya abierto y generalizado de la rebelión de las masas contra el fascismo son las Jornadas Nacionales de Protesta, que se suceden mes a mes y que cubren con sus acciones efectivamente a todo el territorio del país. Dichas jornadas, producto de la concertación social y política en la acción de todas las fuerzas opositoras, son momentos de encuentro en el tiempo de la potencialidad desplegada por múltiples métodos y formas de lucha; con la peculiaridad de que dicha diversidad en las formas y métodos está en directa relación con la diversidad de clases, capas y sectores sociales que, no constante, participan al unísono en una misma jornada. Los "instructivos" que en cada oportunidad se distribuyen previamente en la población tienen atentamente en cuenta esta peculiaridad. Sin perjuicio de

que cada vez salta al tapete de la discusión en el conjunto de las fuerzas opositoras si la diversidad debe mantenerse tan sólo en el marco de las acciones estrictamente pacíficas, o puede abarcar también acciones de violencia popular; discusión que en cada oportunidad es resuelta por la vida misma, por el creciente espíritu de lucha de las propias masas y por la necesidad de éstas de autodefenderse de una represión que ya ha llegado al empleo sistemático y combinado en las calles del conjunto de recursos técnicos y humanos de todas las ramas de las fuerzas armadas, de orden y de seguridad del régimen. Mientras en los territorios habitados por los sectores medios y medios-altos predominan las acciones de la llamada no-violencia activa, en las barriadas más populares se llega a situaciones que constituyen virtuales levantamientos de toda la población.

Entre una y otra jornada de protesta se producen también otras acciones tales como ocupaciones de terrenos por parte de familias sin casa, acciones de sabotaje, ataques armados a unidades y jefes militares del régimen, ajusticiamientos de torturadores, ayunos organizados por las asociaciones de familiares de víctimas de la represión, oficios religiosos, manifestaciones callejeras y huelgas.

La potencialidad desplegada por el conjunto de esta actividad de las masas hace posible la realización del primer Paro Nacional de Actividades el 30 de octubre del año 1963. Se trata de una huelga nacional de nuevas características porque produce la paralización no sólo de la actividad productiva; sino de todas las actividades del país; los niños no son enviados a sus escue-

las, la población se abstiene de hacer compras, trámites bancarios y otras gestiones. Esta es una modalidad que se ha puesto en práctica durante las jornadas de protesta y que se torna característica de los futuros paros nacionales.

El 18 de noviembre de este mismo año se realiza la primera gran concentración de masas, originalmente convocada por la nueva coalición de centro-derecha "Alianza Democrática"(AD); pero a la cual adhieren finalmente todas las fuerzas opositoras. El presidente de AD expone ante cientos de miles de personas los siguientes acuerdos que están en el acta de fundación de la coalición y que son compartidos por toda la oposición: exigir la salida de Pinochet del gobierno, constituir un Gobierno Provisorio y convocar a elecciones para una Asamblea Constituyente.

Todo este despliegue de la lucha de masas ha generado nuevas necesidades de articulación orgánica tanto en el plano social como político. Las organizaciones sindicales nacionales se agrupan en su totalidad en el Comando Nacional de Trabajadores (CNT), lo cual refuerza el hecho de que hasta ese momento sea la clase obrera el sector social en torno al cual se han aglutinado las demás capas de la población. Esto ha sido muy importante para el espectacular fortalecimiento que ha venido experimentando el movimiento de pobladores de las barriadas así llamadas "marginales", en las que habitan conjuntamente el proletariado y el semi-proletariado, y cuyas organizaciones se han unido también en un solo comando. En estas barriadas, así como en la movilización callejera general, ha sido la juventud la que se ha destacado como verdadero destacamento de choque en las acciones. Ello

tiene una fuerte expresión también en el estudiantado tanto medio como universitario.

En el plano político el año 1963 señala un segundo gran momento de la articulación partidaria opositora. Entre agosto y septiembre han surgido, sucesivamente, tres nuevas coaliciones: Alianza Democrática (AD), que agrupa al centro político y a organizaciones de derecha -incluidas algunas que hasta hacía poco habían mantenido un cierto apoyo al régimen-; Bloque Socialista (BS), integrado por agrupaciones que habiendo pertenecido a la Unidad Popular decidieron no formar parte de la nueva coalición de izquierda que se constituyó días después (algunas de ellas decidieron, en cambio ingresar simultáneamente a AD); Movimiento Democrático Popular (MDP), constituido tan sólo después que habían fracasado los intentos tanto de incluir a todas las organizaciones opositoras en una sola coalición como a las de izquierda en un solo bloque, y que quedó formado por el Partido Comunista, el Partido Socialista encabezado por Clodomiro Almeyda, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y una variedad de organizaciones sociales.

El MDP nace convocando a todas las fuerzas opositoras a la celebración de un Acuerdo Nacional que contemple lo que en esos momentos es el consenso de todas ellas: terminar con Pinochet en el poder y con el régimen, establecer un Gobierno Provisional y convocar a elecciones libres y democráticas para una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Fundamental que sea definitivamente aprobada en un plebiscito. Propone también una plataforma programática que debiera ser cumplida por

el Gobierno Provisional: suprimir las disposiciones y organismos represivos, liberar a los presos políticos, terminar con el exilio, esclarecer la situación de los detenidos-desaparecidos, aclarar los crímenes cometidos y someter a juicio a los responsables, restablecer todos los derechos y libertades públicas, legalizar los partidos políticos y restituirles sus bienes confiscados, impulsar un plan económico de emergencia que enfrente los problemas del desempleo, las bajas salariales, el mejoramiento de la salud pública, el acceso a la vivienda y a la educación, que condone las deudas a los más pobres y renegocie las de los pequeños y medianos empresarios, que desmantele el poder del capital financiero nacionalizando y estatizando la banca y las grandes empresas, que desconozca los compromisos adquiridos por el régimen con la banca transnacional y replantee el problema de la deuda externa en condiciones justas para el país. Plantea, además, la derogación de la constitución del 80 y el restablecimiento provisional de la de 1925, la democratización del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas, la promoción de la participación popular, el aseguramiento de la libertad de creación intelectual y del desarrollo cultural, la restitución de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra, el reintegro a las aulas de los académicos y estudiantes expulsados, la adopción de medidas que aseguren el restablecimiento de la identidad cultural del pueblo mapuche y la defensa de su dignidad y rol en la sociedad. Finalmente se plantea el restablecimiento de relaciones diplomáticas con todos los países del mundo y la solución pacífica y latinoamericanista de los conflictos fronterizos.

La propuesta no fructificó, a pesar de que en el mismo ma-

nifiesto de fundación del MDP se valoraba como un acontecimiento político positivo la constitución de la Alianza Democrática y el hecho de que ella compartiera los puntos básicos de la salida de Pinochet, la formación de un Gobierno Provisional y la convocatoria a una Constituyente. Pero la formación de la AD era, en realidad, más que una simple coalición que reuniera agrupaciones de centro y de derecha. Era el nacimiento de una propuesta alternativa de centro-derecha que, como tal, iba a ir fortaleciendo en el futuro mucho más sus tendencias liberales que aquellas verdaderamente democráticas sustentadas por no pocos de sus miembros.

La verificación de este segundo gran momento de articulación partidaria en la oposición, en todo caso, ahondó la ruptura del llamado "receso político" con el que el régimen había pretendido silenciar y anular a casi todos los partidos.

Comenzaba incluso a romperse también el monopolio de la violencia y de las armas por parte del régimen. En diciembre de 1983 se produjo la fundación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), organización militar que nacía autodefiniéndose como brazo armado del pueblo.

Ante esta situación, los partidarios y personeros civiles del régimen comprenden que deben también organizarse partidariamente para disponer de los recursos suficientes como para proseguir, en otras condiciones, con la defensa de lo que han ganado con la dictadura en prevención de la posibilidad real que se ha generado de que ésta caiga. Ya se ha dicho en el primer capítulo

que una vez más fracasan -por tercera vez en esta oportunidad- en el intento de constituir un solo gran partido o, por lo menos, una sola coalición. Terminan agrupándose por separado en varias entidades pequeñas. Las antiguas rencillas entre "gremialistas" y "nacionalistas", entre "duros" y "aperturistas" se han agravado enormemente con la crisis. Algunos están en franca operación de "desembarque" de la nave pinochetista. A otros los une el acuerdo de consentir la permanencia de Pinochet en el poder hasta 1989. Pero ya casi nadie está dispuesto, como antes, a apoyar la permanencia del dictador a perpetuidad.

El régimen decide realizar una operación combinada en el intento de recuperar la iniciativa, frenar las frecuentes situaciones críticas que se producen en su cúpula y retomar el control de acontecimientos que lo tienen ya por completo desbordado. Junto con recrudecer la represión y centrar aún más sus fuegos en contra del Partido Comunista, ofrece un nuevo itinerario constitucional "hacia el restablecimiento de la democracia" y nombra un nuevo gabinete ministerial encabezado por el antiguo dirigente ultraderechista, de conocida estirpe hitleriana, Sergio Onofre Jarpa; el que se apresura a cumplir las instrucciones para iniciar un diálogo con Alianza Democrática con el objeto de restar a esta coalición de la movilización popular y producir la división de las fuerzas opositoras que, al calor de las acciones, habían acentuado sus posibilidades de concertación y acuerdo. El diálogo fracasa y el accionar opositor continúa; pero a Pinochet se le ha dado un respiro que le ha permitido ganar algo de tiempo.

En 1984 la crisis económica ha pasado ya por sus peores momentos. Aunque la estabilización es a niveles demasiado bajos y, en el segundo semestre, vuelve a tomar cierto curso recesivo. La ofensiva popular continúa; pero las dificultades en la concertación siguen interfiriendo en el despliegue de todas sus potencialidades. En todo caso, como lo constata la Conferencia Nacional del PC realizada a mediados del año, toda la oposición coincide todavía en que Pinochet debe irse en ese momento y no en 1989 y, en cuanto a la actividad de masas, se lucha en todas partes y en todas las formas. La dictadura se ha visto obligada a tolerar ciertas formas de acción empleadas por las capas medias y medias-altas. Se realizan nuevas jornadas nacionales de protesta, la más grande de las cuales es la que se lleva a efecto en septiembre durante tres días. Esos días fueron de verdadera confrontación entre la población civil y el ejército a lo largo de todo el país. La primera de las jornadas de protesta había provocado la caída de los ministros del área económica. Las consecuencias de la crisis en la cúpula del régimen son tan grandes que el jefe de uno de los mayores conglomerados financieros -que se ha derrumbado producto de la crisis-, otro jerarca económico que había sido ministro de hacienda y economía y el superintendente de bancos van a parar a la cárcel. La corrupción del régimen sigue provocando escándalos, los que ahora afectan ya personalmente a Pinochet y su familia. Se producen nuevos paros nacionales, a cuya convocatoria ahora se suman gremios empresariales. El movimiento estudiantil ha realizado un exitoso paro nacional universitario. La Federación de Centros de Estudiantes de Chile, FECEH, organismo inventado por la dictadura para suplantarse a la verdadera y disuelta organización estudiantil, se declara auto-

disuelta ante el repudio de los estudiantes que han comenzado, de facto, a reelegir democráticamente sus centros de base. En un plebiscito organizado por los propios estudiantes resuelven por abrumadora mayoría reconstituir su antigua Federación de Estudiantes de Chile (FECH). Han surgido nuevas instancias de concertación opositora. Una de ellas es el Comando Nacional de Movilización Social y, hacia fines del año, comienzan a organizarse las llamadas Mesas de Concertación Regionales. Ha nacido también la iniciativa de ir más allá y crear verdaderos órganos permanentes de poder popular alternativo al poder dictatorial: los llamados Cabildos Abiertos, reedición de aquellos creados por los patriotas independentistas como alternativas al poder colonial español. En el plano de la autodefensa popular de masas han surgido, inspiradas en el accionar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, las Milicias Rodriguistas, a las que se incorporan miles de jóvenes. El régimen se encuentra nuevamente desbordado y existen las posibilidades reales de que la situación derive en un verdadero estallido revolucionario.

La dictadura intenta nuevamente una operación combinada, pero a niveles superiores que la del año anterior. De una parte, Pinochet propone un proyecto de Estatuto de Partidos Políticos, sugiere ya la realización de un nuevo plebiscito y la designación de un parlamento. De otro lado, proyecta la realización de un nuevo golpe de Estado al estilo del 11 de septiembre de 1973. Tras este último propósito, pone en práctica hacia el fin del año un plan operativo militar codificado como "Andrómeda": reimplanta el Estado de Sitio, ocupa militarmente todo el territorio nacional, desencadena verdaderos ataques bélicos contra las barria-

das más combativas, reabre algunos campos de concentración y produce una cadena de asesinatos, incluso de sacerdotes extranjeros que oficiaban de párrocos en las barriadas populares.

La administración norteamericana decide abandonar la "diplomacia silenciosa" e intervenir públicamente y directamente en la situación chilena. Después de la jornada nacional de protesta y paro nacional realizados el 27 y 28 de noviembre -los primeros efectuados bajo el imperio del Estado de Sitio y con el expreso objetivo de romperlo en los hechos- llega a Chile el Subsecretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos con la misión de abrirle paso a una salida a la crisis negociada entre el régimen y la Alianza Democrática. Realiza intensas reuniones con ambos y les propone el siguiente plan: crear una alianza multipartidaria en la que participen todas las organizaciones políticas con la expresa exclusión de los comunistas, ponerse de acuerdo en la elección o designación de un parlamento y aprobar rápidamente las leyes políticas cuya promulgación ya había sido prometida por Pinochet. Planteó además sacar del centro ~~político~~ del escenario político lo que él llamó el enfrentamiento entre Pinochet y el Partido Comunista y propuso mantener a aquél en el poder hasta 1989 si es que aceptaba el plan expuesto.

Ese plan norteamericano no llegó a realizarse, pero el enviado de Reagan obtuvo un relativo éxito al acentuar las tendencias conciliadoras de parte de la oposición de centro-derecha en un momento en que la situación estuvo, por segunda vez, muy cercana a un desenlace democrático.

Ya en enero de ese año la democracia cristiana había pro-

puesto un proyecto alternativo al régimen dictatorial que, si bien se orientaba a su reemplazo y contenía ciertas ideas valoradas positivamente por los comunistas y otras agrupaciones de izquierda, omitía medidas mínimas para dismantelar el poder del capital financiero y otros elementos que constituían la base material de sustentación del fascismo. Por otra parte, en el transcurso de un año tan caracterizado por grandes combates de las masas, muchos líderes de la centro-derecha habían comenzado ya a aceptar la idea de hacerle ciertas reformas a la constitución política de 1980 sin derogarla por completo como hasta ese momento había sido uno de los consensos de las fuerzas opositoras.

El efecto combinado de la represión y el recrudecimiento de las tendencias conciliadoras como producto de la intervención norteamericana fué una ostensible baja de la actividad opositora durante la primera mitad del año 1985. Pero ya en septiembre se recuperaban los niveles anteriores con la realización de una nueva jornada de protesta, la que se repitió en noviembre. El Estado de Sitio ha sido derrotado por la acción de las masas. En el mismo mes de noviembre se realiza un nuevo mitin conjunto de toda la oposición que concentra a centenares de miles de personas. Se ha llevado a efecto un nuevo paro nacional de los trabajadores portuarios, pero el Pleno del CC del PCCCH que se ha reunido en enero ha constatado que el protagonismo de la clase obrera ha bajado ostensiblemente, e incluso su espíritu de rebeldía es menos generalizado que en otros sectores sociales. En las elecciones del movimiento estudiantil, en cambio, se han obtenido buenos resultados para la oposición en general, y en particular para los comunistas, a pesar de los intentos divisionistas

por parte de la centro-derecha. Se fortalecen también las acciones de los Colegios Profesionales, de los transportistas y de los comerciantes. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez ha alcanzado ya una gran capacidad operativa y realiza acciones, como cortes en la energía eléctrica, que alcanzan a todo el territorio nacional. La dictadura sigue centrando sus ataques en el PC y ha asesinado a importantes personalidades de sus filas.

En el plano político, los partidos de la Alianza Democrática han establecido con grupos de derecha que hasta hacía poco respaldaban al régimen un llamado "Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia". Dicho acuerdo ha sido propugnado por el nuevo cardenal conservador de la Iglesia Católica y la administración norteamericana. Ello acentúa el contenido cada vez más liberal y menos democrático de la alternativa de centro-derecha y, sin lugar a dudas, se orienta hacia la propuesta que el año anterior hiciera el Subsecretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos de la Casa Blanca en el sentido de constituir una alianza multipartidaria que, en lo posible, reuniera a todos con la sola exclusión de los comunistas. Su ~~contenido~~ contenido tiene algunas cosas positivas, como el restablecimiento de los derechos humanos, pero ya no se habla de terminar con Pinochet en el poder antes de 19c9, ni de dismantelar los aparatos represivos, ni de derogar la constitución de 19c0. Es decir, el "Acuerdo" representó para AD la primera abjuración formal de lo que habían sido las bases programáticas de su fundación y la primera ruptura de lo que hasta entonces fueron los consensos básicos de toda la oposición. El "Acuerdo", como tal, no logra imponerse. Por el contrario, los sectores más consecuentemente democráticos

de AD generan una crisis en su interior retirándose transitoriamente de ella hasta que no se establezca la unidad con el PC y otras fuerzas de izquierda. Por su parte, el régimen ha rechazado el documento haciendo mofa de él y de quienes lo han propugnado y suscrito.

En el Pleno del CC del PCCCh, realizado al comienzo del año dentro del país y en las condiciones del Estado de Sitio, se reafirma la convicción de que el camino más corto para terminar con el régimen dictatorial es el del enfrentamiento decidido por parte de las masas. Se reitera la certeza de que no habrá salida gradual ni apertura por parte de la dictadura y que con Pinochet, contrariamente a lo que piensa la oposición de centro-derecha, no caben diálogos <sup>sino</sup> ~~ni~~ una lucha resuelta para echarlo del poder. Finalmente el Pleno evalúa la situación como el comienzo de un proceso de maduración de una situación revolucionaria y, consecuentemente, saca la conclusión de que debe iniciarse la preparación para el paso o enfrentamiento decisivo, que lo prevee como una sublevación nacional o levantamiento democrático de las masas.

Esta conclusión quedó reflejada en la idea generalizada "entre muchas fuerzas opositoras de que 1986 podía ser el año decisivo". Los comunistas, en todo caso, condicionaban esta posibilidad al hecho de que toda la oposición, sin exclusiones, estuviera de acuerdo en unirse y luchar con las máximas energías. Los datos de 1984, que fueron los que trabajó el Pleno comunista, evidentemente respaldaban tal deducción. Pero los efectos negativos y combinados de la brutalidad represiva más la inter-

vención norteamericana pesaron en buena parte de 1985, a pesar de la recuperación del movimiento de masas durante la segunda mitad del año, de un modo que se reflejaría también en 1986. La reimposición del Estado de Sitio, que como hemos dicho fué roto en los hechos por la acción de las masas, había provocado sin embargo, en su etapa inicial, una baja en el estado de ánimo de muchos opositores, incluidos algunos sectores del MDP entre los cuales se llegó a pensar que los propios avances del accionar opositor eran los responsables de tal decisión dictatorial. En un país que ha vivido tantos años bajo el imperio del Estado de Sitio, y cuya derogación ha sido considerada con justa razón como una gran conquista, su reimplantación tiende a generar en ciertos sectores la sensación de abatimiento que suelen producir los indeseables retrocesos. Con esta arma psico-militar ha amenazado y actuado reiteradamente el régimen dictatorial sobre el movimiento opositor. También lo hizo en la segunda mitad de 1986. La intervención norteamericana volvió a operar igualmente ese año, y esta vez mucho más fuertemente aún que en 1984. Nuevamente para alentar la conciliación, parar la movilización popular y promover el anticomunismo. En definitiva, para reflotar, en nuevas condiciones, la idea que había estado tras el fracasado "Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia".

Las luchas de masas se han reiniciado en 1986 a partir de marzo, continúan fuertemente en mayo y en junio proliferan grandes demostraciones de "desobediencia civil". Los estudiantes y profesores de la enseñanza media se han lanzado a un gran combate. Los universitarios han llevado a efecto una paro nacional prolongado y total. Pinochet recorre el país en busca de apoyo,

pero en cada ciudad que visita se producen violentas y masivas demostraciones populares de repudio. En mayo el MDP ha hecho al resto de las fuerzas opositoras una propuesta que ha generado una buena acogida, que se traduce por parte de éstas en la entrega de nuevas propuestas de carácter coincidente. La proposición de la coalición izquierdista contiene dos puntos básicos: la renuncia de Pinochet y constituir un Gobierno de Emergencia encabezado por alguna personalidad independiente que genere consenso y dé garantías a todos. Ante la embestida popular, el régimen toma medidas económicas destinadas a asegurar la prevaencia de los intereses del capital financiero, sobretodo transnacional, en la eventualidad de que realmente 1986 se transforme en el "año decisivo". Entrega las Administradoras de Fondos de Pensiones al control de tres grandes corporaciones transnacionales de base norteamericana, la Aetna International, el Bankers Trust y el American International Group of New York. Reprivatiza las empresas del área "rara" de la economía y en su mayoría las entrega también al control de corporaciones transnacionales. Finalmente, acelera el proceso de capitalización de la deuda externa traspasando, también al capital transnacional, una cantidad importante de patrimonios nacionales,

En tales condiciones surge en el país la más amplia e importante instancia de concertación opositora que haya existido hasta ahora: la Asamblea de la Civilidad. Se trata de un organismo de concertación social y no político-partidaria; pero al reunirse en sus seno prácticamente a todas las organizaciones sociales existentes en el país representa, con ello, a todo el arco político opositor. Su organismo ejecutivo es el Comando Nacional de

la Civilidad, integrado por las lo más grandes organizaciones sociales de dimensiones nacionales. La "Asamblea" aprueba la plataforma programática más amplia que se haya elaborado en términos alternativos al régimen dictatorial: la "Demanda de Chile". Con esa plataforma se convoca al gran Paro Nacional de los días 2 y 3 de julio. El Paro no sólo logra involucrar a casi toda la población del país; sino que, en muchos sentidos, adquiere caracteres de verdadero "ensayo general" de la sublevación nacional contra el fascismo. La desesperación represiva del régimen queda resumida en dos jóvenes que son quemados vivos en plena calle por las patrullas militares. El pueblo ha desbordado a las tropas del ejército a lo largo de todo el territorio nacional y se apodera de la certeza de que está en condiciones reales de proceder al derrocamiento del régimen. Surge de inmediato la conclusión de que debe continuarse rápidamente con acciones similares hasta producir el paro nacional prolongado y definitivo.

La administración norteamericana decide que esta vez debe ser directamente el Pentágono quien se haga cargo de la situación en Chile. Inmediatamente después de los acontecimientos del 2 y 3 de julio llegan al país el Comandante en Jefe del Comando Sur acantonado en la Zona del Canal de Panamá y el Subsecretario para Asuntos Interamericanos del propio Departamento de Defensa. Más tarde arriban el Subsecretario Adjunto del Departamento de Estado para Asuntos Sudamericanos y una interminable lista de dirigentes políticos norteamericanos. Públicamente se muestran críticos frente al régimen y a Pinochet, se declaran partidarios de que Chile camine rápidamente hacia el restablecimiento de la democracia. Pero en realidad han ido a insistir en una sa-

lida negociada con la oposición de centro-derecha que significue, en primer término, dividir el frente opositor, detener la ofensiva popular, aislar a los comunistas, ofrecer respaldo -incluido, desde luego, un fuerte respaldo financiero- a la búsqueda de un régimen de corte liberal lo más reaccionario posible que, reemplazando a la desgastada dictadura pinochetista, pueda seguir garantizando en condiciones más estables sus intereses económicos, políticos y estratégico-militares en el país y, en caso de peligro democrático-popular, ofrecer también su concurso militar.

La centro-derecha inició su retirada de todos los organismos de concertación opositora, en primer término de la Asamblea de la Civilidad, congelando y haciendo inoperante su funcionamiento; pero también de un llamado Comité Político Privado en el que participaban, de un modo no público a petición de la centro-derecha, todos los partidos opositores. Los principales dirigentes de la "Asamblea" que habían sido hechos prisioneros por Pinochet, muchos de los cuales eran demócrata-cristianos, fueron abandonados por la centro-derecha a su propia suerte. Desarrollan, además, una virulenta campaña en contra de la movilización social y, muy particularmente, en contra de los comunistas. Culminando un proceso que se había iniciado en julio con una carta en donde el derechista Partido Nacional le proponía una alianza de gobierno futuro a la democracia ~~axixixixix~~ cristiana, dos meses después del Paro Nacional surge un acuerdo de 13 partidos que denominaron "Bases de Sustentación del Régimen Democrático".

Entre agosto y septiembre se producen dos acontecimientos

que, inspirados en la lucha por la liberación del país, en los hechos, a causa del desenlace que tuvieron, inciden negativamente en el curso evolutivo que ya había empezado a experimentar la situación. En el norte del país las fuerzas del régimen habían descubierto un depósito de armas internadas desde el exterior para ayudar al desenlace democrático de la contienda y, más tarde, Pinochet sobrevive al ataque armado que contra él y su escolta llevaron a cabo algunas unidades del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El régimen restablece el Estado de Sitio y sus comandos secretos asesinan a cinco conocidos opositores: uno dirigente del MIR y los otros cuatro militantes del PC. En esos mismos días Gabriel Valdés, Presidente de la democracia cristiana, se declara dispuesto a llegar a un acuerdo con el régimen -incluso hasta con el propio Pinochet- en el marco de la constitución fascista de 1980. El MDP llama a una nueva jornada nacional de protesta, la que, pese a las condiciones, se desarrolla con mucha decisión; pero es la decisión de los sectores más aguerridos de la oposición.

El 3 de octubre los partidos del MDP y la Izquierda Cristiana le dirigen una "Carta Abierta al Pueblo de Chile" en la que dan su opinión sobre el documento "bases de Sustentación del Régimen Democrático", resultando algunas importantes coincidencias -soberanía popular, derechos humanos, pluralismo, señalamiento del régimen pinochetista como principal obstáculo para iniciar la transición a la democracia, reconocimiento de los derechos de los trabajadores, de la mujer, de los jóvenes, elecciones democráticas y periódicas, legalización de los partidos políticos, rechazo a la generación y ejercicio ~~mixto~~ autoritario del po-

der- y, al mismo tiempo, señalando sus deficiencias: omisión del tema de las Fuerzas Armadas, identificación de la libertad con la propiedad privada y del capitalismo con la democracia, imprecisión sobre la administración de justicia especialmente en los casos de los crímenes cometidos por el régimen dictatorial, despreocupación por la democratización del aparato estatal, imprecisión sobre el tema de la deuda externa y sobre la entrega de activos públicos al capital financiero. En un pasaje de esa carta se lee que "Aún es tiempo de rescatar los grandes avances unitarios del primer semestre de 1966 y de concordar una línea estratégica común de lucha contra la dictadura y por la democracia. Manifestamos la disposición política -agregan los partidos firmantes- de asumir activamente la búsqueda del consenso democrático y de aislar políticamente a los promotores de la división"(16).

Un mes después, hacia fines del año, los partidos comunista, socialista, e Izquierda Cristiana dirigen a los partidos opositores de centro y de derecha un "Llamado al diálogo para la concertación democrática" con el fin de establecer bases comunes de gobernabilidad. En él se plantea que: "nuestros reparos simultáneos a los caminos de la derrota militar y de las negociaciones intra-sistema: en los términos que hemos señalado explican nuestra posición en favor de una salida que se basa en la fórmula de que la lucha democrática de masas constituye el elemento central y ordenador para alcanzar la democracia(...) Esto permite imaginar -agregan más adelante- el término de la dictadura como parte de un proceso ascendente en el que los diferentes productores sociales -obreros, empleados, técnicos y profesionales- junto a estu-

diantes, mujeres, pobladores y a la inmensa masa de desempleados hagan valer de modo sistemático, y si es necesario prolongado, su decisión de hacer ingobernable al país, hasta que se garantice el fin del régimen autoritario establecido en 1973. De este modo, por lo demás, -concluyen- el pueblo chileno puso término a la dictadura de Ibañez en julio de 1931"(17). Invitan, en seguida, a todos los sectores opositores a discutir las acciones y el itinerario apropiados para garantizar el acercamiento del fin de la dictadura.

Pero la centro-derecha no estaba en condiciones de aceptar tales propuestas porque el protagonismo combativo alcanzado por el pueblo la había tener definitivamente la posibilidad real de un desenlace democrático-revolucionario. Por las mismas razones, tampoco se encontraba en condiciones reales de ser capaz, por sí sola, de reorientar el movimiento de masas hacia sus propósitos demo-liberales. Ensayó, pues, la única posibilidad que le quedaba en esos momentos: la de una suerte de capitulación ante el régimen a la espera de que, norteamericanos mediante, se desarrollen las condiciones para una transición con el menor protagonismo popular posible aceptando, ya en principio, el llamado "itinerario constitucional"; lo que significa olvidarse definitivamente de la salida de Pinochet antes de 1989, del Gobierno Provisional, de la Asamblea Constituyente y, por tanto, de la derogación total de la Constitución del 80. Tal ha sido su conducta hasta con posterioridad al triunfo del NO en el plebiscito del 5 de octubre de 1988. La única posibilidad de haber obligado a la centro-derecha a modificar esta conducta estaba en la mantención del movimiento de masas a los niveles expresados hasta el paro

nacional del 2 y 3 de julio; pero, como lo reconoce el Informe Político del Pleno del CC del PCCH realizado en octubre de 1987, "En esas circunstancias, no estuvimos en condiciones de asegurar la continuidad del movimiento que se había configurado como para poder llevar ~~xxxxxxx~~ adelante la perspectiva trazada, (es decir, la de poner término al régimen a través de la sublevación nacional o levantamiento democrático de las masas. O.V.) contrarrestando la defección de los sectores burgueses de la oposición"(18).

Lo que sí se hizo posible entre fines de 1986 y principios de 1987 fué una importante reconstitución orgánica de la unidad de la izquierda, luego de dos reuniones, en la primera de las cuales participaron todos los sectores que habían constituido la Unidad Popular más el MIR, quedó fundada la Izquierda Unida. No se logró integrar a ella a todos los participantes de la primera reunión -algunos de los cuales constituyeron posteriormente, con ocasión de la campaña plebiscitaria de 1988, un "partido instrumental": el Partido por la Democracia, PPD-; pero sí pasaron a formar parte de la IU algunas agrupaciones que no estaban en el MDP, coalición que fué reemplazada por la nueva alianza.

En 1987 hubo un repunte de la movilización de masas que tuvo sus mayores expresiones con ocasión de la visita que a comienzos de abril realizara a Chile el Papa Juan Pablo II -cuyas actividades, independientemente de la voluntad del Vaticano, se convirtieron en gigantescas manifestaciones antidictatoriales-, la gran huelga general convocada por el Comando Nacional de Trabajadores y que se realizara con éxito el 7 de octubre, y la gran huelga universitaria de 80 días de duración, en la que participa-

ron todos los sectores de la Universidad de Chile y que terminó con la salida del rector-delegado designado por Pinochet para concretar un plan de destrucción privatizadora de esa casa de estudios superiores. Esta huelga constituyó una de las mayores derrotas sufridas por el régimen dictatorial y demostró que en la base del pueblo mantienen su fuerza el espíritu de lucha y de unidad antidictatoriales.

El régimen, por su parte, acelera el desplazamiento del centro de gravedad de sus operaciones desde el campo casi exclusivamente militar en que hasta ahora se había manejado al de la política. Reiterando su "itinerario" plantea ya definitivamente, la realización de un plebiscito antes del 11 de marzo de 1989, en el que la población se verá obligada a decir SI o NO ante la propuesta de un candidato único para ejercer el "período presidencial" 1989-1997 que, para tales efectos, será designado por la Junta Militar. Orientándose a tal objetivo dicta la serie de "leyes políticas" que desde hacía tiempo había prometido: ley de inscripción electoral, ley de partidos políticos, y más tarde una ley de votaciones y escrutinios. Abre también nuevos registros electorales para reemplazar a los que anteriormente existieron y que la dictadura había incinerado en la convicción de que nunca más habría elecciones en Chile. Casi de inmediato Pinochet inicia su "campana electoral" con el doble propósito de forzar, primero, su elección como candidato en la Junta Militar -propósito que, como se sabe, fué logrado- y, después, ganar un plebiscito que estaba desde ya armado como un gigantesco fraude -objetivo que, como también se sabe, no logró alcanzar-. Como todo este esquema está concebido tan sólo como "Trámite constitucio-

nal" para lograr la mantención del régimen -con o sin Pinochet-, cuestión que ya se sabe no será aceptada ni por los comunistas ni por la izquierda, el "marco legal" del plebiscito es completado con disposiciones complementarias a la constitución tendientes a asegurar la proscripción política e ideológica de la izquierda y de quienes establezcan relaciones con ella. Junto a todo eso continúa la actividad represiva subsustancial al régimen.

En la oposición va ganando terreno, hasta convertirse en bandera de todos, la exigencia de realizar, en lugar del plebiscito, elecciones verdaderamente libres. Se constituyen, incluso, algunos organismos coordinadores para agitar la campaña en pro de elecciones libres. Pero esta campaña, por parte de la centro-derecha, está desprovista de una eficacia real al estar acompañada del abandono de la consigna por la salida de Pinochet del poder. Por su parte, el PC entrega su opinión al respecto en el Pleno de octubre de 1967: "Estamos persuadidos -dicen los comunistas- que el mejor camino para derribar la tiranía de Pinochet es la Rebelión Popular de Masas. Dentro de este proceso, la lucha por elecciones libres puede alcanzar un significado válido. O sea, -precisan- la concebimos como un elemento integrante de la tarea general que tiene por meta echar abajo el sistema fascista. Sólo será útil una campaña por elecciones libre que contribuya a ello. Mientras equivalga a una simple inserción en el sistema, -agregan- nuestro deber y nuestra lealtad a la causa del pueblo y la libertad nos obligarán a seguir criticándola como absolutamente inoperante para poner fin a la dictadura"(19).

El Partido Comunista, en realidad, al iniciarse ya la imple-

mentación por parte del régimen de lo que sería el marco "legal" del plebiscito, había propuesto a toda la oposición una concertación para rechazar entre todos el conjunto de las llamadas "leyes políticas", lo cual, es evidente, las habría hecho totalmente inoperantes. Pero, como ya hemos afirmado, la oposición de centro-derecha no estaba en condiciones de aceptar ese tipo de propuestas por cuanto dejaban como única alternativa la reactivación de un proceso de rebelión popular de las masas que llevaría de nuevo a la creación de una situación como la de julio de 1986 ante la cual ella, expresamente, había optado por la capitulación ante el régimen.

Desechada por la centro-derecha la posibilidad del rechazo total a las "leyes políticas", sus partidos, uno tras otro, aceleraron el proceso de inserción en el esquema legal pre-plebiscitario. Llamaron a inscribirse en los registros electorales, algunos decidieron ya su inscripción como partido dentro de las disposiciones de la "ley de partidos políticos" dictada por el régimen -cuestiones que ya habían hecho las agrupaciones políticas pro-dictatoriales- y, más tarde, decidieron abandonar definitivamente la consigna por las elecciones libres incorporándose de lleno al plebiscito, dando comienzo a la campaña por el voto NO. Algunos partidos de la izquierda optaron también por llamar a inscribirse en los registros electorales y, tiempo después, sucesivamente, se fueron incorporando igualmente a la campaña por el voto NO. Tales decisiones terminaron por convertir la futura realización del plebiscito en hecho más que probable. Ya en el Pleno de octubre los comunistas reconocían la existencia de esta situación en los siguientes términos: "Como hoy se presentan las

cosas, es probable que haya plebiscito en septiembre del próximo año, o, a más tardar, en enero de 1969"(20).

En ese mismo Pleno, el CC del PCCH modifica la resolución de no propugnar la inscripción en los registros electorales por el llamado a hacerlo. Luego de argumentar el porqué de la primera posición -basado en el carácter antidemocrático tanto de la constitución del 80 como del sistema electoral dictado por el régimen, así como el propósito de alertar al pueblo contra la tendencia a que las expectativas puramente electorales reempha- cen a la lucha de masas-, el Informe al Pleno constata que ella está siendo usada como nuevo pretexto para argumentar la división de la oposición y que, incluso, se han generado problemas al interior de la Izquierda Unida. Por ello es que puntualiza que: "la inscripción electoral carece de valor estratégico, o sea, no define por sí misma el pleito tiranía-democracia. Representa un elemento eminentemente táctico, susceptible de insertarse ú- tilmente en el momento oportuno dentro del contexto de un pro- grama de acción más vasto para alcanzar el objetivo estratégico que es, en primer término, el fin del régimen de facto(...) Pro- fundizando nuestra política de "Rebelión Popular de Masas, -se dice más adelante- elevando el enfrentamiento con la dictadura, acentuando la denuncia del carácter fraudulento del plebiscito que se prepara y de la naturaleza absolutamente antidemocrática y antipopular del sistema de inscripción electoral, la Comisión Política considera necesario plantear al Comité Central el reexa- men de dicha posición. Propone al Pleno que el Comité Central se pronuncie en favor de la inscripción en los registros electora- les(...) Se formula la proposición ya mencionada -se agrega en otro pasaje- en la certeza que constituye la aplicación más con-

veniente y necesaria de la línea del Partido en medio de la complejidad de la situación actual. Respondemos así a requerimientos que la coyuntura nos plantea para hacer avanzar el conjunto de nuestra política(r..) Proponemos ahora mismo -concluye finalmente- un acuerdo de todas las fuerzas opositoras para enfrentar el plebiscito con un solo criterio y denunciar y rechazar desde ya el gran fraude que prepara la dictadura"(21).

El plebiscito fué enfrentado, finalmente, con un solo criterio: votar NO, lo que le propinó a Pinochet una derrota que resonó al mundo entero. Pero ello no fué producto de un acuerdo al que la centro-derecha se negó sistemáticamente; sino que se debió al hecho de que el Partido Comunista, que fué el último en hacerlo, acordó en junio de 1988 incorporarse a la campaña plebiscitaria sumando sus fuerzas al voto NO. Ello fué un aporte decisivo para darle a la campaña el contenido combativo ~~de~~ de masas que tuvo en sus tramos finales, y que constituyó el factor más determinante tanto de la victoria electoral como de la obligación en que se vió Pinochet de reconocerla. La derrota ha dejado al dictador más debilitado y aislado que nunca; pero aún continúa aferrado al poder; lo que sigue dándole la razón a los comunistas en el sentido de que sólo se irá definitivamente de él si es echado por la unidad y la lucha de las masas.

## Conclusiones

El hecho de que la institucionalización del fascismo en Chile, que no obedeció a un verdadero proceso de legitimización social sino que fué el resultado de una operatividad eminentemente represiva que -en todo caso- planteó ante las masas directamente la cuestión del poder, haya coincidido con el inicio de una crisis económica tan profunda que llegó a determinar recomposiciones en el propio bloque de dominación y con un proceso que culminó con el paso definitivo de la iniciativa al campo de la lucha de las masas, hace que el inicio del ~~último~~ período institucional sea al mismo tiempo el comienzo, no de un período de consolidación que nunca llegó a existir; sino del período de crisis del fascismo en el poder. Ello determina, a su vez, que los sucesivos "avances" institucionales del régimen dictatorial no sean producto de resoluciones ofensivas, sino más bien respuestas defensivas ante el desarrollo de la lucha de masas.

Dentro de este período de crisis del fascismo pueden distinguirse dos fases. Una primera en que los efectos que la crisis económica vá produciendo en la cúpula del régimen le van generando dificultades que lo conducen a un proceso de pérdida gradual de su poder de iniciativa, proceso que se refuerza por la generación de condiciones a nivel de la lucha de masas que permitirán el traspaso definitivo de la iniciativa política a éstas. La segunda fase es ya de una abierta crisis "en las alturas" del régimen dictatorial. El desaprovechamiento político de los dos primeros años de la crisis económica por parte de la oposición -generado por la persistencia de la tesis gradualista del centro políti-

co y por los realineamientos políticos y de clase en la izquierda que la condujeron a la dispersión de sus fuerzas-, además de la recurrencia de actitudes conciliadoras de la centro-derecha durante la segunda fase que generaron tendencias que la izquierda no pudo en sus momentos contrarrestar, determinaron el hecho de que la crisis "en las alturas" del régimen no se haya traducido, por lo menos hasta ahora, en su caída.

Los acontecimientos ocurridos, tanto en la primera como en la segunda fase del período de crisis del fascismo, indican que la adopción por parte del Partido Comunista de su política de Rebelión Popular de Masas y el momento en que ella fué decidida constituyeron resoluciones esencialmente justas y oportunas.

La conclusión anterior no desaloja, sino más bien preaupone, que las formas y el contenido concreto que fueron adquiriendo las luchas de ~~masas~~ en su proceso real de rebelión contra el fascismo ampliaron, enriquecieron y, en ese sentido, incluso modificaron el concepto que inicialmente tuvo el propio PC sobre la rebelión popular de ~~mas~~ masas.

La forma principal que ésta adoptó, totalmente original e inédita en la historia del movimiento popular chileno, fueron las Jornadas Nacionales de Protesta. Incluso una forma de ~~lucha~~ <sup>lucha</sup> ya conocida como el Paro Nacional, que ahora experimentó la innovación de ser la paralización no sólo productiva sino de todas las actividades del país, pudo ser realizada con verdadero éxito una vez que las "jornadas" le abrieron el paso. Las Jornadas Nacionales de Protesta promovieron una combinación hasta ahora des-

conocida en Chile, y no prevista en sus inicios, de métodos de lucha militares, paramilitares, de no-violencia activa y de la llamada "desobediencia civil".

Del mismo modo, la idea de crearle al fascismo una situación de ingobernabilidad del país -surgida en el fragor de la contienda y no precisamente por parte de los comunistas- se transformó, en los hechos, en la sucesora de la idea comunista acerca de la desestabilización del régimen, término con el cual se denominó a la primera fase del proceso de rebelión popular, sin perjuicio de que muchos de los dirigentes opositores que fueron los primeros en hablar de la ingobernabilidad cayeron posteriormente en una total inconsecuencia con su propia idea,

La tesis de la rebelión popular de masas contra el fascismo terminó siendo materializada y enriquecida, entonces, por el conjunto de procesos descritos. Es ese conjunto el que determina el enriquecimiento real y actual tanto de la táctica como de la propia estrategia, y por tanto el concepto de vía, del PC de Chile. Ello queda reflejado en la carta que el CC del PCCCH le envía en mayo de 1985 a Gabriel Valdés, presidente de la democracia cristiana, para responder a la acusación que éste ha hecho de que son los comunistas los que promueven la militarización de la política, en la que se dice que: "creemos que en el curso de las luchas debemos proponernos configurar en común una vía concreta que logre poner fin a la dictadura y al fascismo. Por nuestra parte, -se agrega- creemos en esa vía lo fundamental será la lucha de las masas, la movilización social combativa y resuelta, que se expresará a través de una combinación rica e inédita de formas

de lucha pacíficas y violentas"(22). En el mismo artículo donde Corvalán cita la carta dirigida a Valdés puede leerse que: "El asunto de la vía concreta en las actuales condiciones es una ~~ex~~ cuestión que está resolviéndose en un proceso constante de práctica y de elaboración teórica y política(....) Nuestra tesis acerca de una probable sublevación-agrega más adelante- y los ~~pl~~ planteamientos e ideas que acabamos de citar contienen, a nuestro juicio, los elementos principales que podrían configurar una vía en cierto modo original, no identificable esquemáticamente con la vía armada ni con la vía no armada. Se trata de una vía que en la práctica pueda resultar cercana a una u otra y ser más o menos violenta o más o menos pacífica, en dependencia de la amplitud del movimiento, de la decisión y capacidad combativa de las masas y de los cambios que se puedan producir en la conducta y mentalidad de las Fuerzas Armadas y en la actitud que éstas asuman en los momentos decisivos"(23).

Se trata de un enriquecimiento en el propio modo de ver las cosas; por cuanto en un principio -motivada seguramente por el correcto propósito de hacer ver que la tesis de la rebelión popular no era ruptura sino continuidad en el desarrollo de la línea- existió la tendencia a explicar su contenido tan sólo como la suma, o el agregado, de nuevas formas de lucha a las ya tradicionalmente empleadas; o tan sólo como modificaciones y formulaciones de tipo exclusivamente táctico en el desarrollo de la línea, por así llamarla, histórica. Esto no dejó de tener, desde nuestro punto de vista, ciertas consecuencias particularmente referidas a las dificultades surgidas en el funcionamiento de la política militar como factor orgánicamente integrado al funcionamiento de

toda la política del partido, y de la política chilena en general.

Lo cierto es que la vida parece haber demostrado que la adopción de la política de rebelión popular fué una opción que estaba llamada a tener consecuencias no sólo tácticas sino también estratégicas. No en el sentido de representar una ruptura de la línea, un cambio total de líneas política como con buena o mala intención han pretendido presentarlo algunos críticos de los comunistas, ni mucho menos un salto de la "vía pacífica" a la "vía armada" -cuestión ya esclarecida por las argumentaciones de Luis Corvalán que hemos citado-; sino en el sentido de que su argumentación estuvo basada, como es lógico, en la caracterización de un enemigo que ya había demostrado fehacientemente -como lo ha seguido y seguirá demostrándolo- que está dispuesto a aferrarse al poder hasta las últimas consecuencias, sin reparar en medios ni costos políticos y sociales. En consecuencia, la política de rebelión ~~popular~~ estará vigente -independientemente de la flexibilidad con que se acentúe uno u otro componentes según sean las condiciones concretas de la contienda- hasta que dicho enemigo sea echado del poder que ha usurpado y en el que se sigue manteniendo a pesar de los resultados del plebiscito del 5 de octubre de 1968. Ha sido una política vigente durante todo un período histórico -el de la crisis del fascismo en el poder- y el objetivo final que se plantea tiene también inmensas proyecciones históricas. Es, pues, una política de alcances estratégicos. Otra cosa son las formas concretas en que se producirá; el desenlace; pero la vía de acercamiento a él tendrá en Chile un contenido necesariamente rupturista en el que el eje

será la unidad y la movilización combativa de las masas haciendo uso combinado de las más variadas formas de lucha.

La dialéctica de unidad y lucha en el esfuerzo por concretar en Chile una alianza, entendimiento o concertación de todas las fuerzas opositoras sin exclusiones, amerita de parte del Partido Comunista la comprensión cabal de que la centro-derecha opositora, que es una realidad que pesa en el cuadro político y cuya formación ni el PC ni la izquierda pudieron impedir, representa, más que un proyecto verdaderamente democrático-burgués, o reformista burgués, una alternativa demo-liberal. Y, por añadidura, en las condiciones en que el desarrollo actual del capitalismo y del imperialismo hacen en definitiva imposible, para un país como Chile, que cualquier proyecto alternativo al régimen dictatorial que se plantee dentro de los marcos del sistema capitalista pueda escapar a un agravamiento de la dependencia y al control del capital financiero, sobretudo transnacional. Esa es la razón más profunda de las dificultades unitarias. La única forma de vencerlas es, justamente, el desarrollo incontrarrestable de una amplia y multifacética movilización de masas.-



## II

11.- Luis Corvalán, "Nuestra línea es elaborada colectivamente", en "La rebelión popular se abre camino en Chile", sin fecha ni lugar de edición, pp. 63-64.

12.- ib., pp. 11-12.

13.- ib., p. 13.

14.- Carta del Partido Comunista a los dirigentes y militantes de los partidos de la izquierda chilena, febrero de 1983, Boletín del Exterior del PC de Chile No 58, marzo-abril 1983, p. 1.

15.- ib., p. 2.

16.- Carta abierta al pueblo de Chile, 3 de octubre de 1986, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Socialista Unitario, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Mapu Obrero y Campesino, Izquierda Cristiana. En Boletín del Exterior del PC de Chile No 81, noviembre-diciembre 1986, p. 23.

17.- Llamado al diálogo para la concepción democrática. Luis Corvalán, CloDOMIRO Almeyda, Luis Maira, noviembre de 1986. En Boletín del Exterior del PC de Chile No 82, enero-febrero 1987, pp. 17-18.

18.- Pleno de octubre del Comité Central del Partido, Informe político. En Boletín del Exterior del PC de Chile No 88, enero-febrero de 1988, p. 26.

### III

19.- ib., p. 28.

20.- ib., p. 33.

21.- ib., pp. 35-36-37-38.

22.- cit. por Luis Corvalán en "Los acontecimientos de Chile. La unidad contra la dictadura, vía y formas de lucha". En Boletín del Exterior del PC de Chile No 75, noviembre-diciembre 1985, pp. 4-5.

23.- ib., pp. 6 y 8.

Capítulo Tercero: Táctica del PC en favor de una salida revolucionaria a la crisis del fascismo.

---

En el transcurso de la lucha contra el régimen dictatorial han sido presentadas por parte de la oposición, en lo fundamental, dos alternativas de reemplazo: una revolucionaria, de carácter democrático-popular; y otra reformista; en sus inicios de claro carácter democrático-burgués, pero que durante el período de crisis del fascismo, particularmente en su segunda fase, a medida que las fuerzas del centro político fueron conformando y fortaleciendo una alianza de centro-derecha, fué experimentando un proceso de derechización que la ha acercado más bien a cierto tipo de liberalismo contemporáneo, de "democracia restringida" que, en lo esencial, se adapta a los nuevos requerimientos del desarrollo transnacional del capitalismo; lo que explica que en sus últimas propuestas se omitan precisiones sobre temas tales como la ~~apropiación~~ apropiación por parte del capital transnacional de activos nacionales, la solución patriótica del problema de la deuda externa y la privatización de entidades estatales en beneficio exclusivo del capital financiero; además de las imprecisiones sobre la democratización del aparato estatal que, más allá de las reformas institucionales positivas que el proyecto pueda contener, significan un abandono de las iniciales propuestas sobre lo que llegó a denominarse "democracia participativa".

A medida que la crisis del fascismo se ha ido acentuando han surgido también, de entre sus propios partidarios locales así como de la administración norteamericana, algunas propuestas

tas de reemplazo que, operando algunos cambios institucionales no esenciales y "civilizando" un gobierno que, aunque desembarazado del ya desgastado Pinochet, siga siendo autoritario, conforman una alternativa de claro carácter contrarrevolucionario, específicamente anticomunista y antimarxista, de mantención del tutelaje militar sobre la sociedad civil, de adscripción del país al dispositivo estratégico-militar de los EEUU, de mantención de la dependencia y de absoluta salvaguarda del actual modelo económico. Es lo que los comunistas y la izquierda han denominado, precisamente, un "pinochetismo sin Pinochet".

Esas tres son las alternativas que, sobretodo después del plebiscito del 5 de octubre de 1988, conforman el cuadro actual de las pugnas por el poder.

El problema principal que ha subsistido en la oposición hasta ahora para haber terminado ya con el régimen dictatorial ha sido el de la imposibilidad de poder unir las alternativas de poder que existen en su seno en una alternativa común mínima; cuestión necesaria si se tiene en cuenta que hasta el momento ninguna de las alternativas opositoras por separado, siendo reales alternativas de poder, ha logrado reunir la fuerza suficiente como para cumplir el objetivo nacional básico y más prioritario que es el de echar a Pinochet del poder y terminar con el régimen dictatorial que él ha encabezado. Las fuerzas de izquierda que sustentan la alternativa revolucionaria han sido permanentemente partidarios de cumplir este objetivo, justamente, uniendo a todas \* las fuerzas opositoras para una

salida democrática común mínima. Con tal objeto han practicado, de una parte, una firme estrategia de movilización de masas, y de otra, una concepción de flexibilización táctica que permita acercar métodos, formas de lucha, incluso vía y también objetivos. Los sectores reformistas, en cambio, han buscado como solución la de agrupar fuerzas tanto hacia la derecha como hacia la izquierda excluyendo a los comunistas. Ello, además de alargarle la vida a la dictadura, ha rechazado su propio proyecto, y, a su vez, esto último ha determinado un abandono de la estrategia -compartida en un principio- de la movilización social combativa, restringiéndola sólo a la expresión coyuntural de ciertas formas limitadas y "ordenadas" que sirven como instrumento táctico de presión sobre el régimen tras objetivos muy circunscritos y siempre dentro de una estrategia esencialmente negociadora. Así, la dificultad de unir en una sola alternativa común mínima las dos alternativas de poder existentes en la oposición se ha acrecentado porque las diferencias de táctica que existían para abrirle paso han devenido en diferencias de carácter estratégico.

La responsabilidad principal de este proceso de creciente divergencia no está, objetivamente y en términos generales, en el hecho de que los comunistas y otras fuerzas de izquierda hayan postulado la tesis de la rebelión ~~ppm~~ popular de masas; por cuanto, como ha quedado demostrado, dicha tesis ha sido ampliamente respaldada por la lucha real de las masas. Además, hasta ahora, los momentos en que objetivamente ha estado más cerca el fin del régimen dictatorial han sido aquellos en que la rebelión de las masas adquirió su mayor potencia, riqueza y am-

plitud. En cambio por lo menos hasta ahora, bien miradas las cosas, los mejores momentos de la estrategia negociadora -como los fracasados "diálogos" de la oposición de centro-derecha con el régimen- lejos de haber acercado el fin de éste, objetiva e independientemente de la voluntad de los opositores que los promovieron y aceptaron, contribuyeron a darle un respiro justo cuando las masas habían logrado crearle sus mayores dificultades. Incluso, en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, cuyos resultados sí representaron la primera vez que se produce un acercamiento al fin del régimen operando desde dentro de su propio esquema, lo que volcó definitivamente la balanza en favor de la victoria democrática fueron, de una parte, la concertación que de hecho se produjo entre todas las fuerzas opositoras en favor del voto NO -y de cuyas circunstancias ya hemos hablado- y el combativo protagonismo popular que adquirió la campaña por el NO en sus tramos finales. Por lo demás, esta victoria habría sido inconcebible sin los cambios cualitativos que operó en la correlación de las fuerzas el proceso de rebelión de masas tan abiertamente expresado en las batallas populares de 1983-1986; lo que, a su vez, como se ha constatado, fueron posibles por las condiciones creadas por las luchas y movilizaciones de los años anteriores.

Esto reafirma, en términos generales y vistas las cosas con amplitud, la estrategia y la táctica de la izquierda; y mucho más la reafirman aún los acontecimientos producidos con posterioridad al plebiscito. Lo que queda por ver es si, en la especificidad de cada momento, ~~las~~ las formulaciones y operaciones políticas concretas de los comunistas y de la izquier-

da han concordado exactamente con la justeza de su política en términos generales. Porque, como decía Lenin: "Enemigo absoluto de toda fórmula abstracta, de toda receta doctrinaria, el marxismo exige atención a la lucha de masas que está empeñada, lucha que dá origen a ~~una~~ métodos de defensa y ataque más nuevos y diversos cada día en la medida que el movimiento se vá extendiendo, aumenta el grado de conciencia en las masas y se acentúan las crisis económicas y políticas"(1).

Desde que se produjo el golpe de Estado hasta las primeras formulaciones de la política de rebelión popular de masas, los comunistas chilenos se han esforzado por trabajar creadoramente, de acuerdo con la realidad de su país, con este tipo de concepción tan amplia. En la declaración pública de diciembre de 1978, por ejemplo, dicen que: "Las formas de lucha deben determinarse teniendo en cuenta la necesidad de unir a todas las fuerzas democráticas en contra del fascismo, deben tener en cuenta en cada momento el nivel de conciencia alcanzado por las masas, ~~deben~~ • considerar la correlación real de las fuerzas existentes y la necesidad de que cada acción mejore esa correlación de fuerzas en favor del pueblo"(2). En febrero de 1981 Luis Corvalán afirma que: "Nuestro Partido trabaja por un solo frente de todas las fuerzas opositoras. La movilización y la unidad de las masas y, en función de ello, la aplicación de las más diversas formas de lucha, constituyen la esencia de su línea táctica. En ésta no hay ni asomo de precipitación"(3). Los ya anotados esfuerzos por establecer con toda la oposición un acuerdo sobre vía, tácticas y objetivos -entre los cuales

han estado, por ejemplo, la cuestión del diálogo con las Fuerzas Armadas y la firma de un "pacto social" propuestos por la oposición de centro-derecha- dan fé de la consecuencia práctica de las citadas declaraciones.

Veremos estos problemas a la luz de las manifestaciones que ha tenido la crisis del fascismo, de la experiencia de la lucha de masas y del análisis del proyecto democrático frente al proyecto liberal de salida a la crisis.

#### Manifestaciones de la crisis del régimen fascista.

A diferencia de la crisis económica de 1975-76, la del 1981-83 se transforma en crisis política. Ello se debe a los cambios cualitativos que se han operado en la correlación de fuerzas, haciéndola favorable al movimiento antidictatorial de las masas. El principal factor que ha actuado para ello es el proceso de abierta rebelión contra el fascismo. Este factor principal potenció los efectos políticos de otros aspectos que a diferencia de la crisis de 1975-76 tuvo la de 1981-83.

En primer lugar, esta última crisis representó el fracaso del funcionamiento ya pleno de un modelo económico que en la crisis anterior estaba recién comenzándose a implementar. Los propios personeros del régimen habían declarado públicamente en muchas oportunidades que del éxito del modelo económico dependía el éxito político del régimen; o sea, "a contrario sen-

su", su fracaso estaría reflejando el fracaso del régimen en toda la línea. Y la crisis sobreviene justamente en los momentos en que, según los vaticinios de los "Chicago boys", el modelo tendría que empezar a dar pruebas fehacientes ~~ma~~ y definitivas de sus supuestas virtudes. La certeza del fracaso se refuerza, además, al hacer la simple comprobación que de las tres grandes crisis vividas por la economía nacional durante todo el presente siglo -la otra es la de 1930-, dos de ellas se han precipitado durante el reinado del fascismo con apenas un lustro de distancia una de la otra. Ello, entre otros tantos datos, desvirtúa por completo la argumentación del régimen en el sentido de pretender explicarlo todo como un mero reflejo de la correspondiente crisis cíclica del capitalismo mundial.

El otro aspecto diferencial muy importante entre la crisis económica de 1975-76 y la de 1981-83 es que sus efectos provocan el derrumbe de los principales centros de poder en torno a los cuales se había rearticulado la oligarquía financiera local aventada por el gobierno popular de Salvador Allende. El régimen dictatorial, que tanta crítica había expresado en contra del Estado "empresario", de la "intromisión" estatista en el manejo de la economía, haciendo la apología de la llamada "economía social de mercado" y de las bondades de sus mecanismos de ajuste automático en cuyo libre juego el Estado debía asignarse tan sólo un rol "subsidiario", se apresura a intervenir estatalmente los bancos y las empresas relacionadas de estos grupos del capital financiero local con el objeto de inyectarles ingentes recursos públicos para salvarlos de una quiebra

inminente. Esto, además del evidente descrédito que en la opinión pública produce respecto de las tan propagandeadas concepciones monetarias neoliberales, hace patente ante el país que el manejo extremadamente especulativo y parasitario que ha alcanzado el capital financiero local no es un asunto "privado" sino público. La evidencia de ésto es total cuando el Banco Central compra a los bancos privados en crisis sus "carteras vencidas" -es decir, aquellas obligaciones que después de 30 días no han podido ser cubiertas por los destinatarios de los créditos- y el Estado chileno renegocia la deuda externa prestando su aval en la reprogramación de las amortizaciones del sector privado financiero o le contrata a éste nuevos créditos externos, ya sea directamente o dando su garantía. He aquí un cuadro que muestra el cambio en la composición de esta deuda debido a esta operación "salvataje" del capital financiero por parte del Estado:

COMPOSICION SECTORIAL DE LA DEUDA EXTERNA

Fuente: "Gémines". En porcentajes.

	<u>1982</u>	<u>1984</u>
Sector privado no financiero	22,1	18,0
Sector público	38,9	62,8
Privado financiero	39,0	19,2
Total	100,0	100,0

(4).

Pero, pese a todos los esfuerzos del "subsidiario" Estado

fascista, la caída de los principales centros de poder del capital financiero local -por lo menos de los dos más importantes, así conocidos como "Grupos los Pirañas" por su insaciable voracidad centralizadora y expropiatoria- no pudo ser evitada. De ello se aprovecharon otros grupos, que no habían sido tan devastadoramente afectados por la crisis, para transformarse en los nuevos centros de poder del capital financiero "criollo". Esta reestructuración ya representa un factor que incide en el otro fenómeno de peso que, a diferencia de la crisis de 1975-76, se produce como consecuencia de la crisis de 1981-83: la recomposición en el propio bloque de poder dominante.

Sin embargo, lo que iba a ser más decisivo en la producción de este último fenómeno era una suerte de cambio de correlación de fuerzas que se verificó entre las inversiones directas del capital transnacional y las posiciones del capital financiero local. Estas mismas posiciones, a la postre, empezaron a depender cada vez más de las asociaciones con el capital transnacional. Es decir, llegado el momento en que "el propio poder del capital financiero" -esto es la dictadura fascista- tuvo que optar en medio de la crisis y con posterioridad a ella entre sus representantes locales y las transnacionales, en lo fundamental se decidió por estas últimas. La índole de esta decisión mucho más que económica es política y tiene que ver, justamente, con el carácter dependiente del fascismo chileno entronizado en el poder.

La salida de la crisis económica de 1981-83 ha significado

un nuevo proceso de centralización del capital, con el agravante, por lo dicho anteriormente, que ésta ha ido acompañada de un mucho más fuerte proceso de desnacionalización de la economía. Los mecanismos utilizados han sido los de la entrega de muchos de los bancos que el Estado había intervenido a la banca transnacional, además de la venta de algunas de las más importantes empresas industriales que pertenecieron a los grupos financieros derrumbados a corporaciones transnacionales o a grupos económicos locales que lograron sortear de algún modo la crisis y que, como ya se ha dicho, para asegurar sus operaciones han debido asociarse en muchos casos al capital transnacional. Además de eso, y sobretodo a partir de 1985, este proceso se ha visto reforzado con la venta de patrimonios estatales al capital transnacional y a grupos locales asociados a éste y con la capitalización de pagarés de la deuda externa. También han sido entregados al capital transnacional grandes masas de recursos de los ahorrantes -a través del traspaso de las llamadas Asociaciones de Fondos Mutuos- y las imposiciones previsionales de los trabajadores, por la ya ~~max~~ mencionada vía de darle el control de las Administradoras de Fondos de Pensiones a tres grandes corporaciones transnacionales de base norteamericana. Todo esto le ha permitido a dichas corporaciones continuar apropiándose de otras empresas nacionales del sector productivo y de servicios.

Hay que consignar aún dos aspectos para tener la dimensión exacta de este proceso de concentración-desnacionalización. En primer término, que las inversiones directas que representa

esta embestida del capital transnacional en la economía chilena no constituyen inversiones industriales nuevas y ni siquiera traspaso de nueva tecnología, por ~~cuanto~~<sup>cuanto</sup>, como hemos anotado, se trata en todos los casos del apoderamiento, a muy bajo costo, de empresas nacionales pre-existentes y en pleno funcionamiento, incluso en el caso de aquellos bancos y empresas que habían sido intervenidos por el Estado. El otro aspecto es que la expansión del capital transnacional en Chile es de tipo conglomeral; es decir, se trata del control de una variedad de actividades económicas muchas de las cuales no tienen ninguna relación entre sí, a partir de una empresa productiva, de una sociedad de inversiones o de una filial bancaria. Esto cambia radicalmente la forma de inserción de este capital en la estructura económica chilena, determinando que sus corporaciones, como lo afirman Gustavo Marín y Patricio Rozas, "A poco andar, ya pesen significativamente en la economía del país, habiéndose constituido en grupos económicos "locales" de origen transnacional"(5).

Todo esto tiene que ver con la "misión histórica" que el fascismo se asignó en Chile, con la imposición de nuevos patrones de acumulación capitalista y con las nuevas inserciones del país en el mercado capitalista mundial y en la división internacional capitalista del trabajo, tal como lo afirmábamos en el primer capítulo. Y es por este estado de cosas que el Partido Comunista asegura que "La lucha por la salida de Pinochet y por la democracia, reviste un carácter antimperialista y es la principal expresión política de la contradicción de la nación chilena, de una parte, y de la otra, el imperia-

lismo norteamericano y sus socios y lacayos internos"(6). Los antecedentes entregados avalan desde ya la validez de la existencia de una alternativa revolucionaria y la búsqueda de una salida de carácter democrático avanzado a la crisis, toda vez que, como dicen los ya citados Marin y Rozas "Nada justifica este nuevo traspaso de recursos a los grupos transnacionales y locales. Sólo se está frente al renovado intento de comprometer a los sectores más dinámicos del capitalismo mundial y a una fracción del empresariado local con el modelo económico y político sustentado por la dictadura más allá de 1989"(7).

Y el funcionamiento de este modelo es el que ha aportado con agudos elementos estructurales a una crisis económica que vá mucho más allá de los efectos coyunturales del proceso cíclico capitalista. Ese modelo prohió un proceso concentrador exacerbadamente parasitario y especulativo del capital financiero y su planteo de apertura económica hacia el exterior no se ha traducido en otra cosa que en un enorme reforzamiento de la dependencia y del saqueo por parte del capital imperialista.

La crisis económica de 1981-83 fué extraordinariamente profunda y prolongada. Como se ha dicho, "empalmó" con la apertura ya generalizada del proceso de rebelión de las masas contra el fascismo cuando aún no culminaba su fase recesiva, la que luego se estabilizó en niveles sumamente bajos. Incluso hasta 1986 el Producto Geográfico Bruto no alcanzaba a ser el del comienzo de la crisis, como lo atestigua el siguiente cuadro:

## EVOLUCION DEL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO: 1981-1986

Año	PGB (en millones de pesos de 1977)	PGB (índice 100 en 1981)	Variación anual (%)
1981	383.446	100,00	5,5
1982	329.523	85,94	-14,1
1983	327.180	85,33	-0,7
1984	347.926	90,74	6,3
1985	356.447	92,96	2,4
1986	376.770	98,26	5,7

Fuente: Banco Central de Chile. Boletín Mensual, marzo de 1987.

La lucha de masas potenció la pugna abierta en los centros del capital financiero en el momento de su recomposición para concretarla definitivamente en una "crisis en las alturas".

Por otra parte, la situación de la mayoría de la población tuvo un empeoramiento extraordinario, fuera de lo común:

## INDICE REAL DE REMUNERACIONES EN LOS AÑOS DE DICTADURA

Fuente: INE y Cieplan. El índice de remuneraciones nominal ha sido deflactado por el IPC oficial con las correcciones de Cieplan Base: septiembre de 1981= 100.

1974, sept. 65,3	1978, sept. 74,0	1982, sept. 91,7
1975, sept. 62,2	1979, sept. 79,3	1983, sept. 84,1
1976, sept. 63,9	1980, sept. 86,5	1984, sept. 54,6
1977, sept. 70,8	1981, sept. 100,0	1985, sept. 51,2

Como puede apreciarse, en los dos años que siguieron al cierre del ciclo recesivo -y que, como en 1983, fueron años de grandes expresiones de la rebelión de las masas- las remuneraciones experimentaron bajas extraordinarias, mayores aún que las producidas durante la crisis de 1975-76, y casi a la mitad de los niveles que tenían al comienzo de la crisis.

Estaban presentes, pues, los tres elementos principales como para que la crisis económica se transformara en una crisis del fascismo en el poder. Y la crisis política que se generó, a su vez, incidió en el agravamiento de la crisis económica.

Experiencias de la lucha de masas contra el fascismo y la táctica del PC durante el período de su crisis.

Ya hemos anotado que la forma principal en que llegó a expresarse, hasta ahora, el proceso de rebelión popular de masas contra el fascismo han sido las llamadas Jornadas Nacionales de Protesta, a las que definimos someramente de acuerdo a los rasgos que nos parecen más esenciales. Dijimos también que ellas le abrieron el paso a los paros nacionales; forma de lucha que sí era ya conocida anteriormente, pero que en la lucha contra el fascismo adquirieron la característica de ser no sólo paralizaciones de las actividades laborales, sino de todas las actividades del país. La combinación de ambas formas -en las llamadas protesta-paro- han ~~constituido~~ constituido hasta hoy los momentos de mayor combatividad, riqueza, amplitud unitaria tanto social como política y eficacia para producir cambios cualitativos favorables

en la correlación de fuerzas. Las "jornadas", los paros nacionales y las "protesta-paros" representan, pués, hasta ahora, los momentos de mayor desarrollo de la unidad, de la lucha y del empleo combinado de las más diversas formas de combate por parte de las masas; es decir, de lo que hasta ahora ha sido en Chile el proceso real de rebelión popular contra el fascismo. Los cambios cuantitativos y cualitativos que tuvieron que sucederse para llegar a ello, así como las perspectivas que abren para el futuro, pueden analizarse desde el punto de vista social, organizacional, cultural, de los medios y métodos empleados, de las consignas agitadas y de los aspectos más específicamente políticos.

Cuando recién se daban los primeros pasos en la formulación de la tesis de la rebelión popular, en noviembre de 1980, Luis Corvalán afirmó que "La oposición al régimen se ha convertido en popular y nacional"(9). Se refería al hecho de que la comprensión cabal de los verdaderos objetivos del régimen no era ya una exclusividad de los sectores sociales y políticos más esclarecidos, sino dominio de otras capas más amplias -Corvalán cita como ejemplo los casos de los transportistas y comerciantes-, lo que las estaba llevando a adoptar una actitud cada vez más activamente opositora. Los pormenores de este proceso político-cultural son muy interesantes de analizar por cuanto el principal punto de referencia que estos sectores tienen en ese momento para definir su actitud son el tipo de acción, de organización y de plataformas reivindicativas impulsadas por la clase obrera y las asociaciones de familiares de presos políticos desaparecidos, compuesta en su mayoría por mujeres vinculadas en

gran parte -y por razones obvias- a los partidos de izquierda. Desde aquí nace el gran poder de convocatoria nacional que fué desarrollando la clase obrera de modo nítidamente gravitante hasta el despliegue ya generalizado de la rebelión de las masas contra el fascismo. Paradojalmente, se produce más tarde una inflexión de esta influencia y, cuando ya los sectores activos en la contienda representan a la abrumadora mayoría de la población, los propios comunistas constatan que el espíritu de rebeldía en el proletariado es más bajo y menos generalizado que en el resto de las masas en lucha. Es el efecto combinado de varios factores. En primer término el desempleo, que durante todos los años de dictadura ha estado muy por encima de lo que había sido la máxima histórica. Las propias formas de organización y lucha que se habían puesto en práctica para la movilización de los cesantes decaen por la ya prolongada separación de esos obreros con los medios de producción. A ello se suma la aplicación del Plan Laboral y la desarticulación y reducción de la organización sindical. Todo ello hace muy dificultosa la actividad huelguística, que tanta influencia había tenido -como vimos- en los años más duros. Pero hay que sumar también los cambios acontecidos en la propia estructura de la clase obrera que, sin haber reducido el peso específico de toda la clase como tal, sí redujeron cuantitativamente su núcleo industrial más tradicionalmente combativo. Esto, sumado a los devastadores efectos de una represión que siempre tuvo<sup>a</sup> la clase obrera como su blanco principal, influyó también en la actividad de los cuadros dirigentes del movimiento sindical. Hay que decir que, en cuanto a los cambios de estructura de la clase obrera chilena y sus posibles efectos en la lucha antifascista, los estudios realizados por los especialistas mar-

xistas fueron relativamente tardíos, lo que tuvo su influencia en la oportuna comprensión del fenómeno.

La verificación de estas circunstancias en el seno de la clase social llamada a darle la consistencia más sólida a la ofensiva opositora de las masas, obligó a diversificar un tanto la visión que se tenía sobre su accionar, y que tradicionalmente se había centrado en su actividad huelguística. Así nacieron, incluso en concentraciones proletarias con marcada influencia comunista, métodos de lucha nuevos -aunque, por cierto, relativamente menos eficaces que la huelga- tales como el atraso en la llegada al puesto de trabajo, paralizaciones por algunas horas, trabajo a desgano, no asistencia a los comedores de la empresa, etc. Por otra parte, se llegó a la constatación que el obrero <sup>que</sup> presentaba reticencias para ir a la huelga, principalmente por temor a perder el empleo, mostraba sin embargo los más altos niveles de combatividad en el territorio donde habitaba, las llamadas "poblaciones" en donde el proletariado comparte su residencia con el sub-proletariado. Así, la enorme gravitación combativa que llegó a tener el movimiento de "pobladores" es, ante todo, obra de la clase obrera. Es en esos lugares donde las jornadas nacionales de protesta han alcanzado niveles de levantamiento popular, con la colocación de barricadas, cortinas de fuego y diversas formas de autodefensa popular que durante días los han hecho inexpugnables a la acción represiva convirtiéndolos en virtuales "zonas liberadas": Es también en esos lugares donde esa organización de autodefensa popular de carácter para-militar que han sido las "milicias rodriguistas" alcanzaron sus mayores niveles de desarrollo. Los pobladores han sido tam-

bién quienes más han aportado durante las jornadas de protesta para producir técnicamente la paralización total o parcial del transporte público y de la red ferroviaria.

El movimiento estudiantil ha presentado una situación diferente, incluso, en cierto sentido, inversa a la de la clase obrera. Se trata de un movimiento de histórica gravitación en la vida nacional cuyos orígenes, por lo demás, coinciden en el tiempo con el nacimiento del movimiento obrero organizado nacionalmente; hecho que ha tenido indudable influencia en toda una larga historia de alianza obrero-estudiantil. Pero, como hemos consignado, su proceso de rearticulación orgánica bajo el fascismo es más tardío que el de los trabajadores. Sin embargo, una vez producido, transforma a este movimiento en un verdadero destacamento de choque tanto en su actividad huelguística como en la acción callejera más combativa, tanto en su actividad reivindicativa propiamente universitaria como en la lucha política general contra la dictadura. Desde el punto de vista de las formas de lucha empleadas, se trata del sector social en cuyo seno se observa una mayor confluencia en el uso "de las más variadas formas", desde los oficios religiosos, los ayunos, las manifestaciones más pacíficas, hasta el empleo de métodos de violencia popular. Esto es quizás uno de los factores que refuerza ~~en~~ su protagonismo a nivel de todo el país. Está, además, la autoridad de la propia Universidad como institución nacional, en la que la intervención militar no ha logrado rebajar su simbología como reserva moral de la Nación. Frente a la ofensiva del fascismo, la comunidad universitaria ha reforzado su cohesión actuando mancomunadamente estudiantes, académicos y funcionarios.

Este rol de la Universidad influye en la actitud de los llamados Colegios Profesionales en los que se agrupa la intelectualidad científico-técnica del país, que en un porcentaje importante tuvo una actitud de apoyo al proceso de desestabilización del gobierno de Salvador Allende, y que, en general, posee perfiles muy distintos a la intelectualidad artística mayoritaria y tradicionalmente de izquierda. De entre los sectores que poseen condiciones medias de vida éste es uno de los que presenta los primeros cambios de actitud respecto del régimen dictatorial. Han predominado en su accionar opositor, como en las capas medias y pequeña burguesía en general, los métodos de no-violencia activa y de desobediencia civil; pero en ocasiones algunas de estas corporaciones han protagonizado otro tipo de acciones tales como la toma de sus sedes profesionales.

El ingreso a la lucha opositora de masas de los gremios empresariales ha tenido características muy diversas. En una fase de la lucha, particularmente en los momentos más recesivos de la crisis económica, llegaron a protagonizar verdaderos actos de rebelión y tuvieron una actividad muy protagónica en la convocatoria a las jornadas nacionales de protesta. Eran los momentos en que los transportistas participaban en el corte del tráfico por caminos y carreteras. Posteriormente se han limitado a incorporarse a las formas más universales y simples de protesta masiva, tales como los conciertos de cacerolas y bocinazos de los automóviles.

En cuanto al campesinado, como se sabe, en Chile posee un peso específico relativamente bajo. El porcentaje de la pobla-

ción rural es muy inferior al de la población urbana. Además, la política económica de la dictadura ha producido un tipo de contrareforma agraria que ha significado, no la reedición de la propiedad latifundaria terrateniente ni de las relaciones semi-feudales de producción, sino un impetuoso proceso de desarrollo capitalista en el campo chileno. Ello ha traído como consecuencia la conversión de importantes masas campesinas en proletariado agrícola, con la peculiaridad que no se trata de trabajadores permanentes sino de braceros de temporada que en el resto del año deben dedicarse a múltiples actividades de subsistencia que, la mayor de las veces, nada tienen que ver con el trabajo agrario. Aún en tales condiciones, este sector de la población ha desarrollado formas de lucha y organización a las que ya nos referimos anteriormente. El sector más ligado a la tierra lo constituyen las diversas comunidades del pueblo mapuche, los que se han destacado en el uso de formas de lucha antidictatoriales de franca rebeldía y en el empleo de métodos de autodefensa popular de masas de acuerdo a sus tradiciones más ancestrales. En este movimiento la influencia de los comunistas es notable.

Con estos datos es que se ha desarrollado un proceso de rebelión extraordinariamente multifacético y multiforme, en el que se combinan métodos y formas de lucha violenta y pacífica, reivindicaciones sectoriales muy específicas e inmediatas y aquellas de carácter político más general, contando con la participación de clases, capas, partidos, sindicatos, movimientos sociales y personalidades que representan un movimiento extraordinariamente vasto y plural. Como siempre, ha sido el movimiento real el que ha llenado de verdadero contenido la tesis que ori-

ginalmente plantearon los comunistas sobre la rebelión popular contra el fascismo. Ni para el Partido Comunista, ni para ningún partido, habría sido posible imaginarse los verdaderos alcances que el movimiento real tendría. Sin embargo, a poco andar ya se advierte una percepción más amplia del concepto y del alcance estratégico que estaba destinado a tener. En el Manifiesto de septiembre de 1981 del PCCH puede leerse, por ejemplo, lo siguiente: "El pueblo comienza a caminar con decisión en la perspectiva de la rebelión incorporando formas de lucha que la hagan una realidad. Tal perspectiva -se dice- comprende un proceso de masas, político, ideológico, moral, cultural, organizativo, civil, militar y para-militar que se engrane con toda la actividad del pueblo, que no se vincule sólo a un tipo de forma de combate, sino que debe recurrir al arsenal histórico de lucha de masas de nuestro pueblo y aprender formas de acción que aún le son desconocidas (...) Lo único antagónico a la política de la rebelión popular -se plantea más adelante- es la política del fascismo y de quienes capitulan ante ella, de quienes colaboran con la tiranía, de quienes acatan su institucionalidad espúria (...) Estamos convencidos -se concluye- de que la lucha y la unidad de las masas será insuficiente si no desemboca en la rebelión popular victoriosa. Y también sabemos que si esta rebelión no es de masas tampoco alcanzará su objetivo"(10). Remarcando la amplitud con que se asumen estos conceptos, al citado Manifiesto se adjunta un "Programa Común que propone el Partido Comunista para unir a toda la Oposición".

A estas alturas, de acuerdo a las condiciones reales en que se ha venido desarrollando la lucha antidictatorial, los comunistas han flexibilizado su concepción inicial sobre el frente Anti-

fascista, tanto desde el punto de vista de la forma como del contenido. No se le entiende como una alianza necesariamente expresada en una instancia orgánica permanente; sino como formas de entendimiento, acuerdo y concertación que aseguren de un modo suficiente la unidad de acción tanto de los antifascistas como de los no-fascistas, civiles y militares, tanto en el plano político como social. Incluso en el futuro hasta se estará de acuerdo en que, por lo menos desde el punto de vista formal, la concertación sea puramente social o incluso de personalidades representativas si es que ello, en el fondo, refleja la participación de todo el arco político opositor. En cuanto a las plataformas programáticas que sirvan de base a esta concertación, los comunistas se muestran partidarios de programas mínimos estructurados en torno a ciertos puntos fundamentales: un acuerdo para impulsar la unidad y la movilización de las masas como vía general para terminar lo antes posible con Pinochet en el poder y con su régimen; un acuerdo para instalar un Gobierno Provisional democrático y de coalición que, teniendo que ser necesariamente de facto, encuentre su legitimización en la participación en él de todas las fuerzas que hayan actuado en el derribamiento del régimen dictatorial, sean éstas civiles o militares; un acuerdo sobre las tareas más urgentes a cumplir por parte de este Gobierno que signifiquen el total desmantelamiento de las normas y aparatos represivos fascistas, el restablecimiento de los derechos humanos, la puesta en práctica de programas de emergencia que atiendan las necesidades más apremiantes de las masas y la convocatoria a elecciones libres y democráticas para una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta fundamental que sea aprobada definitivamente por el pueblo en un referendun; fi-

nalmente, un acuerdo sobre las bases del futuro régimen político y económico.

Pese a existir una amplia esfera de acuerdo, el Partido Comunista nunca puso como condición "sine qua non" la concordancia en todo para avanzar unidos o concertados en la lucha por terminar con Pinochet en el poder y con su régimen; aún cuando consideró su deber hacer ver que, en todo caso, eso sería lo mejor para sacar al país de una crisis tan profunda. Ya en el Pleno del Comité Central del PC realizado en 1979 se había acordado lo que se denominó el "paso táctico"; es decir, privilegiar el acuerdo sobre la unidad y la movilización de las masas para derribar a la dictadura sin hacer mayor cuestión acerca de la participación o no del Partido Comunista en el primer gobierno que la sucediera. Esta posición continuó flexibilizándose después cuando expresamente se dijo que, aún sin participar en dicho gobierno, el Partido Comunista y la izquierda podrían darle su apoyo si es que emprendía resueltamente el cumplimiento de las tareas antifascistas y democráticas más urgentes, Incluso fué el propio PC quien entregó a los demás partidos de la izquierda su opinión en el sentido de que el conglomerado debía declarar su disposición a ver con interés cualquier otra alternativa de primer gobierno democrático, aunque no se contemplara su participación.

Esta línea de acción táctica siguió desarrollándose con el tiempo. En la "Proposición de Acuerdo Político" hecha por el Consejo Nacional del Movimiento Democrático Popular el 30 de mayo de 1986, en los momentos en que ya la Asamblea de la Civilidad levantaba su Demanda de Chile y preparaba el histórico Paro Nacional del 2 y 3 de julio, cuando cundía la idea de hacerle ingobernable el país a la dictadura y Pinochet se aferraba al poder incluso al precio de arrastrar al país a una guerra civil, se proponía: "1.- Exigir la inmediata renuncia de Pinochet. 2.- Instaurar un gobierno de emergencia encabezado por una personalidad de amplio consenso social y político, que restablezca las libertades cívicas y políticas y el pleno imperio de la justicia y de los derechos humanos, que enfrente la solución de los problemas económicosociales más urgentes de los chilenos, que democratice las instituciones y convoque a elecciones generales en un plazo no mayor de 6 meses" /11/.

Es más, incluso atendiendo a que la idea del Gobierno Provi-

sional está asociada a la idea del derrocamiento del régimen, o, en cualquier caso, a una salida de tipo rupturista, cuestión que chocaba y choca con la estrategia fundamentalmente negociadora de la Democracia Cristiana, el Partido Comunista ha mostrado su disposición a no oponerse a otro tipo de solución gubernamental de reemplazo si es que ésta se hiciera posible; ésto sin perjuicio de reafirmar su convicción sobre la justeza de la política de rebelión popular. "Al parecer, -dice Luis Corvalán en noviembre de 1980- la Democracia Cristiana sigue creyendo en que todavía puede haber una solución pacífica sobre la base de un acuerdo con las Fuerzas Armadas. No pensamos de igual manera. Ello nos parece ilusorio. Sin embargo, -aclara- no rechazamos a priori alguna posibilidad, si la hubiera, de una salida pacífica. Por eso, seguimos con interés la acogida y la evolución del planteamiento demócratacristiano en favor de un gobierno de transición cívico-militar que duraría un par de años y convocaría a una Asamblea Constituyente para que el pueblo decida sus propios destinos"(12).

Respecto a la cuestión del tipo de régimen futuro, con toda la importancia que ello tiene, la conducta táctica de los comunistas ha sido similar a la observada en relación al problema del Gobierno Provisional. En noviembre de 1982, ya en las condiciones del desencadenamiento de la crisis económica y a las puertas de lo que serían los acontecimientos de 1983, Luis Corvalán declara que: "Le asignamos mucha importancia al régimen que sucederá al fascismo. Pero ponemos en primer lugar la tarea de echar a Pinochet y los acuerdos que ayuden a tal objetivo. Podemos dejar la cuestión del régimen o del gobierno futuro -agrega- para una se-

gunda discusión, o, mejor dicho, para lo que diga la vida, para lo que decida mañana el pueblo, para lo que se determine en base a la correlación de fuerzas que sobrevenga a la caída del fascismo"(13). En octubre de 1986, habiendo ocurrido ya el Paro Nacional del 2 y 3 de julio, el descubrimiento de los arsenales de armas y el atentado fallido contra Pinochet, estando nuevamente bajo el imperio del Estado de Sitio y en presencia de un transitorio reflujo de masas como producto de la intervención norteamericana y de las posturas conciliadoras de la centro-derecha, la Comisión Política del PC emite una declaración pública en la que se reitera que: "Los comunistas estamos en favor del régimen democrático más real, más participativo y más avanzado que sea posible. De un régimen que erradique el fascismo, responda al clamor de justicia, atienda prioritariamente a las necesidades más apremiantes de los trabajadores y de las masas populares, democratice las instituciones estatales, restablezca plenamente la autonomía universitaria, lleve a cabo transformaciones profundas en el terreno de la economía, promueva la salud, la educación, la cultura, y tenga como perspectiva el socialismo. Sin embargo, reiteramos nuestro planteamiento de que si a la caída de la dictadura no se constituye un gobierno de este tipo, estamos dispuestos a ~~pro~~ apoyar, en todo lo que esté en favor del pueblo y del país, a un régimen democrático más limitado. Esta y no otra es nuestra posición"(14).

Despejados así, desde el punto de vista de la táctica, los problemas del Gobierno Provisional y del régimen futuro que reemplaza al fascismo, queda por ver la cuestión de los métodos, las formas, la vía y la previsión del desenlace final del proceso de

unidad y lucha de masas según la visión de los comunistas.

La política de rebelión popular de masas, respecto de la cual inicialmente no se expresaron rechazos oficiales por parte de ningún partido, contó posteriormente con la negativa reiterada y expresa por parte de la centro-derecha opositora, e incluso por parte de algunos dirigentes y militantes de los partidos de izquierda no incluidos ni en el MDP ni en lo que después fué la Izquierda Unida. Pese a ello, como se ha constatado, ésta se desarrolló realmente por obra de las masas; incluidas aquellas políticamente influenciadas por las colectividades de centro-derecha. Y se desarrolló realmente casi hasta llegar a la sublevación nacional o levantamiento democrático según lo atestiguan los acontecimientos de los días 2 y 3 de julio de 1986. Nunca como entonces estuvo más cerca el enfrentamiento o paso decisivo para terminar con el régimen dictatorial. A eso, y sobretudo al hecho de que en tales condiciones se trataba de una salida "a la Plebeya", se debió la intervención directa ni más ni menos que de altos representantes del Pentágono. El Pleno del CC del PCCH de enero de 1985, en consideración de lo que hasta ese instante había sido el proceso real de rebelión popular, había previsto el enfrentamiento o paso decisivo del siguiente modo: "Lo prevemos -decía- como un levantamiento o sublevación de masas que involucre a toda la población, a la mayor parte de las fuerzas políticas y sociales y ojalá también parte de las FF.AA., que estén contra la dictadura. Se trata -agregaba- de llegar a un estado de rebelión generalizada, que logre la paralización real del país: alzamientos populares en los principales centros urbanos, con participación decidida del proletariado industrial,

de los estudiantes, de las capas medias y del campesinado. Tales acciones se verían fortalecidas por golpes efectivos en apoyo a la paralización que ayuden a acelerar el desmoronamiento político moral de las fuerzas represivas. La culminación de este proceso debiera ser el copamiento por las masas de los principales centros políticos del país"(15).

De lo anotado se desprende que tanto toda la concepción de la rebelión popular por parte de los comunistas, así como también la previsión del enfrentamiento decisivo, no han correspondido nunca a una visión militarizada de la política, ni corresponde exactamente a lo que esquemáticamente se ha entendido como "vía armada"; sino a una salida política que tiene como eje central el protagonismo combativo de las masas populares, las que, actuando mancomunadamente, se ven obligados a emplear las mas diversas formas de combate en consideración del carácter y la actuación concreta del enemigo que se enfrenta y cuyo desplazamiento del poder se persigue. Por tanto, las discusiones sobre la violencia planteadas por la centro-derecha opositora son, en realidad y en definitiva, una discusión sobre la cuestión central y decisiva del protagonismo popular. Esto mismo invalida también la acusación de falta de espíritu democrático que desde la centro-derecha reiteradamente se le ha hecho a los comunistas.

Las formas precisas en que el Pleno de enero de 1985 preveía el "paso decisivo" podrán cambiar según cambien las circunstancias, por ello es que reviste importancia atender a como los propios comunistas visualizan la esencia de esa perspectiva. "Nosotros promovemos la unidad de todo el pueblo, -dicen-en agosto del

mismo año 1985- su movilización activa, su autodefensa ante la agresión, la desobediencia civil y el esfuerzo permanente por influir en los hombres de armas para que dejen de sostener una tiranía corrupta y cruel. Esta es la esencia de nuestra perspectiva de Sublevación Nacional, dirigida a poner fin, en el más breve ~~por~~ plazo posible, a este régimen oprobioso que mientras permanezca hará pesar sobre nuestra patria la peor de las violencias"(16).

Por esta razón es que los comunistas no han tenido problemas para proponer a la centro-derecha opositora la suscripción de un acuerdo, con todas las obligaciones de respetarlo que ello implica, también en el terreno de los métodos y formas de lucha, incluso de vía concreta para poner fin al fascismo.

Sin embargo, ninguno de estos acuerdos se ha concretado; a pesar de que sí ha habido concertación en momentos muy importantes, el diálogo político privado -salvo interrupciones transitorias- ha sido prácticamente permanente y, lo que es más notable de anotar aún, las fuerzas de centro-derecha -en particular la democracia cristiana- han buscado siempre no romper la posibilidad de contar con el apoyo del influyente y tantas veces decisivo movimiento de masas dirigido por los comunistas.

En un artículo escrito por Luis Corvalán comentando las resoluciones del Pleno del CC del PCCH de octubre de 1987, se citan pasajes de una carta que Edgardo Böeninger, vice-presidente de la DC, dirigía a la Junta Nacional de su partido en octubre de 1986 -es decir, en los mismos momentos en que la Comisión Poli-

tica del PC emitía la declaración a través de la cual manifestaba su disposición a apoyar un régimen democrático más limitado en la que, para contrarrestar la molestia de muchos de sus militantes, daba como razones de la política excluyente respecto de los comunistas el que "al PC no se le puede dar cabida en los acuerdos políticos de sustentación democrática o de gobierno futuro ni en la mesa de negociaciones con las Fuerzas Armadas (porque) su presencia es absolutamente inaceptable para éstas, lo que constituye un factor decisivo en la política chilena actual (y porque) la credibilidad de la alternativa democrática entre los sectores militares no continuistas y el grueso sector "de orden" y pasivo de la ciudadanía, está directamente vinculada a la nítida separación entre las fuerzas democráticas y el Partido Comunista"(17). Es decir, nuevamente reaparece la cuestión del protagonismo popular como la razón de fondo de la conducta excluyente hacia los comunistas por parte de la centro-derecha, y particularmente, por parte de la Democracia Cristiana. Ellos hacen depender su conducta política de sus posibilidades de negociación con las Fuerzas Armadas -aspecto muy importante de su estrategia- y del apoyo que puedan recibir, no de las masas populares más activas, sino del "grueso sector "de orden" y pasivo de la ciudadanía". ¿Por qué? Porque el protagonismo popular carga naturalmente la balanza hacia una salida más avanzada. Es decir, el problema de fondo es el problema de la hegemonía. La existencia de dos alternativas reales de poder en el seno de la oposición chilena es la existencia de dos vocaciones hegemónicas distintas. La una, llamémosle reformista liberal, basa sus posibilidades de dirección de la sociedad en la influencia que sobre ella pueda tener "el grueso sector "de orden" y pasivo de la ciu-

dadania"; la otra, la democrático-revolucionaria, en cambio, en el impulso de los sectores más activos del pueblo.

Los comunistas han reconocido abiertamente la existencia objetiva de esta pugna hegemónica, así como la necesidad histórica inevitable de que un día se resuelva; pero, en su Conferencia Nacional de 1964, han dicho que "Ella no puede resolverse, no tiene solución mediante el enfrentamiento de las fuerzas que disputan la primacía, sino a través de una lucha común contra el enemigo común y de la confrontación en la práctica de las posiciones de cada cual. El pueblo es y debe ser, en esto y en todo, el supremo juez"(16).

Las únicas posibilidades de resolver en Chile el problema de la hegemonía de este modo están, justamente, además de la persistencia en la flexibilidad táctica por parte de los comunistas y de la izquierda, en el desarrollo de la más amplia y resuelta movilización de masas.

### Análisis del proyecto democrático frente al proyecto liberal de salida a la crisis.

El proyecto democrático sustentado por los comunistas y otras fuerzas de izquierda que promueven una alternativa revolucionaria de salida a la crisis del régimen fascista en Chile es el de una democracia avanzada, antioligárquica y antimperialista, de creciente integración del pueblo al manejo de las cuestiones estatales, que se replantee la perspectiva del socialismo.

O sea que, sin ser todavía una democracia socialista, signifique ya una superación de la democracia burguesa tradicional. Desde el punto de vista de las bases de sustentación institucionales y socio-políticas: "Se trata de una forma de Estado y de convivencia social que se basa en el gobierno de la mayoría popular, en la integración del pueblo a la toma de decisión y gestión estatal y pública, en la afirmación más plena de la soberanía popular -única fuente generadora de todo el poder político; incluido, por cierto, el poder constituyente-, en el respeto del pluralismo social e ideológico y del pluripartidismo -tanto del gobierno como de la oposición democrática-, en un sistema de elecciones periódicas de acuerdo al sufragio universal, igual, directo, secreto e informado como base para la designación de la autoridad pública, en el imperio y garantía real de los Derechos Humanos para toda la población -incluidos los derechos económicos, sociales, políticos y culturales-, en la defensa de la independencia y soberanía nacional económica, política y territorial-, en la promoción del desarrollo del país en todos los planos, en la sustentación de una política exterior de paz y solidaridad antimperialista entre todos los pueblos del mundo y en la efectiva protección de todos los valores democráticos"(19).

Su base económica, en lo fundamental, quedaría definida por la existencia de cinco áreas de propiedad sobre los medios de producción, a saber: social (o estatal), privada, mixta, cooperativa y de autogestión o de trabajadores (todas ellas orientadas al cumplimiento de la función social de la propiedad según lo establecido en la Constitución Política vigente hasta el 11 de septiembre de 1973); por la erradicación de los conglomerados financieros locales: por el término de la dependencia y del sa-

queo que sobre la economía nacional ha practicado el capital transnacional -lo que incluye, desde luego, la suspensión del pago de la deuda externa y su reformulación sobre bases patrióticas-; por la realización de una nueva reforma agraria -distinta de la anterior en el sentido que tenga en cuenta el desarrollo del capitalismo en el campo chileno-, que expropie la gran propiedad agrícola en beneficio cooperativo de los trabajadores del agro, sin perjuicio de aquellas reservas que por sus características de explotación deben quedar formando parte del área de propiedad social, que dé garantías y asistencia técnica a los propietarios de predios pequeños y medianos y que resuelva los problemas del minifundio; por la nacionalización y estatización de las riquezas del subsuelo, de las empresas estratégicas industriales y de servicios, de todo el sistema financiero y de comercio exterior; por la protección de la industria y producción agropecuaria nacionales; por la intensificación de la producción, la inversión y el ahorro; por la redistribución del crédito interno en favor de los pequeños y medianos propietarios; por la redistribución progresiva del ingreso, la erradicación de la extrema pobreza y el mejoramiento sustancial de las condiciones y el nivel de vida de los trabajadores y el pueblo en general.

El proyecto reformista, que como hemos dicho comenzó siendo netamente democrático-burgués pero que en un proceso de creciente derechización ha terminado siendo una suerte de ~~verdadera~~ versión contemporánea demo-liberal, ha sido explicitado en una serie de documentos; los más importantes de los cuales, a nuestro parecer, son: el conjunto de trabajos elaborados por especialistas demócratacristianos y que fueron publicados, en enero de 1984,

como "Proyecto Alternativo del PDC"; el ya mencionado "Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia," dado a la publicidad en agosto de 1985 y suscrito por 21 dirigentes de 11 partidos; y los ya también aludidos "Bases de sustentación del Régimen Democrático", firmados por 13 partidos y dadas a conocer el 11 de septiembre de 1986 como "profundización del Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia".

Entre uno y otro proyecto no hay sólo diferencias; sino también como hemos anotado, muchas coincidencias de no poca importancia. No podría ser de otro modo, puesto que por ambas partes lo que básicamente se plantea -y que es lo que debiera constituir fundamento suficiente como para deponer por parte de la centro-derecha su conducta excluyente hacia los comunistas y otras fuerzas de izquierda- es la superación y reemplazo del régimen dictatorial. Son coincidentes, en general, muchas de las bases de sustentación institucionales y políticas que se formulan tanto para el régimen como para el gobierno futuro. Pero, como dice Orlando Millas en su importante ensayo "Las reivindicaciones democráticas actuales del pueblo de Chile": "En Chile tenemos una prolongada experiencia de invocaciones constitucionales y legales a libertades o derechos de gran popularidad y la adopción, por la oligarquía terrateniente antiguamente y luego por la burguesía, de precauciones para que tales libertades o derechos no tuviesen aplicación práctica"(20). Tal es precisamente la suerte que pudieran correr, por la imprecisión -y a veces por la forma francamente inconsecuente- con que están formuladas, muchas de estas cuestiones por parte del proyecto reformista. Mayor es el riesgo aún si se tiene en cuenta que de lo q

que se trata no es de superar cualquier forma de dominación burguesa; sino, concretamente, una dictadura fascista que ya ha pasado la barrera de los quince años en el ejercicio terrorista del poder. Y se trata, además, de superarla de un modo que haga imposible su reedición.

El "Proyecto Alternativo" de la DC, por ejemplo, que según sus autores es definido como de "una democracia renovada y profundizada", se plantea abiertamente en favor del paralelismo sindical. Esto reviste mayor gravedad aún por cuanto en dicho proyecto se preconiza el establecimiento de un Pacto Social entre trabajadores y empresarios. Así, a tal pacto concurrirían todo el capital -incluido el monopolista cuya erradicación no se plantea el proyecto- y una parte de los trabajadores organizada sindicalmente. "Es curioso que en Chile -comenta el economista comunista José Cademártori- ni la Democracia Cristiana ni ningún otro partido político de derecha o de centro ha estimulado la división de los gremios empresariales según sus afinidades ideológicas. En cambio no han faltado y, más hoy que nunca, quienes patrocinan, por todos los medios, la separación de los trabajadores, por motivos ideológicos, políticos o religiosos"(21).

Respecto de la importantísima cuestión de la democratización del aparato del Estado, lo más grave en el proyecto liberal reformista son las omisiones e imprecisiones sobre los cambios que deben experimentar el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. En cuanto al primero, tanto en el "Proyecto Alternativo" como en las "Bases de Sustentación" se proclama la necesidad general de su democratización y modernización, cuestión que obviamente es

compartida por el proyecto democrático avanzado. Incluso en el "Proyecto Alternativo" se comparte también la idea de constituir un Consejo Nacional de Justicia que supervise a todo el Poder Judicial y cuya generación sea democrática. Pero nada se dice sobre la democratización y modernización a fondo que requiere la propia administración de la justicia; la cual, en opinión de la izquierda, debe ser simplificada y abaratada con el objeto de garantizar el fácil y justo acceso a ella de los sectores más desposeídos. Se omite también la necesidad de que los miembros de los tribunales superiores sean designados por un período determinado y dejen de tener, como hasta ahora, carácter vitalicio. Pero el aspecto más serio es el relativo a la justicia militar, que durante los años de fascismo ha sido una dependencia de la policía secreta del régimen que ha atropellado con sus arbitrariedades la amplia zona jurisdiccional de la justicia civil y ordinaria. Lo único que se dice en las "Bases de Sustentación" es que los tribunales militares deben quedar bajo la tución de la Corte Suprema. En el proyecto democrático, en cambio, se plantea prácticamente la eliminación de estos tribunales, permitiendo su existencia tan sólo para conocer de los delitos propiamente militares -no los comunes- que hayan sido cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.

En cuanto a las Fuerzas Armadas, todos los documentos del proyecto reformista omiten plantearse respecto de su democratización; sólo reiteran la consabida fórmula de que sean profesionales, jerarquizadas, obedientes y subordinadas a los poderes constitucionales, normas que fueron sangrientamente avasalladas el 11 de septiembre de 1973. La democratización de ellas que plantea la izquierda tiene que ver, en primer término, con su nacio-

nalización; es decir, con el abandono y abolición de la doctrina político-militar norteamericana así llamada "de la seguridad nacional" -que, como hemos afirmado, ha sido el eje del discurso ideológico de la dictadura y sobre la cual nada dicen ninguno de los documentos del proyecto liberal reformista, a pesar de haber sido oficialmente condenada hasta por la Iglesia Católica-, y, además, deben romperse todos los vínculos de dependencia estratégico-militar con los dispositivos del Pentágono, cuestión sobre la cual tampoco se dice una palabra por parte del otro proyecto. La democratización de las FFAA tiene que ver también con la necesaria depuración de sus filas de los elementos fascistas que durante quince años las han arrastrado a cometer crímenes contra el pueblo. La izquierda plantea asimismo la democratización en el acceso a los institutos militares, permitiendo el ingreso a ellos de cualquier ciudadano que tenga vocación para la profesión militar sin ponerle, como hasta ahora, cortapisas de orden político, ideológico o social. Del mismo modo, los programas y planes de estudio de las Escuelas Militares deben ser revisados para asegurar su espíritu de verdadero servicio a la patria, de respeto al pueblo y de adhesión a la preservación de la paz en las relaciones internacionales. También el proyecto de la izquierda aboga por darle solución satisfactoria a las justas reivindicaciones de los soldados, tanto en el campo laboral como en sus derechos cívicos.

El problema de la participación popular y la descentralización del aparato del Estado es planteado por ambos proyectos. El proyecto reformista habla de la "autonomía social", e incluso en las "Bases de Sustentación" se dice que: "Aspiramos a construir

una sociedad civil fuerte y dinámica", le otorga además a los municipios el carácter de "verdaderas instancias de poder local". Son cuestiones con las cuales entonces todos estarían de acuerdo en oposición. Pero el proyecto reformista no abandona la concepción de tutelaje paternalista que siempre ha sustentado sobre el funcionamiento "autónomo" de las organizaciones sociales y populares. Además, esta "autonomía" adquiere características muy engañosas cuando, para asegurarla respecto del Estado, dicho proyecto -concretamente, el "Proyecto Alternativo" de la DC- propone la creación de corporaciones privadas de servicios o bancos privados de desarrollo que canalicen recursos privados internos y también procedentes del exterior que financien las actividades de las organizaciones de participación popular; lo que puede significar, al no plantear la erradicación de los grandes grupos privados financieros, su completa dependencia de éstos. El proyecto de democracia avanzada, en cambio, plantea el asunto de la participación popular como una total integración del pueblo al conocimiento, manejo, fiscalización y solución de los asuntos públicos; es decir, como un verdadero poder popular extendido en todo el cuerpo social.

En el proyecto reformista liberal hay ausencias muy importantes. Por ejemplo, nada se plantea en los documentos mencionados sobre los derechos de nuestros pueblos autóctonos. En particular se trata de mapuches y pascuenses, sin perjuicio de las demás etnias menores que habitan en el extremo norte del país -de origen quechua y aymara- y los restos que aún sobreviven en el extremo austral de la depredación del "hombre blanco". La dictadura ha sido especialmente brutal con los mapuches, atentando,

incluso, por la vía de la disolución territorial, a la disolución de la etnia misma. Ha arrasado con todas las conquistas obtenidas por ellos durante el gobierno popular de Salvador Allende. Respecto de los pascuenses, ha entregado la isla que habitan al dispositivo estratégico-militar de los EEUU, acondicionándola como base de apoyo para dirigir sus misiles nucleares e incluso habilitándola como punto útil para la "guerra de las galaxias". El proyecto democrático aboga por el respeto real a la vida cultural propia de los pueblos autóctonos, al derecho de profesar y practicar sus propias creencias y a emplear sus lenguas. Plantea, sobre todo, la cuestión del derecho a sus tierras y, respetando sus características específicas, está por estimular su integración a todos los aspectos de la vida nacional, incluida su participación en los órganos estatales de gobierno y administración.

En cuestiones de política internacional, si bien en los mencionados documentos del proyecto reformista se habla de establecer relaciones con todos los países del mundo, en el "Proyecto Alternativo" de la Democracia Cristiana se parte de la base que Chile es un "país occidental", y por tanto, declara su mayor afinidad con las naciones que supuestamente corresponderían a una calificación similar; lo que, en realidad, no es sino la adopción de una retrógrada postura ideológica propia de los peores tiempos de la guerra fría.

Pero lo que más aleja al proyecto reformista de la democracia consecuente, acercándolo al liberalismo, son sus opciones en el terreno económico. Sus alusiones a la defensa y garantía de

la propiedad privada sobre los medios de producción ocupan un reiterativo primer plano, al punto de asociarlas a la idea misma de la libertad y democracia. Como contrapartida, la propiedad estatal, mixta y cooperativa se admiten -como textualmente lo dice el "Proyecto Alternativo" de la DC- sólo "en la medida en que sean necesarias". Según dicho "proyecto", el Estado mantendría la propiedad de las empresas que entregan servicios de utilidad pública -electricidad, gas, teléfonos-, así como las de la gran minería del cobre, telecomunicaciones, siderurgia, petróleo y petroquímica -aún cuando en estos casos admite también la sociedad con capitales privados tanto nacionales como extranjeros-. A pesar que le otorga la regulación de todo el sector financiero, plantea que sólo una parte de dicho sistema sea de propiedad pública, dejando la otra parte en manos de la propiedad privada a pesar de todo el desastre económico que durante la dictadura ha significado el control de ese sector por parte de los grandes grupos económicos locales. La administración de los fondos previsionales la define como de propiedad mixta, rechazando definitivamente la idea de que, como aconteció durante décadas, vuelvan a ser una prerrogativa del sector público y a la cual -como plantea la izquierda- debieran integrarse hoy las organizaciones de los propios imponentes. El "Proyecto Alternativo" devuelve a manos del Estado la infraestructura básica -puertos, caminos, ferrocarriles-, también la investigación científico-técnica, la educación, salud y vivienda popular; pero en cuanto al comercio exterior sólo le asigna la tarea de incentivar las exportaciones sin asegurar que las exportaciones de las empresas estratégicas quedan en su poder ni tampoco el comercio de importación, así como otros factores de control sobre el empleo de las divisas. A

pesar de que tanto el "Proyecto Alternativo" como el "Acuerdo Nacional" le asignan al Estado un rol dirigente, activo y determinante en la conducción económica, ambos documentos insisten en que la planificación que haga tenga sólo un carácter "indicativo" y no obligatoria. Pero hay también otros aspectos sobre el rol económico del Estado que en dicho proyecto aparecen sumamente mediatizados. Es el caso de la fijación de los precios, que, pese a todo el fracaso del "modelo" neoliberal aplicado por la dictadura, se insiste en que en su mayor parte sean determinados por el mercado, el cual, en opinión de la izquierda, debe actuar; pero es necesario también que el Estado proteja a los consumidores de los fenómenos especulativos sin limitarse tan sólo, como se dice en el "Proyecto Alternativo", a fijar los precios excepcionalmente de los bienes y servicios de utilidad pública, algunos precios agrícolas, aquellos afectados por las condiciones internacionales y variables estratégicas tales como la tasa de interés, el tipo de cambio y las remuneraciones, cuya determinación se haría sobre la base del Pacto Social. Es decir, los salarios estarían controlados por el Pacto Social; pero los precios correrían en su mayor parte al libre arbitrio del mercado.

Pese a que el "Proyecto Alternativo" condena "la concentración abusiva" de la propiedad y rechaza -por el papel antinacional y desastroso que han jugado en la economía del país durante el fascismo- el rescate y la reconstitución de los más grandes grupos económicos que entraron en crisis, en ningún lugar se pronuncia categóricamente por la eliminación de la propiedad monopólica, ni cuando habla de defender la propiedad privada sobre los medios de producción hace distinciones entre la monopólica y la no-

monopólica. Tampoco lo hacen las "Bases de Sustentación", a pesar de que llega a decir, en términos siempre muy generales y más bien declarativos, que: "la concentración del poder en el Estado o en grupos económicos o financieros constituyen elementos atentarios contra el espíritu de la democracia, su realización y estabilidad"(22).

Respecto de las transnacionales, el "Proyecto Alternativo" acepta su presencia en el país como parte de los aportes de inversión extranjera, siempre que representen realmente aportes de capital, tecnología y conquista de nuevos mercados y su ingreso en la economía nacional sea negociado caso a caso; pero nada dice, como lo hace la izquierda, de mantener sus operaciones bajo la sujeción del código de conducta elaborado por organismos internacionales. El "Proyecto" comparte con la izquierda el criterio de derogar la "Ley Minera" de Pinochet, que le entregó facilidades únicas en el mundo al capital extranjero para apropiarse prácticamente a perpetuidad de yacimientos que contienen enormes reservas; pero, por otra parte, no se pronuncia sobre el Estatuto del Inversor Extranjero, dictado también por la dictadura para entregar patrimonios nacionales a manos de las transnacionales, y sobre el cual la izquierda exige su inmediata derogación.

Tanto el "Proyecto Alternativo" como las "Bases de Sustentación" contienen criterios según los cuales se hace imposible la expropiación como instrumento de política económica o de redistribución patrimonial, admitiéndola sólo en caso de utilidad pública o interés nacional o social, lo que debe ser calificado

por ley, e implicando, en todo caso, el pago de indemnización por el patrimonio económico afectado. La izquierda no se opone en general a que existan normas que regulen los procesos expropiatorios; pero considera que debe tenerse altamente en cuenta que, durante los años de régimen dictatorial, los grupos económicos locales y las transnacionales han profitado de una política a través de la cual se han apropiado de empresas y de parte importante de patrimonios nacionales por la vía de recibir ingentes recursos públicos y la realización de otros tipos de manejos antinacionales, tales como la capitalización de pagarés de la deuda externa transados muy por debajo del valor real de los bienes que se entregan. El proyecto democrático exige el deber patriótico de revisar y reparar este tipo de situaciones.

Finalmente, en los tres documentos mencionados que explicitan el proyecto reformista de salida a la crisis se plantea el problema clave de la deuda externa. En términos generales, se hace con el criterio justo de que la situación es claramente insostenible e inaceptable, de que debe modificarse salvaguardando las necesidades del desarrollo del país. Incluso, en las "Bases de Sustentación" se alude a la necesidad de enfrentar el problema de un modo conjunto con toda la comunidad de países latinoamericanos. Por su parte, el "Proyecto Alternativo" esboza una condena general sobre la política de diktat que impone el Fondo Monetario Internacional. Pero, una vez más, tales documentos se expresan de un modo exageradamente declarativo. La situación es tal que amerita criterios y acuerdos concretos. Por lo demás, así están operando hace ya un tiempo muchos países latinoamericanos. El proyecto democrático avanzado ha planteado propuestas

precisas, a saber: que se declare, como primera medida, una moratoria en el pago de la deuda externa por lo menos durante diez años al cabo de los cuales se replantee el problema sobre otras bases. Dentro de estas estaría la recalculación de su monto, resarciéndolo del pago de tasas de interés tan elevadas como las que se han estado sirviendo y de la práctica aplicada por los acreedores de pagar intereses sobre intereses. Las tasas de interés que se paguen deben tener un tope máximo. Al servicio de la deuda, además, debe destinarse tan sólo un porcentaje razonable del total de las exportaciones. Se requiere también establecer una relación inversa entre el servicio de la deuda y la evolución que se produzca en los términos de intercambio: a mayor deterioro de ellos menor debiera ser el servicio y vice-versa. Respecto del FMI, el proyecto democrático avanzado plantea concretamente dejar sin efecto los acuerdos que con él ha suscrito la dictadura, así como los contraídos con el Banco Mundial y la banca acreedora transnacional.

Tal podría ser un resumen muy somero de los aspectos más fundamentales que plantean ambos proyectos opositores. En todo caso, la crisis a la que el fascismo ha llevado al país es tan profunda y aguda que sea cual fuere el gobierno que reemplace a la dictadura tendrá que enfrentarse, objetivamente, a problemas tan tajantes que su solución no admite posiciones intermedias.

## Conclusiones.

Frente a la crisis del fascismo se plantean hoy en Chile tres alternativas de salida: una revolucionaria, una reformista y una contrarrevolucionaria, cada una de ellas levantando su propio proyecto de sociedad. La alternativa contrarrevolucionaria, sustentada por los propios partidarios del régimen y por los círculos más agresivos de la administración norteamericana que ven el desgaste y la pérdida de funcionalidad a sus propósitos de parte de Pinochet y su dictadura, es portadora de un proyecto autoritario y ultraconservador, anticomunista, basado en la mantención del tutelaje militar sobre la sociedad civil y en la inserción del país en el dispositivo de dependencia económica, política y estratégico-militar del imperialismo norteamericano. La alternativa opositora reformista, que comenzó siendo planteada por el centro político pero que hoy es sustentada por una coalición de centr-derecha, ha derivado de un proyecto democrático-burgués a otro que es una versión demo-liberal contemporánea cuyos postulados reformistas se circunscriben a la mantención del capitalismo. La alternativa revolucionaria, sustentada por los comunistas y otros partidos de izquierda, levanta un proyecto de democracia avanzada, antimperialista y antioligárquica, basada en la integración del pueblo al manejo de las cuestiones estatales y públicas, que se plantea la perspectiva del socialismo.

Entre las dos alternativas opositoras de poder se ha establecido, objetivamente, una contienda hegemónica. Ella es la base de las dificultades unitarias en el seno de la oposición chilena. La propuesta de la izquierda es resolverla en la unidad

de la lucha común contra el enemigo común fascista y en la confrontación en la práctica de las posiciones de cada cual, quedando a plena disposición del veredicto popular. La conducta de la centro-derecha ha sido, en cambio, agrupar en torno suyo fuerzas desde la derecha y desde la izquierda con exclusión de los comunistas. El único modo de que la pugna hegemónica se resuelva en los mejores términos y sin que siga retardando el cumplimiento del común objetivo nacional básico y prioritario de terminar con Pinochet y su régimen, es mantener una justa política de extrema flexibilidad táctica por parte de la izquierda y una firme estrategia de movilización combativa de masas.

La esencia de la política de rebelión popular de masas, e incluso la esencia de la perspectiva de la sublevación nacional o levantamiento democrático, expresadas en las formas que mejor interpreten la correlación real de fuerzas en cada momento de la lucha, hace posible la concertación o entendimiento necesario de toda la oposición para acercar el cumplimiento del objetivo común de derribar a Pinochet y su régimen dictatorial. Es el propio movimiento real de la lucha de masas el que ha llenado de un contenido amplio, rico y complejo el concepto estratégico de rebelión popular. De modo tal que el empleo de las más diversas formas de lucha no desaloja, efectivamente, a ninguna de ellas; incluso, siempre sobre la base del más activo combate de las masas, tampoco desaloja la posibilidad de la negociación sobre determinadas condiciones o la lucha electoral cuando ello sea necesario y posible desde el punto de vista de conseguir o abrirle paso al objetivo principal de sacar a Pinochet del poder y terminar con el régimen.

La crisis económica de 1981-1983 se transformó en crisis del fascismo en el poder, ante todo, por el desarrollo de la rebelión de las masas contra el régimen. Ella potenció la pugnas y recomposiciones en el bloque de poder para que derivaran en una verdadera crisis "en las alturas". La crisis política no ha provocado aún la caída del régimen por las vacilaciones y renuencias de la centro-derecha en relación a la lucha de masas y a la unidad de las fuerzas opositoras sin exclusiones, por los realineamientos políticos y de clase verificados en el seno de la izquierda que la llevaron a un proceso más o menos prolongado de dispersión política, ideológica, teórica y de acción que menoscabó transitoriamente su capacidad de conducción, y por la imposibilidad del Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda de mantener la continuidad del movimiento en esas condiciones y en momentos determinados y determinantes. En todo caso, la situación concreta indica que el proceso de crisis del fascismo es irreversible y de la lucha de masas dependerá que entre definitivamente en su fase final; la que, puede decirse, ha comenzado su proceso de maduración.

La flexibilización por parte de los comunistas de su visión inicial sobre el Frente Antifascista obedece a una interpretación correcta, producto del "análisis concreto de la situación concreta", de las condiciones específicas en que se da en Chile la lucha contra el fascismo, en la que participan no sólo antifascistas sino que también no-fascistas. La flexibilización sobre las cuestiones del Gobierno Provisional, la Asamblea Constituyente y el tipo de régimen futuro, así como los esfuerzos por encontrar con las demás fuerzas opositoras un acuerdo común sobre táctica,

vía y objetivos se ubican en el mismo plano y la forma de su planteamiento o replanteamiento depende del estado en <sup>en</sup> que/cada momento se encuentre la correlación de fuerzas. El hilo conductor, estratégico, que le dá continuidad y perspectiva a todas estas operaciones tácticas está en el impulso constante de la movilización combativa de las masas y en la mantención y desarrollo del proyecto histórico de democracia avanzada.

Por su naturaleza, por su mejor correspondencia con las posibilidades y necesidades históricas del desarrollo actual de la sociedad chilena, por las fuerzas motrices que lo promueven, porque se plantea la erradicación definitiva de todas las bases y premisas materiales que hicieron posible el régimen fascista, el proyecto de democracia avanzada es el que está en las mejores condiciones de asegurar la derrota definitiva del fascismo en Chile.-

### Notas al tercer capítulo

- 1.- Lenin, OCCC, Progreso, Moscú, t. 14, p. 1. "La guerra de guerrillas", setiembre 1906.
- 2.- Declaración del Partido Comunista de Chile, diciembre de 1973. En "Documentos oficiales del Partido Comunista de Chile emitidos en Santiago después del golpe militar fascista", sin fecha ni lugar de edición, p. 40.
- 3.- Luis Corvalán, "El futuro de nuestra patria está ligado a la lucha de todos los pueblos por la paz, la libertad y el socialismo", 27 de febrero de 1981. En "La rebelión popular se abre camino en Chile", sin fecha ni lugar de edición, p. 70.
- 4.- Hugo Fazio, "Resumen económico cuarto trimestre 1984". Boletín del Exterior del PC de Chile No 70, marzo-abril 1985, p. 34.
- 5.- Gustavo Marín y Patricio Rozas, op. y ed. cit., p. 188.
- 6.- Informe de la Comisión Política al Pleno del Comité Central realizado en enero de 1985. Boletín del Exterior del PC de Chile No 71, p. 8.
- 7.- Marín y Rozas, op. y ed. cit., p. 186.
- 8.- Hugo Fazio, "Resumen económico cuarto trimestre 1985". Boletín del Exterior del PC de Chile No 77, marzo-abril 1986, p. 43.

## II

- 9.- Luis Corvalán, "Avanzar por el camino de la unidad y de la lucha dominando las más diversas formas de combate". En "La rebelión popular se abre camino en Chile", sin fecha ni lugar de edición, p. 23.
- 10.- Manifiesto del Partido Comunista, septiembre de 1981, en Boletín del Exterior No 50, noviembre-diciembre 1981, pp. 13-14.
- 11.- Proposición de acuerdo político, Consejo Nacional del MEP, Santiago, 30 de mayo de 1986. En Boletín del Exterior del PC de Chile No 79, julio-agosto 1986, p. 26.
- 12.- Luis Corvalán, "Avanzar por el camino...", ed. cit., p. 26.
- 13.- Luis Corvalán, "La tarea de echar a Pinochet", 27 de noviembre de 1982. En Boletín del Exterior del PC de Chile No 57, enero-febrero 1983, p. 5.
- 14.- "Un camino distinto al de la conciliación y la exclusión", Declaración de la Comisión Política del PCCH, octubre de 1986. En Boletín del Exterior del PC de Chile No 81, noviembre-diciembre 1986, p. 34.
- 15.- Informe de la Comisión Política al Pleno del Comité Central realizado en enero de 1985, ed. cit., p. 37.
- 16.- "Al pueblo de Chile" /Manifiesto/, Partido Comunista de Chile, Santiago, agosto de 1985. En Boletín del Exterior No 75.

### III

noviembre-diciembre 1985, p. 23.

17.- cit. por Luis Corvalán en "La palabra del Pleno de octubre", En Boletín del Exterior del PC de Chile No 88, enero-febrero de 1988, p. 8.

18.- Informe para la discusión del Partido Comunista en todos sus niveles, marzo 1984. En Boletín del Exterior del PC de Chile No 65, mayo-junio 1984, p. 24.

19.- Crel Viciani, "Democracia avanzada", Boletín del Exterior del PC de Chile No 84, mayo-junio 1987, p. 59.

20.- Orlando Millas, "Las reivindicaciones democráticas actuales del pueblo de Chile". Boletín del Exterior del PC de Chile No 65, mayo-junio 1984, p. 40.

21.- José Cademártori, "El proyecto alternativo de la Democracia Cristiana: una crítica desde la izquierda". Boletín del Exterior del PC de Chile No 68, noviembre-diciembre 1984, p. 83.

22.- "Bases de sustentación del régimen democrático", El Mercurio /diario/, Santiago de Chile, 11 de septiembre de 1986.

### CONCLUSIONES

La contienda que se libra en Chile entre el régimen dictatorial y las fuerzas democráticas, si se la quiere comprender en su real y definitiva significación histórica, sólo puede y debe ser vista como una expresión concreta y muy aguda del ya prolongado y extendido conflicto regional que se dá entre las fuerzas liberadoras que levantan -como proyecto de salida a la crisis- un programa revolucionario de contenido antimperialista, antioligárquico, democrático y popular, de una parte, y de la otra, la alternativa contrarrevolucionaria impulsada por el imperialismo norteamericano y el capital financiero local asociado a éste.

Tales fuerzas, sin ser por cierto las únicas que actúan, representan sí los términos fundamentales de la contradicción más importante cuya solución, en términos generales, se ha puesto a la orden del día -que en el caso de Chile se expresa como el ~~conflicto~~ conflicto democracia-fascismo-, y que se dá en las condiciones de un agravamiento inusitado de las crisis estructurales de las economías latinoamericanas y de las condiciones de vida de los pueblos como consecuencia, principalmente, del reforzamiento y al mismo tiempo del estado de crisis al que han entrado los mecanismos de la dependencia respecto del imperialismo; lo que, a su vez, es producto de los nuevos requerimientos que plantea la transnacionalización de la economía capitalista, del cuestionamiento del otrora indiscutido liderazgo nor-

teamericano en el sistema capitalista e imperialista mundial y de la resistencia que en los pueblos de la región levanta su política de dominación.

Ante la nueva ofensiva popular que se advierte en la región -inaugurada por el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, reforzada por la caída de la mayoría de los regímenes dictatoriales que existieron en el Cono Sur, y que se expresa en realidades nuevas tales como el desarrollo de una creciente autonomía latinoamericana para enfrentar problemas como el de la deuda externa, la solución política al conflicto centroamericano y la defensa de la soberanía nacional-, el imperialismo norteamericano busca preservar la defensa de sus intereses económicos, políticos y estratégico-militares promoviendo la instalación de regímenes políticos que, aunque representen la reconquista de algunos derechos democráticos, permanezcan bajo la tutela militar reaccionaria y garanticen el funcionamiento de regímenes económicos que resulten funcionales a los nuevos requerimientos de acumulación y de inserción en la economía capitalista mundial planteados por el agudo proceso de transnacionalización del capital y de la producción.

Es este el marco actual en el que se plantea la lucha por la conquista y profundización de la democracia, la defensa de la soberanía nacional y por la superación de la crisis estructural que entraba el desarrollo económico independiente de los países latinoamericanos. Es este también el marco en el que objetivamente se inserta la lucha antifascista en Chile.

Así, cualquier alternativa democrática de reemplazo del régimen dictatorial deberá considerar su viabilidad futura a largo plazo y sus posibilidades de gobernabilidad efectiva enfrentada a problemas cuya envergadura y naturaleza hacen enormemente riesgosa la adopción de soluciones intermedias.

Si no se procede resueltamente al completo desmantelamiento de todo el dispositivo represivo y terrorista que ha operado durante el régimen dictatorial -disposiciones "legales" y aparatos-; si no hay esclarecimiento y justicia respecto de los crímenes cometidos en contra del pueblo, incluyendo la correspondiente reparación para las víctimas y sus familiares y el castigo para los que resulten culpables; si es que no se avanza decididamente en un proceso de democratización profunda y de nacionalización de las Fuerzas Armadas que contemple, en primer término, la depuración de sus filas de los elementos fascistas y el reemplazo de la llamada "doctrina de seguridad nacional" -y de su proyección actual que es la doctrina de los conflictos de baja intensidad- por una doctrina militar verdaderamente patriótica e impregnada de una concepción pacífica respecto de las relaciones interestatales; si es que no se restablece, garantiza efectivamente y reglamenta constitucionalmente el respeto irrestricto de los derechos humanos; si no se restituye y profundiza consecuentemente la materialización del principio de la soberanía popular; y, en el plano económico, si no se erradica la principal base material de la reacción política que es el predominio del capital financiero -ante todo del transnacional- con su secuela de saqueo, parasitismo y superexplotación de los

trabajadores y se adoptan, en cambio, políticas de desarrollo económico nacional independiente y de solución de los problemas más apremiantes de las masas populares, cualquier régimen democrático de reemplazo del régimen dictatorial será eminentemente precario, inestable políticamente, vivirá bajo la constante amenaza de la reedición de la dictadura, será una democracia cautiva, incapaz de superar la crisis.

En las condiciones de la América Latina de hoy, estas tareas se han convertido en el "programa mínimo" de cualquier democracia que aspire a ser históricamente viable, y por tanto constituyen el núcleo de cualquier alternativa revolucionaria. Estas son las cuestiones que tiene en cuenta el proyecto democrático avanzado de los comunistas y otras fuerzas de la izquierda chilena.

Se hace imprescindible, pues, mantener y ~~desarrollar~~ precisar ante las masas permanentemente, sean cuales fueren las circunstancias y fases por las cuales atraviese la lucha, la perspectiva estratégica de dicho proyecto. Al mismo tiempo, éste sólo podrá abrirse paso si es que se le relaciona dialécticamente con las condiciones actuales y concretas de esa lucha en la que interactúan factores y elementos político-sociales muy diversos.

En Chile, además de las alternativas mencionadas, se levanta una alternativa reformista sustentada principalmente por el centro político; pero respaldada también por sectores de derecha no ~~es~~ fascista e incluso por entidades de izquierda que



de acuerdo político que reúna al conjunto de las fuerzas opositoras sin exclusiones.

En la comprensión de esta dialéctica se basa la política de los comunistas, su estrategia y su táctica, su política de alianzas, el planteo de su proyecto democrático revolucionario y, al mismo tiempo, la disposición a llegar a los acuerdos que sean necesarios aunque ellos impliquen, en lo inmediato, una salida más limitada. La política de rebelión popular de masas -que en esencia significa impulsar la más amplia unidad opositora y una estrategia de resuelto enfrentamiento a la dictadura sobre la base de la lucha de masas en sus más diversas formas, medios y métodos-, incluso la perspectiva de una sublevación nacional o levantamiento democrático como posibilidad que pudiera ponerse a la orden del día para poner fin a la dictadura, deben ser entendidas en el conjunto de esa dialéctica; porque, si bien es cierto que ellas están concebidas para obtener la salida más avanzada posible, los comunistas aseguran que, en todo caso, hasta para la solución más limitada es imprescindible el más enérgico y unitario protagonismo popular. Los hechos, incluso con posterioridad al triunfo democrático del 5 de octubre de 1980, han venido demostrando que esta es la posición más realista.

Las necesidades objetivas de unidad y amplia lucha de masas, no obstante, no han sido correspondidas en el caso de Chile a nivel de un acuerdo político de toda la oposición; lo que constituye el principal factor que ha determinado la larga duración de un régimen dictatorial que, además del fuerte respai-

do del imperialismo norteamericano, de la oligarquía local y de Fuerzas Armadas que han logrado ser mantenidas bajo la ~~ya~~ obediencia a sus mandos fascistas, no posee una base de sustentación social suficiente como para haber logrado una consolidación en el poder que verdaderamente nunca se llegó a producir.

En el plano de los planteamientos políticos, la insistencia unitaria de los comunistas y otras fuerzas de izquierda -que ha llegado a expresarse hasta en propuestas de acuerdo sobre plataforma programática inmediata y mínima, objetivos, estrategia, e incluso táctica- ha sido persistentemente rechazada por la centro-derecha opositora; pese a la evidencia de que las proposiciones de la izquierda recogen efectivamente un clamor unitario que durante ya quince años no ha dejado de expresarse a nivel de base popular y de materializarse en repetidas ocasiones en el ámbito de las organizaciones y movimientos sociales de masas, incluso con la frecuente participación de dirigentes nacionales e intermedios de filiación partidaria de centro o de derecha.

La principal responsabilidad histórica por la falta de un acuerdo político mínimo corresponde, objetivamente, a determinadas cúpulas dirigentes de la centro-derecha opositora, particularmente las que predominan en la actual dirección de la Democracia Cristiana. Dicha responsabilidad sólo puede ser juzgada desde el punto de vista de los intereses políticos y económicos que están en juego; sin dejar de tener en cuenta, claro está, que para cualquier fuerza democrática la política tiene ine-

vitables connotaciones también en el campo de la ética.

Lo que ocurre es que la dictadura fascista, al cumplir su misión de interrumpir el proceso revolucionario que se encontraba en curso y reimponer el predominio del capital financiero tanto local como, sobretodo, imperialista ha llevado al desarrollo capitalista en el país a niveles notoriamente superiores a los pre-existentes. El actual grado de concentración y centralización del capital y de la producción, las nuevas tasas de superexplotación a las que son sometidos los trabajadores -y que, dicho sea de paso, se obtienen más bien por concepto de plusvalía relativa que de plusvalía absoluta; lo que está señalando un aumento de la productividad del trabajo que se dá particularmente en determinados sectores que han adquirido un notorio dinamismo-, el reemplazo de las relaciones semi-feudales que predominaban en el campo chileno por un rápido desenvolvimiento de las relaciones capitalistas de producción agraria, el acelerado proceso de transnacionalización de la actividad industrial, financiera y de servicios -particularmente en los últimos años- que ha significado una creciente fusión del capital imperialista con los grupos económicos "locales", el propio hecho de que la penetración del capital transnacional haya adquirido, sobretodo últimamente, características conglomerales, son otros tantos indicadores de que la operación salvataje del capitalismo en Chile no ha consistido tan sólo en restituirlo a los niveles anteriores, ni mucho menos retrotraerlo en su desarrollo; sino en impulsarlo a grados superiores que lo hagan compatible y funcional con los nuevos requerimientos de acumu-

lación, inserción en la división internacional capitalista del trabajo y transnacionalización de todo el sistema capitalista mundial. Es este un proceso que, desde el punto de vista de los intereses del capitalismo y del imperialismo mundial, responde a las necesidades objetivas más apremiantes de su desarrollo contemporáneo. Por ello es que cualquier alternativa de reemplazo del régimen dictatorial que se plantee dentro de los marcos del sistema se verá abocada, a fin de cuentas y en el mejor de los casos, a su ~~xxx~~ perfeccionamiento, a molijerar sus efectos más ~~xxxx~~ salvajes, a sensibilizarlo en sus aspectos sociales en la medida de lo posible; pero no a modificarlo sustancialmente. Tal es el destino del reformismo contemporáneo, y es por ello que el gran objetivo de la centro-derecha opositora chilena -particularmente de la derecha demócratacristiana- es transformarse en el gran partido burgués del actual desarrollo capitalista chileno.

Las diferencias de principios, de objetivos, de proyecto político, de estrategia y de tácticas que se dan en ~~xxxxxxx~~ la oposición chilena son componentes de una contienda hegemónica que objetivamente está planteada entre las fuerzas reformistas y las fuerzas revolucionarias que integran ~~xxxxxxx~~ las dos alternativas de poder opositoras. La tradicional gravitación que han tenido las masas y sus organizaciones sociales en la política chilena, y que se ha acentuado en los años de lucha antifascista, hace que la pugna por la conducción del movimiento opositor sea muy activa y a todo nivel. Estas son las cuestiones que están en el fondo de las dificultades unitarias que hasta ahora han persistido en la oposición chilena.

Existen pues, en el caso chileno, condicionantes objetivas que dificultan esta unidad y, al mismo tiempo, necesidades igualmente objetivas que la hacen obligatoria si es que se trata de cerrarle efectivamente el paso a la alternativa contrarrevolucionaria.

Los comunistas afirman que existen, además y pese a todo, las posibilidades reales suficientes como para hacer pesar más las necesidades que obligan objetivamente a la unidad que las dificultades que objetivamente la interfieren. Por ello es que en sus propuestas han querido despejar las cuestiones más de fondo planteando que, sin perjuicio de las diferencias de principios y de proyecto político, se establezcan acuerdos y transitorias obligaciones mutuas en torno a los objetivos más inmediatos y a cuestiones estratégicas y tácticas suficientes como para conformar una vía concreta en común que, basándose siempre en la movilización popular, tampoco desaloje por principio la posibilidad de una negociación justa, abierta y conveniente para la democracia con las Fuerzas Armadas. Todo ello, sin cuestionar las coaliciones político-partidarias actualmente existentes que reflejan las particulares políticas de alianzas de cada cual, y sin poner como requisito previo la cuestión de la participación en el gobierno que en lo inmediato surja en reemplazo de la dictadura. Así, los comunistas han propuesto resolver la cuestión de la hegemonía en el marco de la lucha común contra el enemigo común y en la contrastación en la práctica de las propuestas de cada cual; dejando la decisión sobre el futuro de más largo plazo a la determinación del pueblo cuan-

do éste pueda expresarse con entera libertad y en las condiciones democráticas creadas de conjunto.

A pesar de que tales propuestas despejan objetivamente las dificultades de fondo, la centro-derecha opositora -y principalmente la actual dirección demócratacristiana- persiste en su rechazo al acuerdo con los comunistas, aún reconociéndolos como factor político-social gravitante e insoslayable en la vida nacional. La única forma de vencer esta resistencia -y así puede quedar demostrado tanto en la teoría como en la práctica- es priorizando el despliegue efectivo de todo el potencial de organización, unidad y movilización contenido en la base popular. Para ello es imprescindible reforzar y ampliar el carácter ~~xxxx~~ nacional-popular de la presencia y el accionar político-social de los comunistas y de la ~~xx~~ izquierda revolucionaria, enriquecer aún más la dialéctica de las reivindicaciones políticas generales con las reivindicaciones más específicas e inmediatas de cada sector social y apoyarse mucho más vastamente -y mucho más incisivamente- en el enorme potencial de movilización independiente de las cúpulas político-partidarias que ha desarrollado el pueblo en los últimos años a través de sus organizaciones ~~xxxxxxx~~ sociales.

El Partido Comunista ha venido desarrollando criterios de este tipo en la medida que ha venido experimentando la superación de ciertos retrasos que, en su momento, han incidido negativamente en la situación. Uno de esos retrasos, tal vez el más importante desde el punto de vista teórico-político, ha

radicado en no haber captado oportunamente y en toda su integridad el contexto internacional en el que se inserta el proyecto contrarrevolucionario en Chile. Se trata, en primer término, de la necesidad cada vez más imperiosa de conocer a cabalidad el complejo funcionamiento actual del capitalismo y sobretodo del imperialismo como sistemas mundiales, sus nuevos requerimientos, el desarrollo actual de su sistema de contradicciones, la perspectiva histórica que se han trazado hacia la solución de ellas en favor de sus intereses más cardinales, la forma en que ésto se expresa en nuevas realidades regionales -tales como la manifestación de una creciente autonomía latinoamericanista no sólo va por parte de los pueblos de la región, sino de muchos gobiernos burgueses- y que también resulta imprescindible y urgente asumir en su integridad; en fin, la forma en que cada fuerza política y social de la nación chilena se relaciona con estas tendencias internacionales.

Este tipo de insuficiencias son las que han estado en el fondo del hecho de haberle supuesto al régimen dictatorial una precariedad mucho mayor de la que realmente posee, de la insistencia manifestada durante los primeros años de dictadura en orden a conformar un frente antifascista con formas y criterios que correspondieron a experiencias de otro momento y lugar históricos, de la errónea apreciación que imperó durante un tiempo sobre un supuesto fracaso en general de la política económica de la dictadura sin advertir sus proyecciones hacia un salto cualitativo en el desarrollo del capitalismo transnacionalizado en el país, del carácter liberal con que «decidió principalmente al desarrollo transnacional del capitalismo- se pre-

senta el reformismo actual y que es lo que está en la base del surgimiento en Chile de la llamada centro-derecha opositora -fenómeno político cuya realización la izquierda chilena no estuvo en condiciones de impedir- y de la influencia contradictoria que sobre ella ejerce la administración norteamericana.

Desarrollando la comprensión cada vez más íntegra de las nuevas realidades, y transformándolas en accionar político-social concreto, la izquierda chilena y los comunistas están en condiciones de aprovechar mucho mejor el hecho objetivo de que las premisas materiales de su proyecto democrático avanzado sean históricamente convergentes con aquellas que determinan el cumplimiento del objetivo nacional básico y más prioritario de este momento, que es el de establecer la forma más adecuada y realista de acuerdo político opositor en la lucha de masas que debe y puede terminar lo antes posible con Pinochet en el poder y con el régimen dictatorial que éste ha encabezado.

Porque para viabilizar el proyecto de democracia avanzada en Chile es necesario generar una correlación de fuerzas favorable a los sectores más consecuentemente democráticos que sea estable en términos estratégicos y que abarque sólidamente todos los planos de la sociedad. Cuestión que sólo es alcanzable a través del accionar del movimiento político y social más vasto y multifacético que se haya podido conformar jamás en la historia de Chile, movilizándolo al pueblo entero, a la mayoría de la sociedad chilena, a todas las clases, capas, partidos, tendencias, movimientos, organizaciones, instituciones, personalidades y corrientes de pensamiento que constituyen el acer-

vo democrático de la nación. La consistencia de una alianza tan abarcadora vendrá dada por la conformación de un núcleo dirigente en el que participen aquellas clases y capas -y sus representaciones políticas- que en su conjunto reúnan el mayor peso social específico, tengan coincidencia objetiva de intereses cardinales, ocupen lugares decisivos en el proceso de reproducción social, tengan una firme vocación democrática, un alto nivel de organización independiente y disciplinada, experiencia política, poder de convocatoria nacional y de iniciativa y experiencia en la organización de los asuntos públicos. Tales características las reúnen en Chile, en primer lugar, la clase obrera y también las capas medias urbanas y rurales. Por ello es que el problema de la hegemonía debe ser visualizado en el marco de una alianza estratégica entre ambos conglomerados sociales. La perspectiva debe ser la de conformar con ellos la base de un amplio bloque histórico de poder, social y político, de carácter democrático, nacional, popular, antioligárquico y antimperialista que, a través de un programa, de una estrategia y de tácticas de desarrollo nacional económico, político, social y cultural de elaboración común, garantice una conducción única y acertada que se exprese en unidad de acción, unidad de voluntad y unidad de disciplina.

Los resultados del plebiscito del 5 de octubre de 1960, y la situación política creada posteriormente en el país a raíz de ellos, pusieron de manifiesto el grado de maduración de las condiciones objetivas para que el período de crisis del régimen dictatorial dé paso a su etapa de finalización. Al mismo tiempo, no descartaron ni mucho menos la posibilidad de la al-

ternativa contrarrevolucionaria. Ella continúa vigente y podría llegar a imponerse incluso en el escenario electoral previsto por la institucionalidad fascista. En esa perspectiva es que, de una parte, las fuerzas que han respaldado a la dictadura se aprestan a emprender su campaña electoral, y de la otra, Pinochet y los sectores del régimen más allegados a él rechazan cualquier modificación del marco institucional que han impuesto y aceleran la privatización y transnacionalización de la economía con vistas a convertirla en una realidad cada vez más difícil de modificar.

En tales condiciones, los comunistas y la izquierda deberán emplearse a fondo con el objeto de imponer a la centro-derecha opositora, a través de la movilización de las masas por sus reivindicaciones generales y inmediatas, de la firmeza con que se continúe planteando y precisando el planteo estratégico de una ~~democracia~~ democracia avanzada y de la extrema flexibilidad táctica que requiere arribar a los acuerdos mínimos indispensables en lo inmediato, algún tipo de entendimiento político que permita presentar en la actual coyuntura un solo frente opositor.-

Orel Viciani.